

Índice Glocal de Seguridad Humana en Ciudad Juárez, México



Una Medición Integral de la Seguridad con Enfoque de Derechos



Índice Glocal de Seguridad Humana en Ciudad Juárez, México

Una Medición Integral de la Seguridad con Enfoque de Derechos

EN ALIANZA CON



CON EL APOYO DE



Autoría

Alexandra Abello Colak
Alan Pavel Vallejo Chavarría
María del Socorro Velázquez Vargas
Wilebaldo Martínez Toyas

Índice Global de Seguridad Humana

El Índice Global de Seguridad Humana fue desarrollado por *Security 4 Peace* a partir del marco conceptual y analítico propuesto por Alexandra Abello Colak, con el acompañamiento metodológico de Jorge Mario Ramírez. Su adaptación y aplicación en Ciudad Juárez se realizó en alianza con *NOS Catalyst*, bajo la coordinación de Pavel Vallejo. La metodología estadística fue diseñada y coordinada por Wilebaldo Martínez Toyas y María del Socorro Velázquez Vargas. El índice contó con el apoyo tecnológico de PIO Software y DaVinci.

Agradecimientos

El Índice se aplicó en Ciudad Juárez con el valioso apoyo de la Alcaldía de Ciudad Juárez, a través de la Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación de Resiliencia. Expresamos un especial agradecimiento a las encuestadoras y encuestadores, cuyo compromiso, sensibilidad y profesionalismo en el trabajo de campo hicieron posible la producción de este trabajo.

Abello Colak, A., Vallejo Chavarría, A. P., Velázquez Vargas, M. S., Martínez Toyas, W. (2025) Índice Global de Seguridad Humana en Ciudad Juárez, México: Una Medición Integral de la Seguridad con Enfoque de Derechos. Security4Peace. Available at: <https://security4peace.org/publications>

© 2025 Security 4 Peace. Todos los derechos reservados
Este trabajo está bajo la licencia CC BY-NC-ND 4.0

Foto Portada: Miss Pueblos Mágicos / Pexels
Disponibile en Pexels.com bajo licencia de uso libre

Tabla de Contenido

1.	Presentación	1
2.	Resumen Ejecutivo	3
3.	¿Qué es el Índice Glocal de Seguridad Humana y para qué sirve?	8
4.	Estado de la Seguridad Humana en Ciudad Juárez por Dimensiones	15
4.1	Seguridad Personal	17
4.2	Seguridad Económica	23
4.3	Seguridad Alimentaria	32
4.4	Seguridad en Salud	37
4.5	Seguridad Política	43
4.6	Seguridad Comunitaria	48
4.7	Seguridad Ambiental	56
4.8	Seguridad Ontológica	62
4.9	Seguridad Tecnológica	68

5.	Inseguridad Humana: Perspectiva Multidimensional y Poblacional	74
5.1	Seguridad Humana de las Mujeres	80
5.2	Seguridad Humana de Adolescentes y Jóvenes	89
5.3	Seguridad Humana de Adultos Mayores	99
6.	Conclusiones y Recomendaciones	107
7.	Apuntes Metodológicos	113
8.	Referencias	119
9.	Anexos	120
10.	Equipo Responsable del Informe	124

1. Presentación

En noviembre de 2024 se llevó a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, la primera Encuesta de Seguridad Humana, con el objetivo de recolectar información primaria sobre las experiencias, percepciones y necesidades de protección de sus habitantes. Este ejercicio pionero permitió construir el **primer diagnóstico detallado y medible sobre el estado de la seguridad humana** en la ciudad, mediante la adaptación del **Índice Glocal* de Seguridad Humana**, desarrollado por *Security 4 Peace*, al contexto local en alianza con *NOS Catalyst*.

Este índice marca un hito para Ciudad Juárez y establece un ejemplo inspirador para otras ciudades que buscan diseñar **políticas de seguridad integrales basadas en evidencia**, con un enfoque que respete los **derechos humanos** y atienda las raíces estructurales de la violencia.

El Índice Glocal de Seguridad Humana usa un enfoque innovador para comprender y medir la seguridad que parte de una premisa esencial: la seguridad no debe medirse únicamente en términos de ausencia de violencia y posibilidad de **vivir libres de amenazas**, sino también como la posibilidad de todas las personas de **vivir libres para ejercer plenamente sus derechos**.

Este enfoque reconoce que **la seguridad es multidimensional** y se refiere a la protección a la que tienen acceso las personas frente a diversos factores que amenazan la vida, la salud, el sustento y la dignidad, por ello incluye en su medición no solo riesgos físicos, psicológicos y materiales derivados de violencias y criminalidad, sino también aquellos asociados a condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales.

Considera también factores como la exposición a situaciones de discriminación y exclusión social; el acceso a servicios esenciales y entornos urbanos seguros y saludables; y los beneficios y riesgos de las tecnologías. De este modo, el índice glocal ofrece una visión integral que permite entender tanto las **experiencias objetivas** como las **percepciones subjetivas de inseguridad** en diversos ámbitos de la vida cotidiana.

Este informe demuestra que es posible medir la seguridad humana de manera rigurosa, generando **evidencia para orientar la acción colectiva**. Más allá de describir un panorama complejo, busca hacer visibles las necesidades de protección de la población de Ciudad Juárez, contribuir al debate público con evidencia sólida y sistemática, y apoyar la acción coordinada y transformadora del Estado, la sociedad civil, el sector privado, las comunidades y otros actores clave.

El documento se estructura en seis secciones. La primera es el Resumen Ejecutivo, que sintetiza los hallazgos más relevantes. La segunda sección explica qué es el índice, para qué sirve y detalla la ruta metodológica que se sigue para medirlo. La tercera sección presenta los resultados de la aplicación del índice en la ciudad, desglosando los hallazgos en **nueve dimensiones de la seguridad humana**, y destacando **diferencias territoriales** por zonas. La cuarta sección analiza los niveles de seguridad que experimentan **grupos particularmente vulnerables**, como mujeres, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Posteriormente, el informe presenta algunas conclusiones y recomendaciones que señalan posibles caminos para impulsar acciones que mejoren la seguridad. Finalmente, se incluye una sección metodológica, en la que se detallan los aspectos técnicos sobre cómo se construyó y aplicó el índice.

En conjunto, este informe permite identificar diferentes facetas de la desigualdad urbana y ofrece ideas para seguir avanzando hacia una Ciudad Juárez donde todas las personas tengan garantizado su derecho a vivir seguras, ejercer plenamente sus derechos y alcanzar su máximo potencial.

* La palabra glocal se refiere a la capacidad de comparar la situación de (in)seguridad humana a nivel global, al mismo tiempo que se consideran las características específicas de los contextos locales.

Para medir la seguridad, el Índice Glocal de Seguridad Humana considera **nueve dimensiones fundamentales**, en las que la seguridad —o la ausencia de esta— se manifiesta en nuestra vida.



Seguridad Personal
Protección frente a daños causados por cualquier forma de violencia.



Seguridad Política
Protección de los derechos fundamentales, incluido el derecho a participar en asuntos públicos.



Seguridad Económica
Protección de los medios de subsistencia.



Seguridad Ontológica
Protección de la dignidad y el sentido de relevancia social de las personas.



Seguridad Alimentaria
Protección del acceso confiable a alimentos y a una nutrición adecuada.



Seguridad Ambiental
Protección frente a desastres, amenazas ambientales y condiciones peligrosas del entorno construido.



Seguridad en Salud
Protección de la salud mental y física y del acceso a servicios médicos de calidad.



Seguridad Comunitaria
Protección de la convivencia pacífica entre miembros de una comunidad y de su capacidad para funcionar como sistemas de apoyo.



Seguridad Tecnológica
Protección frente a los riesgos derivados del uso de tecnologías y acceso a sus beneficios.

El índice reconoce la **inseguridad humana** como un fenómeno **complejo, cotidiano y multidimensional**, que no se limita a una amenaza puntual, sino que refleja el modo en que **diversas formas de vulnerabilidad se acumulan e intersecan** en la vida de las personas.

2. Resumen Ejecutivo

Este informe presenta el **primer diagnóstico integral, multidimensional y territorializado sobre el estado de la seguridad humana** en Ciudad Juárez. Como ejercicio pionero, sus resultados deben entenderse como una herramienta orientada a la toma de decisiones, el diseño de políticas públicas más eficaces y la articulación de estrategias colaborativas de prevención y protección entre diversos actores de la ciudad.

En Ciudad Juárez, como en otras ciudades, el debate público sobre seguridad ha estado centrado en la reducción de delitos y prevención de la violencia, que, si bien son determinantes, no agotan la experiencia cotidiana de inseguridad. Este informe revela que para las y los juarenses, la seguridad va más allá de la ausencia de violencia y crimen: también implica la **protección efectiva frente a amenazas que afectan su vida, sustento, dignidad y el ejercicio de sus derechos fundamentales**.

Con base en una encuesta representativa aplicada en noviembre del 2024 a personas mayores de 15 años en las cuatro zonas de la ciudad (Norponiente, Nororiente, Surponiente y Suroriente), el Índice Glocal de Seguridad Humana midió la **intensidad de la inseguridad que experimentaron las personas en el último año**, considerando tres factores: 1) la exposición a amenazas en nueve dimensiones de la vida; 2) el acceso a medios de protección institucionales, comunitarios e individuales; y 3) la libertad para ejercer derechos fundamentales.

A diferencia de otros enfoques para evaluar la seguridad urbana centrados en la comisión de delitos y la percepción de inseguridad, este índice concibe la seguridad como un proceso dinámico e interdependiente. El Índice Glocal de Seguridad Humana utiliza un **modelo multidimensional, escalonado y sistémico**, basado en 47 clústeres de indicadores objetivos y subjetivos, para captar la experiencia vivida de la seguridad más allá de su percepción.

El índice mide la **vulnerabilidad de las personas en nueve dimensiones**: seguridad personal, económica, alimentaria, en salud, política, comunitaria, ambiental, ontológica y tecnológica. Además, evalúa la **intensidad de la inseguridad humana** que experimentan las personas según el número y el tipo de dimensiones que tienen vulneradas, otorgando mayor peso a cuatro dimensiones prioritarias: personal, económica, alimentaria y en salud, ya que están directamente vinculadas con necesidades básicas universales, la supervivencia y las condiciones mínimas para una vida digna.

A partir de estos datos, el índice asigna un **puntaje entre 0 y 1 para la ciudad y sus zonas geográficas**: un valor de 0 indica una situación extrema, en la que toda la población se encuentra en condiciones de inseguridad severa; mientras que un valor de 1 representa un estado óptimo de seguridad humana, en el que nadie experimenta niveles de inseguridad superiores al nivel leve.

Los resultados muestran un panorama complejo. Durante el año 2024, una proporción considerable de la población experimentó altos niveles de vulnerabilidad de manera simultánea en múltiples dimensiones. Las dimensiones de **seguridad económica, ambiental, política, comunitaria, personal y ontológica** concentraron el mayor número de personas en condiciones de **riesgo elevado**, lo que subraya la necesidad urgente de implementar políticas integrales que garanticen condiciones básicas de seguridad, dignidad y bienestar para toda la población.

Cabe resaltar que **en ocho de las nueve dimensiones evaluadas no se identificaron personas en condiciones extremas de vulnerabilidad**. No obstante, la acumulación de riesgos medios y altos en varias esferas de la vida cotidiana llevó a que **más de dos tercios** de la población juarense experimentaran un **nivel severo de inseguridad humana multidimensional** en 2024. Es decir, que experimentaron simultáneamente niveles medios y altos de vulnerabilidad en la mayoría de las dimensiones.

Sin duda, la situación de seguridad humana en Ciudad Juárez está profundamente marcada por la violencia, que ha dejado huellas en todos los territorios de la ciudad. Un dato revelador es que **alrededor de una de cada cinco personas ha perdido a un ser querido por hechos violentos en los últimos cinco años**. Este indicador evidencia que la violencia letal no es un fenómeno aislado, sino una experiencia extendida y transversal que impacta emocional, social y comunitariamente, generando una forma de trauma social acumulado. El índice toma en cuenta estos impactos en la salud mental, la cohesión y la confianza comunitaria.

En cuanto a las amenazas a la vida derivadas de diversas formas de violencia y criminalidad en el último año, el índice midió la **seguridad personal** considerando experiencias de victimización, percepción de inseguridad y exposición a violencia física, psicológica, sexual o digital.

También se evaluaron factores como la confianza en la policía, la disposición a denunciar delitos, la existencia de redes de apoyo y la disponibilidad de servicios para víctimas. Los resultados muestran que el 34.9% de la población cuenta con condiciones adecuadas y estables de protección. Para el 10.4% que experimentó alta vulnerabilidad hubo una mayor exposición a diversas formas de violencia y acceso limitado a mecanismos de protección.

Sin embargo, la violencia no es la única problemática que amenaza la vida y el bienestar de las personas en la ciudad. Los hallazgos revelan que 8 de cada 10 personas en Ciudad Juárez estuvieron expuestas a múltiples factores de riesgo ambiental, como deficiencias en infraestructura, exposición a riesgos ambientales y acceso limitado a servicios esenciales, lo que en 2024 restringió su derecho a vivir en un entorno limpio, seguro y digno. Entre estas personas, el 24% experimentó alta vulnerabilidad y el 56% vulnerabilidad media en su **seguridad ambiental**. La mayoría de ellas reside en el Surponiente y el Norponiente. Estas carencias no solo afectan la salud y el bienestar diario, sino que también limitan la capacidad de protección y adaptación ante emergencias. Por ello, la seguridad ambiental se configura como una dimensión estratégica para reducir desigualdades y avanzar hacia una ciudad más habitable y resiliente.

Frente a las amenazas al sustento y la estabilidad financiera, el índice muestra que una cuarta parte de la población experimentó baja vulnerabilidad y contó con condiciones de **seguridad económica** estable, sin que se identificaran personas en situación de vulnerabilidad extrema. Sin embargo, un 27% enfrentó alta vulnerabilidad, lo que les obligó a adoptar estrategias de supervivencia que conllevan nuevos riesgos, como el endeudamiento informal o la aceptación de trabajos no deseados. La inseguridad económica se manifestó en ingresos insuficientes, empleos precarios y acceso limitado a apoyos económicos, ahorro o seguros. Además, las desigualdades de género, edad y territorio agravan esta situación, afectando con especial intensidad a mujeres, personas adultas mayores y habitantes del Suroriente y el Norponiente.

La **seguridad alimentaria** mostró resultados positivos: la mayoría de la población tuvo acceso confiable a alimentos. Para la población que experimentó vulnerabilidad en esta dimensión, las redes de apoyo familiar y comunitario jugaron un papel importante para mitigar la escasez. Sin embargo, existen brechas en la cobertura de apoyos alimentarios y programas de asistencia, especialmente para personas vulnerables que no recibieron ayuda a pesar de necesitarla. Las zonas del Norponiente y Suroriente concentran las mayores carencias alimentarias, por lo que es prioritario fortalecer las intervenciones en estos territorios y reducir el 9% de personas que enfrentaron alta inseguridad alimentaria.

La **seguridad tecnológica**, que evalúa el acceso a los beneficios de la tecnología y la protección frente a sus riesgos —como el ciberacoso o los fraudes digitales— mostró niveles favorables: una parte importante de la población se encuentra en condiciones de baja vulnerabilidad, en buena medida gracias a la amplia conectividad digital en Ciudad Juárez. Sin embargo, el índice destaca la necesidad de abordar riesgos específicos, como la exposición a contenido violento en redes sociales, la suplantación de identidad, el desplazamiento laboral por automatización y la falta de formación básica sobre el uso seguro de tecnologías. Atender estos factores es clave para reducir la alta vulnerabilidad que experimentó el 21.4% de la población, especialmente en las colonias del Norponiente.

Otro determinante en la experiencia de seguridad de las personas es la posibilidad de vivir en comunidades capaces de gestionar los conflictos y de funcionar como redes de apoyo. El índice muestra que, aunque muchas personas valoran su colonia como un buen lugar para vivir, el 13% presenta un nivel de vulnerabilidad alto y extremo en la **dimensión comunitaria**. Esto revela vínculos sociales frágiles, escasa infraestructura de apoyo colectivo y poco acceso a centros de mediación o espacios de resolución de conflictos. La ausencia de estas herramientas locales afecta especialmente a las zonas del Norponiente y Suroriente, y subraya la necesidad de esfuerzos intersectoriales para fortalecer el tejido comunitario, y generar espacios de encuentro, convivencia y resolución pacífica de los conflictos.

Esta situación incide directamente en la **seguridad política**, entendida como la protección de derechos cívicos, incluyendo el derecho a participar en los asuntos públicos. En esta dimensión, el 38% de la población presentó vulnerabilidad alta y extrema. Estos resultados se explican, en gran medida, por desconfianza hacia las instituciones públicas —especialmente la policía—, el temor a expresar opiniones libremente por posibles represalias, y la percepción de riesgo al participar en elecciones, protestas o sindicatos. La limitada participación e incidencia ciudadana fue evidente: El 72.9% de las personas afirmó no haber tenido la posibilidad de participar en decisiones que afectan a su comunidad durante el último año.

Los obstáculos a la participación contribuyeron a los niveles de vulnerabilidad en la **dimensión ontológica**, que se refiere a la protección del derecho a la dignidad y al sentido de relevancia social. El 9% de la población experimentó alta vulnerabilidad en esta dimensión. Los jóvenes fueron el grupo más afectado, especialmente quienes habitan en el Norponiente, lo que evidencia una crisis silenciosa de reconocimiento.

Esta se manifiesta en experiencias de discriminación, estigmatización, maltrato institucional, exclusión social y política, así como en condiciones de precariedad urbana.

En este contexto, y reconociendo los impactos que diversos factores tienen sobre la salud física, emocional y psicológica de las personas, el índice midió la **seguridad en salud**, entendida como la protección del derecho a la salud y el acceso a servicios médicos de calidad. Los resultados revelan que el 57% de la población enfrentó vulnerabilidad media o alta en salud, debido a dificultades para acceder a atención médica física y mental, así como a la acumulación de factores de riesgo como el estrés crónico, enfermedades no tratadas, entornos precarios y situaciones de violencia. Aunque esta situación afectó a todos los grupos sociales, fue particularmente grave entre personas adultas mayores, mujeres y hombres jóvenes.

El índice también evidenció profundas desigualdades territoriales. **El lugar de residencia condiciona de forma determinante el acceso a derechos, oportunidades y protección.** La Zona Nororiente registró el mejor índice de seguridad humana (0.5), lo que sugiere una mayor proporción de personas con niveles bajos de vulnerabilidad. Le sigue la Zona Surponiente, con un puntaje intermedio de 0.4. En contraste, las Zonas Norponiente y Suroriente presentaron los niveles más bajos, con puntajes de 0.3, reflejando una acumulación persistente de carencias y amenazas que afectan a amplios sectores de su población. Estas marcadas diferencias reafirman la necesidad de implementar políticas públicas con un enfoque territorial que atienda las realidades específicas de cada zona de la ciudad.

A nivel poblacional, las **mujeres** enfrentaron mayores niveles de inseguridad multidimensional y mostraron mayor vulnerabilidad en todas las dimensiones de la seguridad humana. El 51.6% de ellas vive en condiciones de inseguridad severa, frente al 42.8% de los hombres, lo que confirma una **carga acumulada de vulnerabilidad** que debe abordarse con enfoque de género. Por su parte, las **personas adultas mayores** enfrentan una **inseguridad humana invisible pero extrema**: solo el 2.1% experimenta condiciones de inseguridad multidimensional leve.

Adolescentes y jóvenes en Ciudad Juárez también enfrentan altos niveles de inseguridad humana de forma persistente y multidimensional. Más del 60% de los adolescentes y el 65% de los jóvenes viven condiciones de inseguridad severa o sustancial, con afectaciones simultáneas en múltiples dimensiones, como la seguridad personal, económica, política, comunitaria, en salud y ontológica. Esta población presenta la mayor exposición a violencias, discriminación, precariedad laboral y exclusión institucional, con impactos profundos en su bienestar emocional, su desarrollo y su relación con las instituciones.

A pesar de estas condiciones, muchos jóvenes siguen considerando su hogar y su colonia como espacios relativamente seguros, lo que refleja tanto resiliencia como una forma de resignación ante la adversidad.

A pesar de los desafíos estructurales que enfrenta Ciudad Juárez, el Índice Glocal de Seguridad Humana **reveló múltiples hallazgos alentadores.** La mayoría de la población no reportó haber sido víctima de asaltos y robos, ni haber experimentado agresiones en el entorno familiar, ni en el espacio comunitario en el último año. Asimismo, se observó una alta disposición ciudadana a denunciar delitos y una buena percepción del trato recibido por funcionarios públicos, especialmente en zonas como el Norponiente.

En dimensiones como la seguridad alimentaria, tecnológica y comunitaria también se identificaron resultados positivos, destacando la capacidad de las redes familiares y comunitarias para mitigar la escasez y fortalecer la cohesión social. La alta valoración de las colonias como buenos lugares para vivir confirman que existen bases sólidas sobre las cuales construir políticas públicas más justas, efectivas y centradas en las personas.

Buena parte de la inseguridad humana registrada por el índice en 2024 no se debe a amenazas inminentes contra la vida de las personas, sino a **limitaciones en los mecanismos de protección** a los que tienen acceso. Esta situación puede transformarse mediante acciones articuladas y colaborativas entre diversos actores —instituciones, sociedad civil, sector privado y ciudadanía—. Además, la ciudad cuenta con sectores comprometidos con la construcción de paz, incluyendo colectivos juveniles, organizaciones civiles y liderazgos locales que hoy son aliados estratégicos del gobierno municipal y hay una fuerte resiliencia social: muchas personas valoran su colonia, se sienten arraigadas y mantienen el deseo de construir una ciudad mejor.

Para enfrentar la inseguridad humana en Ciudad Juárez es fundamental **adoptar un enfoque sistémico y multidimensional.** La vulnerabilidad frente a factores—económicos, ambientales, personales, políticos, comunitarios y otros— no se presentan de forma aislada, sino de manera simultánea y entrelazada. Por ello, **las respuestas no pueden ser fragmentadas ni sectoriales, sino integrales, interinstitucionales y centradas en los derechos de las personas.**

Este enfoque ya comienza a materializarse a través de iniciativas concretas, como el **plan de seguridad humana** desarrollado para la **colonia 16 de Septiembre**, co-construido por el municipio, organizaciones de la sociedad civil y la propia comunidad. Esta experiencia piloto, que inició su implementación en 2024, demuestra que es posible diseñar intervenciones contextualizadas junto a las

comunidades, reforzando la corresponsabilidad y fortaleciendo la participación ciudadana. **Desde lo local**, es viable generar soluciones arraigadas en el tejido social que respondan de manera efectiva a problemáticas específicas y estructurales.

Finalmente, el **Índice Glocal de Seguridad Humana** no es solo una herramienta diagnóstica, sino también una **hoja de ruta para orientar intervenciones y políticas**

públicas justas, inclusivas y efectivas. Su aplicación invita a repensar los modelos tradicionales de seguridad, apostando por estrategias que garanticen las condiciones para una vida digna, libre de miedo y de necesidades. Institucionalizar este enfoque en las políticas y programas es un paso que puede ayudar a construir una Ciudad Juárez más segura, humana y equitativa para todas las personas.



Foto: Adrián Alfredo Blanco / Ciudad Juárez

¿Qué le preocupa más a las personas en Ciudad Juárez?

En el corazón del Índice Glocal de Seguridad Humana está la voz de quienes viven la ciudad todos los días. Por eso, formulamos una pregunta abierta para conocer sus principales preocupaciones:

¿De todos los asuntos que hemos discutido, cuál es el que más le preocupa en este momento?

¡La seguridad en todas sus formas!



Casi la mitad de las respuestas se concentraron en términos como “seguridad pública”, “seguridad comunitaria” e “inseguridad”. No obstante, también destacaron preocupaciones como la salud, la infraestructura, la economía y la alimentación. Esto refleja una visión más amplia e interconectada de lo que significa sentirse seguro en la ciudad.



Para las y los juarenses, la seguridad no es solo la ausencia de violencia, y delitos, sino también la **protección efectiva frente a muchos otros problemas.**

3. ¿Qué es el Índice Glocal de Seguridad Humana y para qué sirve?



¿Qué es el Índice Glocal de Seguridad Humana?

El Índice Glocal de Seguridad Humana es una herramienta diseñada para medir la seguridad de forma integral, sistémica y centrada en las personas y en el ejercicio de sus derechos.

Su propósito es generar información útil para el diseño, implementación y evaluación de políticas, programas e iniciativas impulsadas por instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, y organismos regionales e internacionales. Además, busca proporcionar a la ciudadanía herramientas para conocer, comprender y monitorear el estado de la seguridad en sus comunidades y ciudades.

El índice evalúa la experiencia de seguridad que viven las personas, es decir, qué tan vulnerables son y se sienten frente a distintas amenazas, considerando tanto condiciones objetivas y medibles —como la exposición a riesgos o el acceso a servicios esenciales— como percepciones subjetivas que expresan cómo las personas interpretan y sienten su entorno. En este sentido, el índice define y mide la seguridad como el resultado de tres condiciones fundamentales:



La **mínima exposición posible a amenazas** contra la vida, los medios de subsistencia, los derechos y la dignidad



El **acceso a mecanismos de protección efectivos** frente a esas amenazas



La **libertad para ejercer derechos** en nueve dimensiones clave de la vida.

A partir de esta definición, y utilizando datos recolectados mediante encuestas, el índice permite medir la intensidad de la inseguridad que experimentan las personas y comparar la situación de seguridad entre zonas dentro de una misma ciudad, o entre ciudades de distintos países.

Lo hace teniendo en cuenta las características del contexto local y a las experiencias cotidianas de sus habitantes, lo cual le confiere un enfoque genuinamente *glocal*¹.



A diferencia de otros enfoques que miden la seguridad en las ciudades concentrándose exclusivamente en la violencia o la criminalidad, el Índice Glocal de Seguridad Humana no concibe la seguridad como un fenómeno aislado, sino como un proceso dinámico e interdependiente, determinado por un conjunto amplio de factores que pueden amenazar no solo la vida, sino también el sustento, la dignidad y la libertad de las personas para ejercer sus derechos.

Con base en los aportes de diversas disciplinas y en décadas de investigación académica y comunitaria, el índice utiliza un modelo multidimensional, escalonado y sistémico para medir la intensidad de la inseguridad.

La medición se basa en 47 clústeres de indicadores objetivos y subjetivos distribuidos en nueve dimensiones clave de la vida (ver la imagen 1).

1. La palabra *glocal* surge de la fusión de los términos global y local. Se refiere a procesos, prácticas o fenómenos que, aunque están insertos en un contexto global, se adaptan o reinterpretan desde lo local.

Imagen 1. Dimensiones de la Seguridad Humana que el Índice Mide



Este enfoque multidimensional permite comprender de manera profunda e integrada las distintas **formas en que la seguridad —o la ausencia de esta— se manifiesta en la vida cotidiana** de las personas.

¿Para qué sirve el índice?

- **Entender** cómo distintos factores afectan al mismo tiempo la vida, la dignidad y el bienestar de las personas, y aumentan el riesgo de violencia.
- **Visibilizar** las desigualdades según edad, género o territorio, y las necesidades de protección específicas de grupos como mujeres, jóvenes y adultos mayores.
- **Monitorear** la seguridad en la ciudad con enfoque integral y territorial, diferenciando zonas como el Norponiente, Nororiente, Surponiente y Suroriente.
- **Guiar** políticas públicas, programas e iniciativas con base en derechos y prioridades reales de las comunidades.

¿Como funciona el Índice Glocal de Seguridad Humana?

El índice mide la seguridad humana en tres etapas:



Para generar puntajes que reflejen la situación de seguridad en una ciudad y sus distintas zonas —incluyendo la exposición a amenazas, acceso a protección y libertad para ejercer derechos— el índice:

- Primero **evalúa los niveles de vulnerabilidad** de las personas en las nueve dimensiones.
- Luego **calcula la intensidad de la inseguridad** con base en esos resultados.
- Finalmente **clasifica y compara la ciudad y sus zonas** según la situación de las personas que las habitan.



1ª Etapa: Vulnerabilidad de las personas en cada dimensión

En esta primera etapa, el índice mide el nivel de vulnerabilidad de cada persona en cada una de las nueve dimensiones de la seguridad humana, utilizando un total de 47 clústeres de indicadores.

Estos indicadores permiten cuantificar qué tan expuesta estuvo la persona a amenazas en el último año, qué tanto acceso tuvo a medios de protección frente a esas amenazas, y qué grado de libertad tuvo para ejercer sus derechos en cada dimensión (ver lista de indicadores en anexos).

Con base en esta información, el índice clasifica a cada persona en un nivel de vulnerabilidad específico por dimensión, según su situación particular (ver Escala 1).

Escala 1. Niveles de vulnerabilidad en cada dimensión

Baja

Significa que, aunque existan ciertos riesgos, **las amenazas no son inmediatas o severas**, y la persona dispone de un **acceso adecuado, constante y confiable** a medios de protección y a condiciones que le permiten ejercer sus derechos y mantener su bienestar.

Media

Implica que existen **algunos factores de amenaza** en la vida de la persona, pero que esta suele contar con **acceso parcial o intermitente** a recursos, medios o estrategias que le permiten enfrentar o mitigar dichas amenazas.

Alta

Se refiere a que la persona está expuesta a **varios factores de riesgo** que afectan su supervivencia, bienestar o derechos, y que solo tiene **acceso limitado, inadecuado o inestable** a mecanismos de protección o respuesta frente a esas amenazas.

Extrema

Indica que la persona enfrenta una **gran cantidad de amenazas** que ponen en riesgo su vida, sustento y derechos, y **no cuenta con recursos, medios ni estrategias efectivas** para protegerse o responder ante dichas amenazas.

En esta etapa, el índice tiene en cuenta cómo un mismo factor o situación puede afectar simultáneamente varias dimensiones de la vida de las personas. Por ejemplo, vivir en zonas con infraestructura precaria, donde hay contaminación, acumulación de residuos, falta de espacios para la recreación y el deporte, y un acceso limitado a servicios básicos —como centros de salud o sistemas de protección frente a desastres naturales— no solo compromete la seguridad ambiental y la seguridad en salud, al representar una amenaza directa para el bienestar físico, sino que también impacta la seguridad ontológica, al no garantizar condiciones de vida dignas.

Además, este tipo de contextos puede debilitar el sentido de pertenencia y el reconocimiento social, especialmente cuando se habita en espacios marcados por el abandono institucional o la invisibilidad política. Así, el índice reconoce que la inseguridad humana es multidimensional tanto en su origen como en sus efectos, y que los indicadores deben analizarse considerando cómo se entrelazan y afectan distintas esferas del bienestar.



2ª Etapa: Intensidad de la Inseguridad Humana

Escala 2. Niveles de intensidad de inseguridad humana

Leve

Significa que, la persona **no tiene ninguna dimensión prioritaria vulnerada** y, presenta como máximo, **una dimensión complementaria afectada**.

Moderada

Se refiere a que la persona presenta **hasta seis dimensiones vulneradas**, pero entre ellas **no más de dos** pueden ser prioritarias.

Substantial

Implica que la persona presenta **hasta siete dimensiones vulneradas**, pero no más de tres de ellas son prioritarias.

Severa

Indica que la persona presenta una combinación de dimensiones vulneradas que, según su peso, **equivale a tener las cuatro dimensiones prioritarias vulneradas**.

En esta etapa, el índice calcula la intensidad de la inseguridad humana que experimenta cada persona, según el número y tipo de dimensiones en las que ha tenido niveles medios, altos o extremos de vulnerabilidad durante el último año. Cuantas más dimensiones se encuentren afectadas, mayor será la intensidad de inseguridad que enfrenta la persona.

Si bien todas las dimensiones son importantes y están interrelacionadas, el índice reconoce que hay cuatro dimensiones prioritarias —seguridad personal, seguridad económica, seguridad alimentaria y seguridad en salud— que tienen un peso mayor en el cálculo de la intensidad. Esto se debe a que estas dimensiones se refieren a necesidades básicas universales vinculadas directamente con la supervivencia y las condiciones mínimas para una vida digna.

Con base en este enfoque, el índice clasifica la intensidad de inseguridad humana en una escala de cuatro niveles (ver Escala 2).

Esta clasificación permite no solo identificar quiénes se encuentran en situación de inseguridad, sino también evaluar la intensidad y el carácter multidimensional de dicha condición, lo que resulta clave para diseñar respuestas más focalizadas, integrales y efectivas.

Además, dado que el índice analiza la situación de cada persona según sus propias respuestas a la encuesta, permite realizar análisis desagregados por grupos

poblacionales, visibilizando cómo varía la experiencia de inseguridad humana según características como el género, la edad u otras condiciones sociales.

En este informe, se profundiza especialmente en la situación de las mujeres, los adolescentes y jóvenes, y las personas adultas mayores, para entender las brechas y patrones diferenciales de inseguridad que enfrentan estos grupos en distintos contextos.



3ª Etapa: Índice de seguridad humana de la ciudad y por zonas

En esta etapa se calcula el puntaje general del índice de seguridad humana tanto para la ciudad como para sus distintas zonas geográficas² a través de un enfoque que permite identificar qué proporción de la población experimenta inseguridad en múltiples dimensiones de su vida, así como la intensidad con la que dicha inseguridad se manifiesta.

El índice utiliza una escala de 0 a 1, donde 0 representa la peor situación posible, es decir, que toda la población

se encuentra en condiciones de inseguridad severa y 1 indica el estado óptimo, es decir, una seguridad humana perfecta, en la que nadie experimenta niveles de inseguridad superiores al nivel leve (el más bajo en la escala del índice).

Esta medición permite realizar comparaciones entre zonas y evaluar los avances o retrocesos en materia de seguridad humana de manera integral y contextualizada.



Foto: Adrián Alfredo Blanco / Ciudad Juárez

2. Mediante una adaptación del modelo Alkire-Foster (ver la sección de apuntes metodológicos).

El Índice Glocal de Seguridad Humana mide la experiencia de seguridad de las personas combinando condiciones objetivas —como el acceso a servicios, la exposición a amenazas o la posibilidad de ejercer derechos— con percepciones subjetivas, como la sensación de estar o no protegido.

4. Estado de la Seguridad Humana en Ciudad Juárez



Estado de la Seguridad Humana en Ciudad Juárez

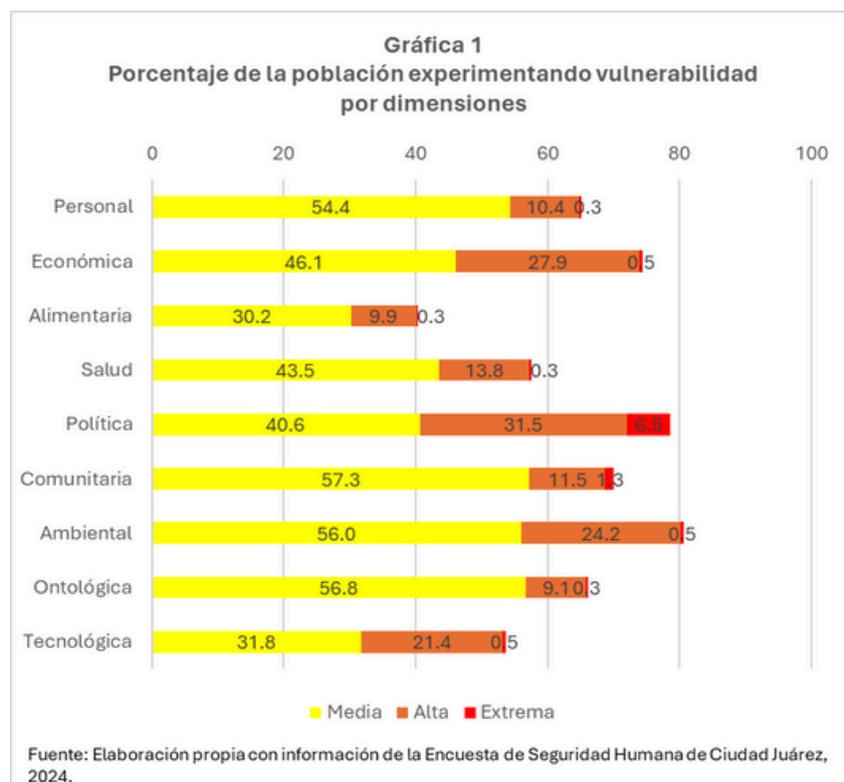
En esta sección se presentan los resultados de la aplicación del Índice Glocal de Seguridad Humana en Ciudad Juárez. Los hallazgos se presentan en dos apartados. El primero muestra los resultados por dimensión de seguridad humana: Seguridad Personal, Seguridad Económica, Seguridad Alimentaria, Seguridad en Salud, Seguridad Política, Seguridad Comunitaria, Seguridad Ambiental, Seguridad Ontológica y Seguridad Tecnológica.

Para cada dimensión, se ofrece una visión general de la situación y se presentan diferencias por zonas de la ciudad: Norponiente, Nororiente, Surponiente y Suroriente.

En la siguiente sección se analizan las experiencias de inseguridad de cinco grupos poblacionales que presentaron los niveles más altos de vulnerabilidad: adultos mayores, mujeres, adolescentes y jóvenes.

Durante el año 2024, **en ocho de las nueve dimensiones evaluadas no se identificaron personas en condiciones extremas de vulnerabilidad**. Sin embargo una proporción considerable de la población experimentó **niveles altos y medios de vulnerabilidad de manera simultánea en diversas dimensiones** de la seguridad humana. Este hallazgo pone en evidencia la existencia de **inseguridad multidimensional generalizada**, que afecta de manera significativa la vida cotidiana de amplios sectores de la población.

Las dimensiones de **seguridad económica, política, ambiental, comunitaria, personal y ontológica** concentraron los porcentajes más altos de personas en condiciones de riesgo elevado (ver Gráfica 1), lo que subraya la **urgente necesidad de diseñar e implementar políticas integrales de protección** que garanticen condiciones básicas de seguridad, dignidad y bienestar para toda la población.





4.1 Seguridad Personal

Seguridad Personal

¿Qué medimos en esta dimensión?

En esta dimensión se midió el grado de vulnerabilidad de las personas frente a distintas formas de violencia y criminalidad.

¿Cómo medimos la Seguridad Personal?

Para medir la seguridad personal, se consideró la exposición durante el último año a distintas formas de violencia física y psicológica en diversos espacios de socialización como el hogar, la escuela, sitios públicos, el trabajo y el entorno digital.

También se incluyó la victimización por delitos como robo, asalto, violencia sexual, acoso, cobro de piso, extorsión, así como la exposición a violencia policial, el riesgo de reclutamiento y la percepción de seguridad en el hogar, en la calle y en el transporte público.

En cuanto a los mecanismos de protección, se tomó en cuenta si las personas tuvieron acceso a estaciones de policía y centros de atención a víctimas, la presencia visible de cuerpos policiales en la colonia, la existencia de redes de seguridad comunitaria, el nivel de confianza en la policía, y la disposición a denunciar delitos ante las autoridades.

Los indicadores para medir esta dimensión se agrupan en tres categorías:

- Indicadores que miden la exposición a amenazas que ponen en riesgo la vida y la integridad física.
- Indicadores que evalúan el acceso a servicios de protección institucional y comunitaria en caso de ser víctima de violencia.
- Indicadores que valoran el ejercicio del derecho a la movilidad y al uso seguro de espacios públicos, es decir, la libertad de las personas para desplazarse y habitar su entorno sin miedo.



Clústeres de indicadores de exposición a amenazas

- Exposición a violencia física y psicológica (en diferentes espacios).
- Exposición a violencia policial.
- Victimización (robo, asalto, violencia sexual, pérdida de ser querido, violencia sexual, acoso).
- Riesgo de reclutamiento por grupos ilegales.
- Percepción de seguridad (en diferentes espacios).
- Riesgo a ver ingresos y medios de vida reducidos de forma arbitraria o violenta (cobro de piso, fraude o estafas).
- Exposición a efectos negativos del uso de redes sociales (exposición a contenido violento).



Clústeres de indicadores de acceso a protección

- Acceso a instituciones públicas que proveen protección.
- Acceso a mecanismos de protección comunitaria.
- Percepción del servicio de protección que ofrecen instituciones públicas claves.



Clúster de indicadores de libertad para ejercer derechos

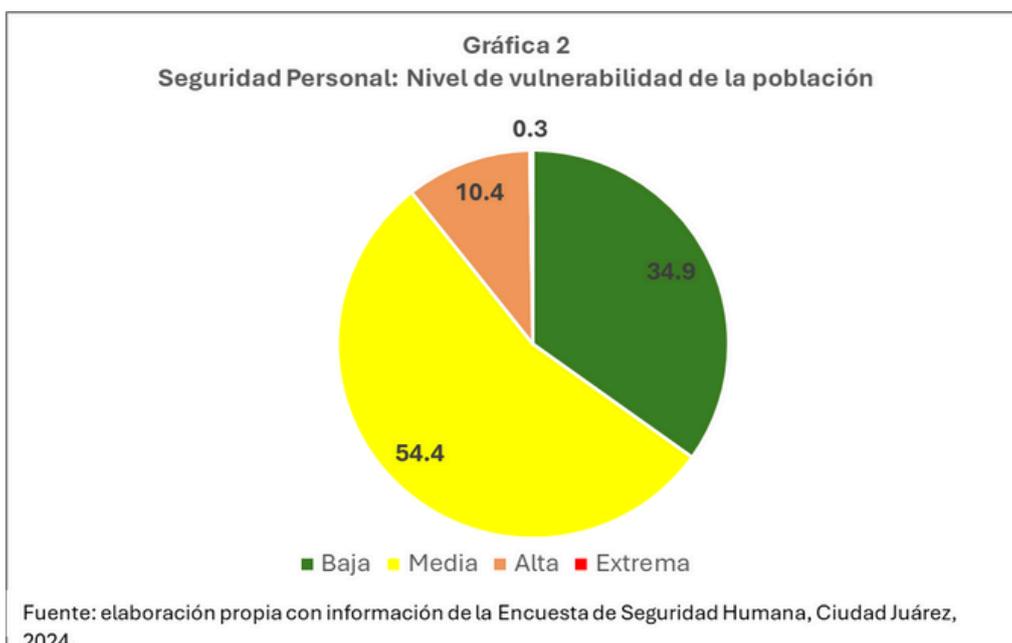
- Libertad para movilizarse y usar el espacio público sin miedo

¿Qué tan vulnerables fueron las personas a violencias y criminalidad?

El índice revela que más de la mitad de la población (54.4%) se encuentra en un nivel de vulnerabilidad media, lo que significa que enfrenta amenazas significativas a su integridad producto de diferentes formas de violencia o delitos, y tiene acceso parcial o intermitente a mecanismos de protección (ver gráfica 2).

Además, un 10.4% de las personas está en vulnerabilidad alta, lo que implica una exposición sostenida a factores

de riesgo con respuestas institucionales o comunitarias insuficientes o inestables. Solo el 34.9% de la población se encuentra en un nivel de vulnerabilidad baja, lo que indica que alrededor de un tercio de las personas cuenta con condiciones adecuadas y estables de protección frente a diversas violencias.



Los niveles de vulnerabilidad que experimentó la población en esta dimensión se deben, principalmente, a un acceso muy limitado a servicios de protección confiables y efectivos, así como al hecho de que, en algunas zonas de la ciudad, el temor limita el derecho al libre disfrute de la ciudad.

Para ilustrar las dificultades en el acceso a mecanismos de protección frente a la violencia y la criminalidad, basta señalar que, aunque la mayoría de las personas ha visto a policías realizando rondines en su colonia, el 60% de la población vive lejos de una estación de policía o de un centro de atención al que pueda recurrir en caso de ser víctima de algún delito. Además, el 13.7% no sabe dónde se encuentra la estación de policía más cercana y el 28% desconoce a dónde acudir si se presenta un caso de violencia contra las mujeres.

Otro factor que incrementa la vulnerabilidad es la baja confianza en la policía, institución que se espera sea efectiva en la prevención del delito y en la protección de víctimas. En la ciudad, el 34.3% de las personas reportó tener muy poca confianza en la policía y un 37.6% expresó tener solo algo de confianza. Aunque en menor medida, hubo limitaciones con los servicios de atención para mujeres víctimas de violencia, ya que el 23.8% declaró tener poca o ninguna confianza en dichos servicios y el 38.7% señaló tener únicamente algo de confianza.

A pesar de los bajos niveles de confianza, el 80% de las personas dijo haber estado dispuesta a denunciar antes las autoridades si fueran víctimas de algún delito, lo que indica apertura ciudadana a colaborar con la legalidad.

En cuanto al derecho a disfrutar de la ciudad sin miedo, los resultados muestran que el temor se concentra particularmente durante la noche. El 48.5% de las personas encuestadas ha dejado de salir por la noche por miedo, en contraste con un 20% que ha dejado de salir durante el día por la misma razón. Los datos históricos y recientes confirman que este miedo persiste, aunque ha disminuido respecto a 2010, cuando el 75% de la población adulta declaró evitar salir de noche por temor a ser víctima de un delito (EPCIJ, 2010).

Durante los últimos 15 años, el temor ha estado presente en la vida cotidiana de los y las juarenses, restringiendo derechos fundamentales como la movilidad y alterando patrones de socialización. Este miedo está vinculado a delitos como robos, asaltos y agresiones, pero sobre todo a la percepción de riesgo constante frente a distintos tipos de violencia. En este sentido, el 14.5% de las personas reportó haber sido víctima de asalto o robo a domicilio, y dentro de este grupo, el 5% afirmó haberlo experimentado en varias ocasiones durante el 2024. Como se menciona en la siguiente sección, el riesgo de victimización varía según la zona, siendo más elevado en el Surponiente y Suroriente de la ciudad.

Otro dato evidencia la gravedad del impacto de la violencia letal en la vida de las personas: el 22.2% de la población encuestada —más de una de cada cinco personas— ha perdido un ser querido a causa de hechos violentos en los últimos cinco años. Esta pérdida no es un fenómeno aislado ni exclusivo de un sector específico, sino una experiencia generalizada en todas las zonas de la ciudad.

Estos niveles de exposición obligan a considerar los impactos sociales, emocionales, económicos e institucionales de la violencia en la vida cotidiana de la población. En particular, es crucial reconocer cómo estos impactos afectan de manera diferenciada a distintos grupos poblacionales, como mujeres, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores. En la sección 5 de este informe se profundiza en esta exposición desigual a distintos tipos de violencias y otras problemáticas asociadas.

A este panorama se suma que, durante el último año, un tercio de las personas (31%) reportó haber escuchado con frecuencia tiroteos o ataques armados en su colonia y un 18% manifestó sentir temor constante de que alguien pudiera hacerles daño a ellas o a un ser querido. El 6% de la población indicó vivir con ese temor todo el tiempo.



Foto: Pavel Vallejo / Ciudad Juárez

Es alentador que se haya registrado un bajo nivel de violencia intrafamiliar en el último año: la gran mayoría de las personas encuestadas afirmó que los conflictos familiares no derivaron en agresiones físicas. Asimismo, la mayoría reportó no haber sido víctima de agresiones físicas en su colonia, ni de asaltos o robos durante el último año.

A pesar de esos datos hay sectores de la población para quien el derecho a la ciudad y a una vida libre de miedo se ve restringido. El 12% de las personas se sintieron inseguras o muy inseguras en su hogar, el 10.4% se sintió muy insegura en su colonia, y el 12% de quienes usan transporte público lo percibieron como muy inseguro. Esta situación no solo limita la libertad individual, sino que perpetúa la desconfianza colectiva, y conduce a la normalización de restricciones autoimpuestas en el uso del espacio público.

Un tema de especial atención, por tratarse de violaciones graves a los derechos, es el de las agresiones o detenciones arbitrarias por parte de oficiales de policía. Aunque la mayoría de las personas no ha vivido esta experiencia, un 11.3% reportó haber sido víctima de agresiones o detención arbitraria durante el último año, una cifra significativa dado su impacto en la confianza institucional. Las zonas más afectadas fueron el Suroriente (14.8%) y el Norponiente (11.34%), lo cual evidencia concentración de prácticas abusivas en territorios vulnerables.

Además, los espacios digitales han ampliado y diversificado los contextos en los que las personas están expuestas a violencia, particularmente de tipo psicológica o emocional. El índice reveló que, en 2024, el 13.7% de las personas estuvo expuesta a contenido violento en redes sociales, incluyendo situaciones que involucraban a personas conocidas, y un 5% recibió directamente mensajes amenazantes a través de estos canales. Esto evidencia la urgencia de incluir el entorno digital en las estrategias de protección frente a la violencia.

¿Dónde están las personas más vulnerables a violencias y criminalidad?

El índice permite identificar diferencias territoriales en los niveles de vulnerabilidad frente a la violencia y la criminalidad que experimentan las personas en Ciudad Juárez. En general, en todas las zonas de la ciudad, la mayoría de la población se encuentra en un nivel de vulnerabilidad media, lo que indica que la exposición a distintas formas de violencia forma parte de la vida cotidiana para una proporción importante de habitantes.

Sin embargo, el Suroriente y el Norponiente presentan las situaciones más complejas (ver gráfica 3). El Suroriente tiene el porcentaje más bajo de personas en vulnerabilidad baja, y uno de los más altos en vulnerabilidad media (60%), además de contar con cerca del 11% de la población en vulnerabilidad alta.

Por su parte, en el Norponiente, se observa que el 47.5% de la población se encuentra en nivel medio, mientras que el 14.1% está en vulnerabilidad alta y el 1% en nivel extremo.

Estos datos muestran que, en ambas zonas, las personas están más expuestas a múltiples formas de violencia y riesgo de criminalidad, lo cual restringe su derecho a vivir y moverse sin miedo. Además, tienen acceso limitado a mecanismos institucionales o comunitarios de protección.

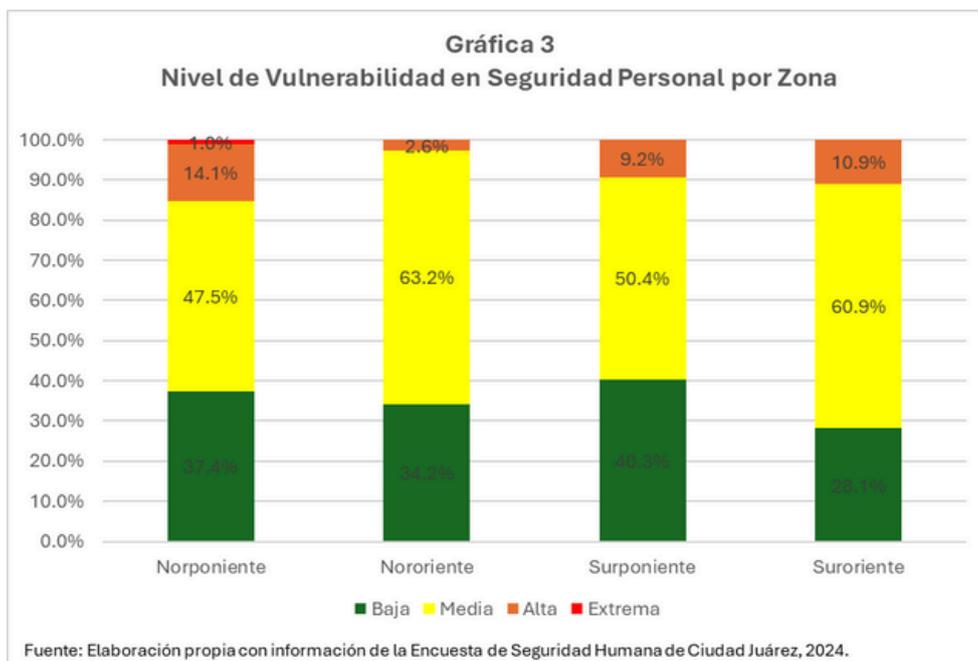
Aunque la medición de la vulnerabilidad considera múltiples indicadores, resulta especialmente revelador que el Norponiente y el Suroriente son las zonas donde hay un mayor porcentaje de personas que evita salir de casa durante el día o la noche por miedo a ser víctima de delitos. En particular, el 38% de las personas en el Norponiente y el 39% en el Suroriente reportaron haber dejado de salir de noche debido al temor.

La confianza en la policía es otro indicador clave para medir la vulnerabilidad en esta dimensión y permite observar diferencias importantes entre zonas. Aunque en toda la ciudad el porcentaje de personas que no confían en la policía es alto, en el Norponiente (41.41%) y el Suroriente (39.84%) la situación es especialmente preocupante. Estas cifras muestran que, en ambas zonas, la relación entre la ciudadanía y la policía es particularmente tensa, lo cual refuerza la sensación de desprotección.

Es importante destacar que, a pesar de los bajos niveles generales de confianza en la policía, hay un dato alentador: en el Norponiente, donde la Policía de Prevención ha implementado iniciativas de proximidad en alianza con organizaciones civiles durante el último año, se observó el mayor porcentaje de personas que confía en la policía (32.3%).

Este dato contrasta con los porcentajes más bajos registrados en otras zonas, como el Nororiente (23%) y el Surponiente y Suroriente (27%). Esta diferencia sugiere que las estrategias de acercamiento comunitario pueden ser efectivas y que replicarlas en otras zonas de la ciudad podría fortalecer la confianza institucional y mejorar la seguridad personal.

En cuanto al Surponiente, que registra a la mitad de su población en nivel medio de vulnerabilidad y a un 9.2% en alta vulnerabilidad, los datos deben interpretarse como señales de alerta temprana. Aunque en todas las zonas se reportaron tiroteos, fue en el Surponiente (37.8%) y el Suroriente (32%) donde un mayor porcentaje de personas manifestó que estos ocurren con frecuencia, en comparación con el Norponiente (24.4%) y el Nororiente (26.3%).



Además, el Surponiente y el Suroriente también fueron las zonas donde más personas reportaron haber sido víctimas de robos o asaltos: 17% y 15.6%, respectivamente, durante el último año.

En cuanto al acoso y la violencia sexual, entre 5% y 7.5% de las personas en las zonas Nororiente, Surponiente y Suroriente reportaron haber sido víctimas de este delito.

Por otro lado, el Nororiente muestra, en comparación con otras zonas, los niveles más bajos de vulnerabilidad (2.6%). Sin embargo, el hecho de que el 63.2% de su población se encuentre en vulnerabilidad media indica que la situación no debe ser desatendida, ya que persisten condiciones de riesgo.

En cuanto a la percepción de seguridad en la colonia, el Nororiente también destacó positivamente: el 79% de las personas declaró sentirse muy seguras en su entorno. En contraste, el Norponiente y el Suroriente registraron las mayores proporciones de percepciones negativas, con 11.2% y 14% de las personas, respectivamente, reportando sentirse muy inseguras en su colonia.

Reflexiones sobre la Seguridad Personal

El análisis de la seguridad personal en Ciudad Juárez revela una situación crítica que impacta de forma directa la integridad y el bienestar de amplios sectores de la población. Más de la mitad de las personas estuvieron expuestas de manera constante a amenazas como violencia, criminalidad y abuso institucional en el último año, sin contar acceso suficiente a protección efectiva.

Estos niveles de inseguridad se agravan por la persistencia del miedo en la vida cotidiana, especialmente durante la noche, así como por la desconfianza en las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía, en particular la policía.

La experiencia de pérdida de seres queridos por hechos violentos, el riesgo constante de victimización y las percepciones de inseguridad en el entorno cotidiano contribuyen a un clima de temor y desprotección que limita derechos fundamentales como la movilidad, la denuncia, la participación y la vida sin miedo.

Superar esta situación requiere intervenciones que combinen políticas públicas de protección efectiva con un cambio de paradigma en la relación entre instituciones de seguridad y comunidades. Las estrategias de acción policial con enfoque de proximidad, especialmente en zonas como el Suroriente y el Norponiente, donde los niveles de vulnerabilidad son más altos pueden ayudar a mejorar la relación con las comunidades. Estas estrategias deben priorizar la transparencia institucional, la rendición de cuentas, la eliminación de prácticas abusivas y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía.

Además, es urgente integrar la protección frente a violencias en espacios digitales, ampliar el acceso a servicios de atención a víctimas y fortalecer las capacidades comunitarias para la prevención, acompañamiento y resolución pacífica de conflictos. Estos pasos junto con la garantía de condiciones de vida dignas para todas las personas pueden mejorar la seguridad en esta dimensión con base en el respeto a los derechos humanos.



4.2 Seguridad Económica

Seguridad Económica

¿Qué medimos en esta dimensión?

La dimensión económica evalúa el nivel de vulnerabilidad de las personas ante factores que amenazan su capacidad para sostener medios de vida dignos, suficientes y estables. Esta evaluación considera tanto el acceso a mecanismos de protección frente a contextos de crisis como la existencia de condiciones que permitan ejercer de manera autónoma derechos fundamentales, como el trabajo, la vivienda y la participación en la vida económica, sin depender de estructuras precarias o informales.

¿Cómo medimos la Seguridad Económica?

Para esta dimensión evaluamos la exposición a varios factores que amenazan los proyectos de vida y el sustento de las necesidades básicas, como el desempleo, la falta de oportunidades laborales, dependencia de empleos informales o mal remunerados, el acceso limitado a apoyos económicos y las condiciones que permiten ejercer el derecho a una vida digna con autonomía.

Se tuvieron en cuenta indicadores relacionados con la generación y estabilidad de ingresos, la tenencia de vivienda, el acceso a servicios de protección económica y la posibilidad de participar en el mercado laboral en condiciones justas.

Esta dimensión integra aspectos clave que determinan la seguridad humana desde una perspectiva económica: la suficiencia y estabilidad del ingreso, la seguridad patrimonial, el acceso a mecanismos formales de protección (como ayudas, ahorro o seguros), el ejercicio de derechos laborales y la existencia de redes de apoyo.

Además, reconoce que las condiciones estructurales como la precariedad laboral, el aumento del costo de vida, la falta de oportunidades en la economía legal y la ausencia de apoyos institucionales agravan significativamente la vulnerabilidad en dimensiones como alimentación, salud —incluyendo la salud mental— y seguridad personal, entre otras.

Para el análisis, los indicadores se agrupan en tres categorías:

- Exposición a factores que afectan la estabilidad económica, suficiencia del ingreso y medios de vida. Estos indicadores evalúan si las personas cuentan con ingresos estables y suficientes; si existen amenazas económicas directas y formas de violencia económica como la extorsión, los fraudes y si hubo necesidad de acudir a estrategias de supervivencia no deseadas o riesgosas.
- Acceso a protección social y apoyo económico. Estos indicadores evalúan la capacidad de las personas para acceder a apoyos formales (ayudas, ahorro, seguros, préstamos) y a redes de apoyo informal que permitan enfrentar contingencias económicas.
- Autonomía económica y oportunidades de desarrollo. Estos indicadores evalúan si las personas pueden ejercer de forma libre y digna su derecho al trabajo, así como acceder a oportunidades para mejorar su bienestar económico a través del empleo, la capacitación o la movilidad social.

¿Qué tan vulnerables fueron las personas frente a factores que afectan su seguridad económica?

El Índice revela una estructura social marcada por la precariedad y la exposición a riesgos económicos. Un 27.9% de la población se encuentra en situación de alta vulnerabilidad, lo que significa que casi 3 de cada 10 personas enfrentan múltiples amenazas a su sustento económico y disponen únicamente de mecanismos de protección limitados, inadecuados o inestables, como el empleo informal o la falta de seguridad social.

Además, el 46.1% presenta vulnerabilidad media, lo que sugiere que, aunque cuentan con cierto acceso a medios de sustento, este es parcial o están expuestos ante eventuales crisis. Solo el 25.5% de la población reporta baja vulnerabilidad económica, lo que indica que apenas una cuarta parte de las personas vive en condiciones estables, seguras y confiables para ejercer su derecho a un medio de vida digno (ver gráfica 4).

Clústeres de Indicadores de Seguridad Económica



Exposición a amenazas

- Riesgo a ver ingresos y medios de vida reducidos de forma arbitraria, repentina o violenta.
- Riesgos a la generación de ingreso básico.
- Suficiencia de los ingresos actuales.
- Riesgo a la tenencia de la propiedad .
- Riesgo a ver ingresos y medios de vida reducidos de forma arbitraria, repentina o violenta.



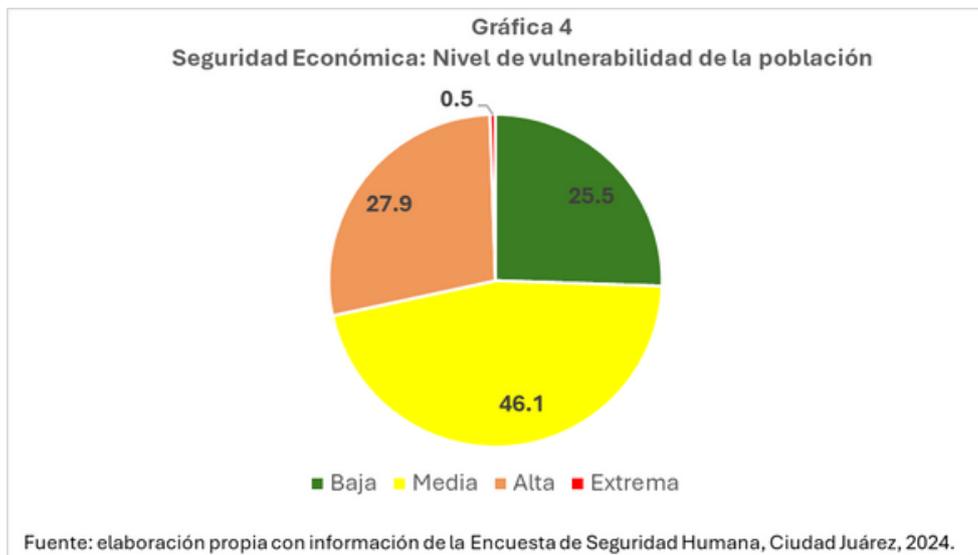
Acceso a protección

- Acceso a ayudas económicas de emergencia.
- Acceso a mecanismos de protección económica.



Libertad para ejercer derechos

- Libertad para acceder a empleos y fuentes de ingreso dignas.
- Acceso a vivienda.



Estos resultados reflejan no solo condiciones individuales de inseguridad económica, sino también los efectos estructurales de un modelo de desarrollo local profundamente marcado por la lógica de una ciudad fronteriza. La dimensión económica permite observar con claridad las vicisitudes de un sistema que ha organizado históricamente su crecimiento en torno a la industria maquiladora y el comercio transfronterizo.

Si bien este modelo ha generado empleo y cierto dinamismo económico, también ha consolidado una estructura de ingresos precarios, caracterizada por empleos de baja remuneración, repetitivos y con escasas oportunidades de movilidad. Estas condiciones no solo perpetúan la vulnerabilidad económica, sino que también repercuten en otras dimensiones de la seguridad humana, como la salud, la seguridad personal y la cohesión comunitaria.

Amenazas a la estabilidad económica, suficiencia del ingreso y medios de vida

El índice muestra que los niveles de vulnerabilidad en esta dimensión se deben principalmente a la falta de empleo formal, la inestabilidad de los ingresos y la insuficiencia salarial, condiciones que afectan a una parte significativa de la población en Ciudad Juárez. Aunque algunos indicadores podrían leerse como signos de estabilidad (como la tenencia de propiedad o la percepción de estabilidad laboral), otros evidencian una economía frágil y exposición a múltiples riesgos.

En cuanto a la ocupación principal, el 37.96% de las personas encuestadas reporta tener un empleo formal con contrato laboral. Esto significa que más del 60% está fuera del empleo formal: ya sea porque trabaja de forma independiente (10.47%), es empleador (9.95%), está jubilado (8.38%), estudia (9.95%), o se dedica al trabajo en el hogar (16.23%), actividad no remunerada sustentada casi enteramente por las mujeres.

Aunque el desempleo abierto es relativamente bajo (2.62%), los datos revelan una realidad laboral marcada por la informalidad, fragilidad y la exclusión del mercado estructurado.

Destaca que por lo menos el 30% de la población enfrenta algún grado de inestabilidad en el empleo. Esta tensión se acentúa con el dato de que el 43.47% de las personas ha temido perder sus ingresos durante el último año, lo que evidencia una percepción extendida de inseguridad económica, incluso entre quienes cuentan con empleo.

La percepción sobre la suficiencia del ingreso también resulta reveladora. El 54.86% de las personas considera que sus ingresos fueron suficientes para cubrir sus necesidades básicas, mientras que el 45% reporta dificultades para llegar a fin de mes, incluyendo casos que manifiestan que “nunca les alcanza”. Esta situación no solo implica una carencia material, sino una presión psicoemocional con importantes efectos en la salud mental de las personas, ante la limitada capacidad de planear a futuro y ejercer otros derechos.

Frente a esta realidad, muchas personas recurren a estrategias de supervivencia que implican riesgos. Un dato crítico es que el 39.84% ha tenido que recurrir a préstamos informales para cubrir gastos básicos, y un 10% lo hace de manera frecuente. Esta dependencia de mecanismos no regulados, como aplicaciones móviles o prestamistas informales, expone a la población a ciclos de endeudamiento y a condiciones abusivas que erosionan aún más su seguridad económica.

La propiedad de vivienda, tradicionalmente vista como un factor de estabilidad, muestra también matices importantes. Aunque el 63.71% reporta contar con títulos de propiedad (65% si se consideran quienes están pagando un crédito), se enfrenta a un 12.5% de personas que manifiestan haber sentido riesgo de

perder su vivienda en el último año. Esto sugiere que la propiedad por sí sola no garantiza seguridad integral, especialmente cuando se combina con endeudamiento o ingresos insuficientes.

En conjunto, los datos muestran que los hogares en Ciudad Juárez se sostienen bajo condiciones de fragilidad. Si bien existen algunos factores protectores, estos se distribuyen de forma desigual y no alcanzan a contrarrestar las carencias estructurales. La ausencia de una red robusta de garantías económicas limita la posibilidad de construir un proyecto de vida con estabilidad, y refuerza la necesidad de diseñar políticas integrales que fortalezcan el ingreso, la formalidad laboral y la autonomía económica de la población.

El índice también incorporó indicadores sobre amenazas económicas directas que afectan la integridad, la libertad y la dignidad de las personas. Aunque estas no se presentan de forma masiva, sus efectos son profundos y desproporcionados, pues afectan la capacidad de las personas para sostener su proyecto de vida de manera autónoma y segura.

En cuanto a la exposición a extorsión, el 4.2% de las personas encuestadas enfrentó este tipo de situaciones en el último año, ya sea de manera ocasional o constante. Aunque el 95.8% reportó no haber sido víctima, este tipo de delito, que no siempre es denunciado a las autoridades, adquiere una gravedad particular por la naturaleza de la amenaza: daños a la familia, la vivienda o el negocio. En algunos casos, como en la Zona Norponiente, el porcentaje de personas que ha sufrido extorsión asciende al 7%, siendo un 5% quienes lo experimentan de manera recurrente. Estas cifras reflejan la presencia de estructuras de intimidación que erosionan la libertad económica y colocan a las personas en una posición de vulnerabilidad permanente.

Los fraudes y estafas también constituyen una forma significativa de victimización económica. El 15.89% de la población reportó haber sido víctima de este tipo de delito durante el último año, principalmente de forma ocasional. En algunas zonas, como el Nororiente, hasta un 10.53% fue víctima constante de este tipo de delitos. Los adolescentes resultaron ser el grupo más vulnerable, con cifras significativamente más altas, lo que puede deberse a falta de experiencia, desinformación o acceso limitado a mecanismos de prevención.

Una expresión especialmente crítica de presión económica es la obligación de aceptar trabajos que las personas preferirían no realizar. El 13.8% de la población reportó haber estado en esta situación en el último año, ya sea de forma ocasional o constante.

En zonas como el Norponiente, esta cifra alcanza al 24.24% de las personas encuestadas. Entre los adolescentes, el 18.37% indicó haber trabajado en condiciones que no deseaba. Este tipo de experiencias reflejan contextos de supervivencia, en la que diversos grupos de personas se ven forzadas a tomar decisiones bajo presión, muchas veces en condiciones precarias o indignas.

Acceso a protección social y apoyo económico

El Índice reveló que los niveles de vulnerabilidad en esta dimensión están fuertemente determinados por el acceso limitado o inexistente a mecanismos institucionales de protección. Aunque existen amplias redes personales que funcionan como sostén comunitario, la cobertura institucional sigue siendo insuficiente y desigualmente distribuida, lo que deja a amplios sectores sin recursos formales para enfrentar contingencias.

En cuanto a redes de apoyo, el 80.99% de las personas encuestadas afirma contar con personas de confianza a quienes puede recurrir siempre que lo necesita, mientras que otro 13.80% señala que puede hacerlo ocasionalmente. Solo un 3.39% no está seguro de contar con alguien, y un 1.82% afirma no tener a nadie. Estas cifras reflejan un tejido comunitario importante que, si bien no sustituye la acción del Estado, ofrece alternativas para mitigar de manera significativa situaciones de emergencia.

Sin embargo, esta red informal no logra compensar la debilidad institucional. El 47.78% de las personas indicó que no recibió ningún tipo de subsidio o ayuda económica durante el último año a pesar de que lo necesitaba. Entre quienes sí accedieron a apoyos (28.72%), la mitad consideró que estos eran insuficientes para cubrir sus necesidades. Estos datos apuntan a una desconexión entre los programas de asistencia y la realidad de las personas, ya sea por problemas de cobertura, focalización o alcance.

El acceso a servicios financieros formales también es limitado. Solo el 49.22% de la población tiene certeza de poder acceder a préstamos de instituciones bancarias o cooperativas, mientras que el resto lo desconoce o directamente lo descarta. Esta falta de acceso restringe las posibilidades de responder a emergencias o emprender actividades productivas sin recurrir a esquemas informales. A esto se suma que el 86.33% de las personas no cuenta con seguro de desempleo, lo que evidencia una ausencia casi total de mecanismos de protección formales ante la pérdida del ingreso.

El ahorro, como estrategia de autocuidado financiero, tampoco es una opción para todas y todos. Apenas el 53.66% de las personas considera estar en condiciones de ahorrar con sus ingresos actuales. Esto sugiere que cerca de la mitad de la población vive al día, sin margen para reservar recursos o planear a futuro, lo que aumenta su vulnerabilidad ante cualquier imprevisto o situación de crisis.

Las desigualdades de género también se manifiestan en esta dimensión. Las mujeres reportan menor capacidad de ahorro (47.9% frente a 58.38% en hombres), menos certeza sobre su acceso a préstamos, y un acceso al seguro de desempleo que es casi la mitad del que tienen los hombres (9.45% frente a 18.11%). Esto refleja una doble exclusión, tanto económica como institucional, que intensifica su vulnerabilidad en situaciones de crisis.

En conjunto, los datos muestran que, si bien las redes sociales cumplen un papel importante en la vida de las personas, no pueden sustituir la función del Estado y de una política pública efectiva. La ausencia de mecanismos institucionales robustos de protección económica obliga a las personas a recurrir a alternativas informales, muchas veces riesgosas, y reproduce las brechas existentes entre distintos grupos sociales.

Autonomía económica y oportunidades de desarrollo

El Índice muestra que la autonomía y libertad de ejercer los derechos económicos de las personas en Ciudad Juárez se ve limitada por la falta de acceso a empleos dignos, la escasez de oportunidades de formación y capacitación, y la imposibilidad de acceder a una vivienda adecuada.

Uno de los datos más contundentes es que más de la mitad de las personas encuestadas considera que no existen oportunidades laborales dignas en su entorno. En total, el 52.2% clasifica las opciones laborales como precarias, muy escasas o directamente inexistentes. Específicamente, el 22.83% afirma que no hay oportunidades, el 17% las considera muy escasas y el 12.3% las califica como opciones mal remuneradas. Estos datos reflejan un mercado laboral que no garantiza inclusión ni desarrollo económico sostenible.

La formación y capacitación, necesarias para mejorar la empleabilidad, también presentan barreras importantes. El 35.17% de las personas encuestadas indica que no tiene acceso a oportunidades de formación, lo que limita su capacidad de insertarse o progresar en un mercado laboral cada vez más competido. Esta cifra aumenta considerablemente entre los grupos más vulnerables, como las mujeres y los adultos mayores, reforzando los círculos de exclusión económica.

La posibilidad de acceder a una vivienda digna es otro componente clave de la autonomía económica. En este rubro, los datos revelan que el 65.35% de las personas no ha tenido acceso a opciones habitacionales adecuadas o asequibles en el último año. Esta exclusión habitacional puede deberse a múltiples factores, entre ellos los bajos ingresos, la informalidad laboral, la prevalencia de viviendas precarias, lejanas, aisladas y de mala calidad, o incluso, la falta de instrumentos financieros adaptados a la realidad de las personas trabajadoras.

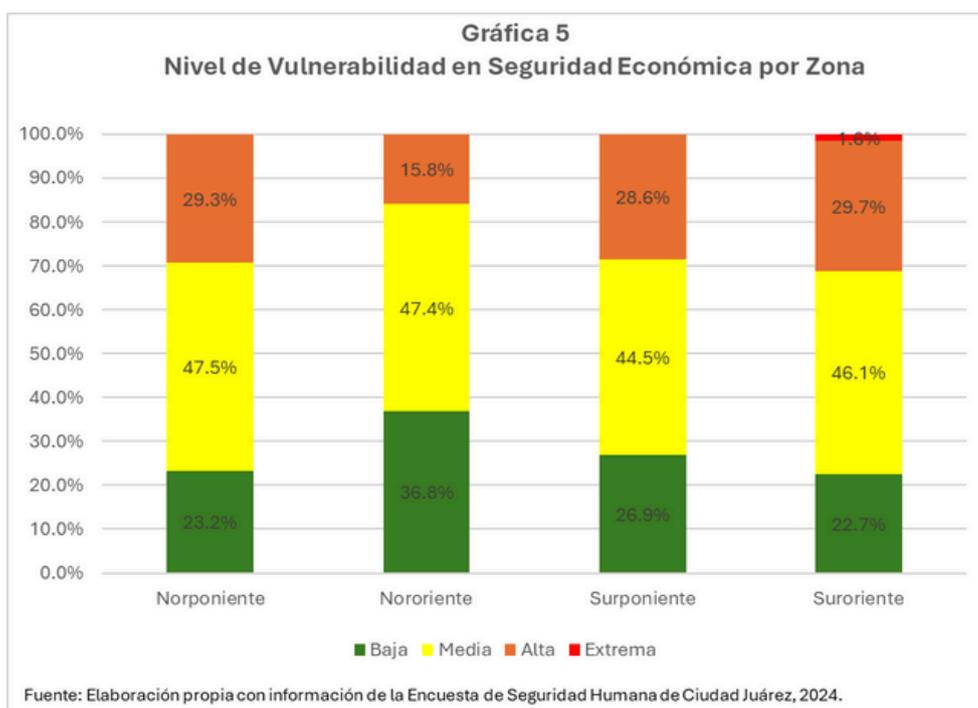
En conjunto, los datos indican que una parte importante de la población enfrenta múltiples barreras para ejercer su derecho a una vida digna con autonomía. Sin acceso a empleos estables, formación o vivienda, las personas ven limitada su capacidad de elección y de construir un proyecto de vida desde el bienestar. Estas condiciones no solo reproducen la pobreza y la desigualdad, sino que debilitan la cohesión social y limitan las posibilidades de desarrollo local.

¿Dónde se encuentran las personas más vulnerables a factores que amenazan la seguridad económica?

En Ciudad Juárez, la seguridad económica de las personas está fuertemente condicionada por el lugar en el que viven. Algunas zonas concentran mayores carencias estructurales, menor acceso a mecanismos de protección, y mayores niveles de exposición a riesgos como la extorsión o el endeudamiento informal. Otras, en cambio, presentan condiciones más favorables, aunque no exentas de retos.

Los datos sobre vulnerabilidad económica por zona revelan un panorama complejo (ver gráfica 5). En todas las zonas predomina la vulnerabilidad media como el nivel más frecuente. Las zonas Norponiente (47.5%), Nororiente (47.4%), Surponiente (44.5%) y Suroriente (46.1%) presentan porcentajes similares de población en este nivel, lo que indica una exposición a riesgos económicos, acompañada de un acceso parcial o intermitente a medios de protección y sustento. La zona Suroriente es la única que reporta casos de vulnerabilidad extrema (1.6%), lo que refleja una situación crítica para un pequeño pero significativo grupo de personas que carece de mecanismos efectivos para enfrentar amenazas a su seguridad económica.

Por otro lado, la zona Nororiente muestra el porcentaje más alto de personas con baja vulnerabilidad (36.8%), lo que sugiere una mayor estabilidad económica relativa frente a las demás zonas. Sin embargo, también es necesario considerar que en todas las zonas al menos una cuarta parte de la población



enfrenta vulnerabilidad alta (con rangos entre 15.8% y 29.7%), lo que representa un riesgo severo de exclusión económica, especialmente ante crisis o emergencias. A continuación, se revisa el comportamiento de indicadores por zonas, con más detalle.

La Zona norponiente tiene el porcentaje más alto de personas que declara tener dificultades recurrentes para llegar a fin de mes (40%) con un 7.14% que nunca logra cubrir sus necesidades básicas. En esta zona, el 10.61% identifica su empleo como inestable, y otro 24% como relativamente inestable.

Además, es una de las zonas donde más personas temen perder su empleo, y donde se presenta la mayor incidencia de extorsión: 7% de las personas ha sufrido este tipo de amenazas, de las cuales un 5% lo vive de forma constante. Es también la zona con mayor prevalencia de personas que han tenido que aceptar trabajos no deseados por necesidad económica. La percepción sobre las oportunidades laborales es muy baja: solo un 32.32% considera que hay empleos dignos, mientras que el resto los califica como precarios o inexistentes. En materia habitacional, el 71.43% no tuvo acceso a opciones de vivienda adecuadas durante el último año. Estos datos perfilan al norponiente como un territorio donde la precariedad, la violencia económica y la exclusión institucional se entrelazan y refuerzan mutuamente.

Por su parte, la Zona nororiente presenta los indicadores más favorables de toda la ciudad, aunque no está exenta de retos. Aquí, el 65.79% considera que sus ingresos son suficientes, el 76.32% no ha tenido que recurrir a préstamos informales, y el 71.05% tiene acceso a préstamos bancarios o de cooperativas.

Además, es la zona con mayor cobertura de seguro de desempleo (26.92%) y con el porcentaje más alto de personas con redes de apoyo confiables (100%). También destaca el 73.68% de las personas que tienen título de propiedad. Sin embargo, persisten ciertos rezagos: el 42.11% de las personas en esta zona afirma no tener acceso a formación o capacitación, lo que podría limitar sus posibilidades de mejorar su empleabilidad o transitar hacia trabajos mejor remunerados. Además, es también la zona con mayor prevalencia de fraudes financieros, con un 10.53% de víctimas frecuentes.

La Zona surponiente, aunque con menor percepción de inestabilidad laboral directa (solo 1%), es la zona donde más personas reportaron no haber tenido acceso a opciones de vivienda asequible en el último año (76.07%). También enfrenta una cobertura limitada de apoyos económicos: el 49.58% no recibió subsidios a pesar de necesitarlos, y de quienes sí los recibieron, el 18.49% los consideró insuficientes. Aunque tiene el porcentaje más bajo de personas que han aceptado trabajos no deseados, esto no compensa las deficiencias en respaldo institucional, lo que posiciona a esta zona como un espacio de estabilidad parcial.

La Zona suroriente presenta niveles elevados de inseguridad económica y alta dependencia de estrategias informales de supervivencia. Casi la mitad de su población (49.15%) teme perder sus ingresos, y un 50% ha recurrido a préstamos informales para cubrir necesidades básicas, con un 10.16% que lo hace de forma regular.

A pesar de que el 72.3% considera su empleo muy estable, este dato podría estar vinculado a trabajos con apariencia de formalidad, pero condiciones precarias, como los asociados al sector de la maquila. La cobertura de mecanismos institucionales de respaldo es muy baja: apenas el 38.28% tiene acceso a préstamos formales, y solo el 10.53% cuenta con seguro de desempleo. En materia de vivienda, se registra el nivel más bajo de propiedad (59.38%). Solo el 28.35% de su población tiene acceso a oportunidades de capacitación, y entre los adultos mayores de esta zona, apenas el 6.67% considera que existen oportunidades laborales. Este territorio combina estabilidad laboral aparente con alta fragilidad financiera e institucional, lo que lo convierte en un foco crítico para la intervención pública.

En conjunto, el análisis territorial muestra que la seguridad económica en Ciudad Juárez está determinada por múltiples factores de carácter estructural y geográfico, derivado de un proyecto territorial que se ha definido en función de las necesidades de los centros productivos. Mientras algunas zonas enfrentan escenarios de múltiples amenazas a la seguridad económica que van desde la informalidad y la deuda hasta la extorsión y la falta de acceso a vivienda, otras muestran avances importantes, pero todavía frágiles. Esta cartografía de desigualdades permite identificar prioridades territoriales claras para la política pública, con enfoques diferenciados y acciones focalizadas que reduzcan las brechas existentes.

Desigualdades en la Vulnerabilidad Económica entre Grupos Poblacionales

La seguridad económica en Ciudad Juárez no afecta a todas las personas por igual. Como se analiza en las secciones específicas por grupos poblacionales, los adultos mayores enfrentan condiciones estructuralmente más adversas, mientras que las brechas de género atraviesan a todos los sectores, reproduciendo desigualdades que impactan el ingreso, la estabilidad, el acceso a mecanismos de protección y el ejercicio efectivo de derechos económicos.

Los adultos mayores constituyen, de forma consistente, el grupo más vulnerable en esta dimensión. Solo el 34.04% considera que sus ingresos son suficientes, y un 19.15% ha sentido que podría perder su vivienda, cifra que asciende a 25% entre las mujeres adultas mayores. Además, el 74.47% no tiene acceso a formación o capacitación, lo que prácticamente los excluye de posibilidades de reinserción laboral o generación autónoma de ingresos. También enfrentan las tasas más bajas de acceso a préstamos (34.04%), y solo el 31.91% reporta capacidad de ahorro. Esta combinación de factores evidencia una doble exclusión estructural: tanto del mercado laboral como de los sistemas de protección social y financiera.

El índice también muestra una preocupante exposición temprana a condiciones económicas adversas entre adolescentes.



Foto: Adrián Alfredo Blanco / Ciudad Juárez

Un 18.37% ha tenido que aceptar trabajos que preferiría no realizar por necesidad, y más del 24% ha sido víctima de estafas, siendo este el grupo más afectado por fraudes financieros. En el caso de los jóvenes, si bien presentan una percepción más optimista que el promedio —el 68.42% considera que su empleo es estable y cerca del 63% cree que sus ingresos son suficientes—, esta confianza convive con condiciones objetivas de riesgo. Son el grupo que más califica las oportunidades laborales como escasas o muy precarias. Además, solo el 54.88% cuenta con título de propiedad, lo que limita su estabilidad habitacional y patrimonial, y el 29.27% reporta no tener acceso a oportunidades de capacitación. Aunque acceden en mayor medida a préstamos, el 85.45% no cuenta con seguro de desempleo, lo que los deja expuestos a crisis laborales sin respaldo institucional.

El índice también visibiliza cómo las brechas de género atraviesan estructuralmente la dimensión económica de la seguridad. En general, las mujeres enfrentan condiciones más desfavorables en materia de ingresos, estabilidad, acceso a empleo, formación y respaldo institucional. La combinación de desigualdad económica, sobrecarga de cuidados y baja protección institucional configura un patrón de exclusión estructural que exige respuestas de política pública con enfoque de género. Estas brechas se agravan especialmente entre las mujeres mayores, quienes además representan una proporción significativa del trabajo doméstico no remunerado, lo que limita aún más su autonomía económica.

Garantizar la seguridad económica de la población requiere de una intervención pública integral que no solo promueva empleos dignos, sino que elimine las barreras estructurales al acceso a la formación y habilite mecanismos reales para acceder a bienes fundamentales como la vivienda. La ausencia de estas condiciones amenaza el derecho al desarrollo económico, entendido como la capacidad de participar activamente en la vida productiva de la ciudad con igualdad de condiciones y dignidad.

Reflexiones sobre la Seguridad Económica en Ciudad Juárez

Aunque los niveles de inseguridad económica extrema en Ciudad Juárez no son tan alarmantes como en otras dimensiones, el índice revela un fenómeno más complejo: la ausencia de factores de protección institucional, laboral y social que garanticen estabilidad económica a mediano y largo plazo. Las personas no solo enfrentan ingresos bajos o empleos precarios, sino que lo hacen sin redes de respaldo adecuadas, sin acceso pleno a servicios de cuidado, sin mecanismos de ahorro ni protección ante crisis.

Un elemento estructural que condiciona profundamente la seguridad económica en la ciudad es el modelo

económico fronterizo, basado en industrias maquiladoras, comercio transfronterizo y economías paralelas o ilegales. Este modelo moldea las trayectorias laborales, las aspiraciones de las juventudes, los vínculos comunitarios y los procesos de socialización, generando una lógica productiva que no necesariamente prioriza las necesidades de bienestar de la población. Así, la inseguridad económica no es solo un fenómeno material: es el resultado de un modelo de desarrollo urbano que reproduce desigualdades estructurales y dependencia externa.

Especial atención merece el sistema de cuidados, cuya ausencia o informalidad constituye una barrera persistente para la autonomía económica de las mujeres, y la realidad de las personas adultas mayores, quienes enfrentan una combinación de dependencia económica, falta de ingresos propios y exclusión del mercado laboral. Ambos temas exigen políticas públicas específicas que reconozcan su centralidad en el diseño de una seguridad económica verdaderamente humana.

Recomendaciones

- Desarrollar políticas laborales inclusivas y con enfoque territorial, que generen empleos dignos para mujeres, jóvenes y personas cuidadoras, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad económica como el Suroriente y Norponiente.
- Ampliar el acceso a mecanismos de protección social, incluyendo seguros de desempleo, pensiones dignas y sistemas de ahorro voluntario, adaptados a las realidades del trabajo informal o discontinuo.
- Impulsar un sistema integral de cuidados, que reconozca, valore y redistribuya el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, mediante la creación de infraestructura pública (guarderías, centros de día, apoyos a personas cuidadoras), con especial atención a mujeres y hogares monoparentales.
- Ampliar las oportunidades de formación técnica y certificación de competencias laborales, conectadas con sectores de valor agregado y no únicamente con maquiladoras, para romper con los ciclos de precariedad.
- Incluir explícitamente a las personas adultas mayores en las políticas económicas, reconociendo sus necesidades de ingreso, inclusión financiera y seguridad laboral adecuada para su etapa de vida.
- Reconocer y prevenir los impactos colaterales de las economías ilegales, a través de estrategias que visibilicen su vínculo con varias dimensiones de inseguridad y generen alternativas económicas reales, sostenibles y libres de riesgo.



4.3 Seguridad Alimentaria

Seguridad Alimentaria

¿Qué medimos en esta dimensión?

En esta dimensión se midió la vulnerabilidad de las personas frente a factores que amenazan su acceso a una alimentación suficiente y nutritiva. Para ello, se analizaron indicadores agrupados en tres categorías: indicadores que miden:

- Exposición a amenazas concretas que impiden a las personas acceder a alimentos adecuados.
- Acceso a servicios de protección frente a choques repentinos o carencias estructurales.
- Libertad de las personas para ejercer su derecho a una alimentación sana y suficiente.

¿Cómo medimos la Seguridad Alimentaria?

Para medir la seguridad alimentaria se consideró la exposición en el último año a situaciones que comprometen el acceso a una alimentación adecuada, como la insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades básicas incluyendo alimentos, la falta de disponibilidad de comida suficiente y variada en el hogar, la carencia de establecimientos cercanos que ofrezcan alimentos saludables y la falta de acceso a agua potable.

También se evaluó la recepción de ayudas alimentarias como despensas, comedores comunitarios o bancos de alimentos. En cuanto a mecanismos de protección se examinó el acceso efectivo a programas de asistencia alimentaria y la disponibilidad de redes de apoyo comunitario para obtener alimentos ante una crisis alimentaria.

Finalmente, se analizó el ejercicio del derecho a la alimentación mediante la posibilidad real de acceder a una dieta nutritiva y suficiente, la autonomía económica para adquirir alimentos básicos y la garantía de condiciones estructurales que permitan una alimentación adecuada y digna.

¿Qué tan vulnerables son las personas en esta dimensión y por qué?

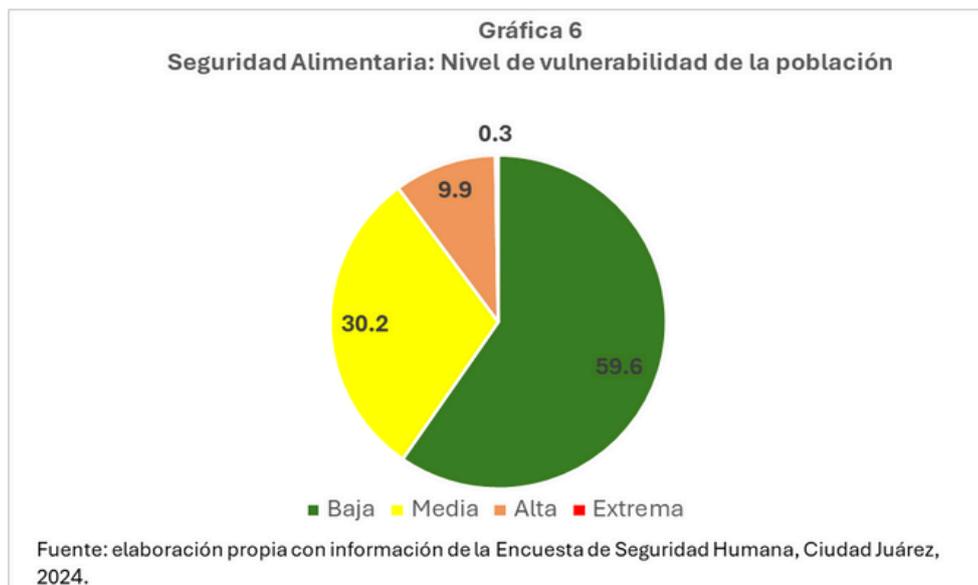
El índice muestra que la mayoría de la población de Ciudad Juárez (59.5%) se encuentra en un nivel de baja

vulnerabilidad, lo que indica que estas personas disponen de un acceso adecuado y constante a la alimentación, y cuentan con medios de protección frente a posibles riesgos (ver gráfica 6). Sin embargo, un 40% de la población enfrentó algún nivel de inseguridad alimentaria durante el último año. El 30.2% presenta vulnerabilidad media, lo que sugiere que, aunque cuentan con acceso a alimentos, enfrentan problemas que pueden ponerlo en riesgo y cuentan con acceso parcial, intermitente o inestable a mecanismos de protección frente a esos problemas.

Resulta preocupante que el 9.9% de la población se encuentre en vulnerabilidad alta, ya que esto implica que enfrentan múltiples amenazas para su sustento sin contar con mecanismos efectivos de protección o respuesta. Estos datos subrayan la necesidad de fortalecer los programas de apoyo alimentario con enfoque territorial y de derechos.

Los datos sobre acceso a ayudas alimentarias revelan dos problemáticas críticas en la protección de la seguridad alimentaria, por un lado, un 45.6% de la población vulnerable no recibió apoyos a pesar de necesitarlos, evidenciando fallas en los mecanismos de focalización y distribución de los programas sociales. A esta situación se suma el hecho de que solo el 7.3% de población sí recibió ayudas alimentarias en el último año. Este escenario refleja una brecha entre la oferta institucional de protección y las necesidades reales de la población, particularmente en hogares con adultos mayores, donde hasta el 59.6% experimenta inseguridad alimentaria de media a alta severidad. Para cerrar esta brecha, se requieren estrategias integrales que combinen mejor focalización con participación comunitaria, ampliación de la cobertura con énfasis en zonas marginadas, y mecanismos de monitoreo que garanticen la calidad y regularidad de las ayudas, asegurando que estos apoyos sean un derecho efectivo.

Otro aspecto que afecta la vulnerabilidad de las personas es la posibilidad de acceso a redes familiares, de amigos o conocidos. A pesar de que la mayoría de las personas cuenta con este tipo de redes de confianza, un 5.2% de la población reportó no tenerlas (ya sea porque no está segura en quién puede confiar o simplemente porque no tiene a nadie), lo que genera una grave limitante para acceder a apoyos alimentarios, tanto informales como institucionales, en situaciones de crisis.



Así mismo, el 46.3% de los encuestados indica que sus ingresos no les permiten ahorrar, lo que refleja una precariedad económica que limita severamente su capacidad para enfrentar crisis alimentarias. Sin capacidad de resiliencia financiera, estas personas dependen completamente de ingresos inmediatos para comer, volviéndose extremadamente vulnerables ante cualquier imprevisto (como pérdida de empleo o alzas de precios).

Con respecto al derecho a una alimentación nutritiva y suficiente, los datos revelan que, aunque el 61.2% de los hogares contó con suficiente comida para llevar una vida saludable, un 38.8% enfrentó una situación alimentaria precaria, donde destacan dos grupos críticos, un 6.3% de la población que no tuvo alimentos suficientes para comer tres veces al día y un 3.1% que carece de acceso a agua potable en sus viviendas, combinación que agrava su situación al limitar no solo la disponibilidad de alimentos, sino también su preparación e higiene. Este último segmento, aunque pequeño en porcentaje, representa a la población en mayor riesgo, ya que la falta de agua potencia los efectos de la escasez alimentaria, particularmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Paralelamente, el 32.6% que reporta acceso suficiente, pero con limitaciones en variedad y preferencias nutricionales conforma un grupo en riesgo latente, susceptible de caer en inseguridad grave ante crisis económicas o ambientales.

¿Dónde están las personas más vulnerables?

El índice permite observar diferencias en el nivel de vulnerabilidad alimentaria que experimentaron las personas en distintas zonas de la ciudad. La Zona Nororiente presenta los mejores resultados, con un porcentaje de 84.2% de la población en vulnerabilidad

baja, lo que refleja una situación alimentaria relativamente estable. La Zona Norponiente por el contrario muestra la situación más crítica, especialmente entre personas adultas mayores y jóvenes, donde se observan proporciones más altas de vulnerabilidad media y alta.

En la Zona Surponiente, la situación es intermedia, con la mayoría de la población en vulnerabilidad baja, pero una proporción significativa de personas en niveles medio y alto de riesgo (41.2%). En la Zona Suroriente, aunque la mayoría también presenta vulnerabilidad baja, destacan los adultos mayores, entre quienes el 33.3% están en vulnerabilidad media y un 26.7% en alta.

Estos resultados evidencian la necesidad de reforzar las redes de apoyo alimentario, con especial atención a grupos etarios específicos y zonas con menor estabilidad alimentaria. A continuación, se analizan indicadores específicos para ilustrar estas diferencias territoriales.

La zona Norponiente (Zona 1) registra el mayor porcentaje de hogares cuyos ingresos nunca alcanzan (7.1%) y donde el 39.8% enfrenta inseguridad económica recurrente, sino también por presentar altos niveles de precariedad alimentaria, un 10.1% de familias a veces no consume tres comidas diarias (el índice más alto) y un 46.5% que, pese a necesitarlas, no recibe ayudas alimentarias (segundo lugar en este rubro). A esto se suma que solo el 5.1% accede a asistencia alimentaria, evidenciando una brecha entre necesidad y acceso a apoyo.

La zona suroriente de la ciudad (Zona 4), aunque con menor insuficiencia económica extrema (3.2%), destaca por ser la peor en acceso a alimentos de calidad (38.3%) y donde la mitad de las familias necesitadas no

Clústeres de Indicadores de Seguridad Alimentaria



Exposición a amenazas

- Riesgo de desnutrición por falta de ingresos, inflación o desabastecimiento.
- Riesgos a la generación de ingreso básico.



Acceso a protección

- Acceso a lugares de provisión de alimentos para grupos vulnerables.
- Acceso a mecanismos de protección económica.



Libertad para ejercer derechos

- Acceso a comida y agua en cantidad y calidad necesarias para una vida saludable.

recibe ayuda (50%), pese a tener el mayor porcentaje de receptores de ayudas (9.4%), lo que sugiere una cobertura insuficiente.

El surponiente (Zona 3) tiene el porcentaje más alto de personas que no tienen suficientes ingresos de manera estable (44.5%) y un 33.6% con limitaciones en el tipo de alimentos al que tiene acceso, además de que 45.4% de quienes necesitan ayuda no la obtienen.

En contraste, el nororiente (Zona 2) confirma ser la zona menos vulnerable, solo 2.5% sufre insuficiencia económica crónica, 28.9% no recibe ayudas pese a necesitarlas (el menor porcentaje) y registra los índices más bajos de escasez alimentaria (2.6%).

Estos datos reflejan una clara disparidad, donde el norponiente (Zona 1) requiere intervención urgente por su combinación de pobreza extrema, hambre y falta de acceso a ayudas, seguida del sur oriente (Zona 4) caracterizada por su alta demanda insatisfecha de alimentos y el suroriente (Zona 3) de inestabilidad económica y alimentaria. Por su parte, el nororiente (Zona 2) con vulnerabilidad marginal, podría servir como referencia para el diseño de políticas en el tema alimentario. En conjunto, los datos revelan una distribución desigual de la seguridad alimentaria en el territorio, donde ciertos sectores, como las Zonas 1 y 4, enfrentan mayores dificultades tanto económicas como en el acceso real a una alimentación suficiente y adecuada. Estas diferencias reflejan no solo condiciones materiales desiguales, sino también la necesidad de diseñar estrategias de intervención focalizadas para reducir la vulnerabilidad alimentaria en contextos específicos.

Reflexiones sobre la Seguridad Alimentaria en Ciudad Juárez

El índice evidencia que, si bien la mayoría de la población en Ciudad Juárez goza de condiciones relativamente estables en cuanto al acceso a alimentos, una proporción significativa enfrenta algún grado de inseguridad alimentaria, incluyendo a personas expuestas a múltiples amenazas a su sustento y sin medios adecuados de protección. Entre las causas identificadas se encuentran fallas estructurales en la cobertura y focalización de los apoyos alimentarios, la falta de resiliencia económica, y una desconexión preocupante entre las necesidades reales de la población en situación más crítica (9.9%) y la respuesta del sistema de protección social.

Para garantizar el derecho efectivo a una alimentación suficiente y nutritiva, se necesitan estrategias alimentarias integrales con enfoque territorial y poblacional. Es prioritario fortalecer y ampliar los programas de ayuda alimentaria en zonas de alta vulnerabilidad, como el Norponiente y el Suroriente, con énfasis en hogares con adultos mayores y sin acceso a agua potable. También se sugiere articular mejor las ayudas con mecanismos comunitarios y redes de confianza para mejorar la cobertura. Además, es urgente diseñar políticas que aumenten la estabilidad económica de los hogares, reduzcan la dependencia de ingresos informales, y generen mecanismos de resiliencia —como acceso al ahorro o microcréditos— para enfrentar emergencias alimentarias sin comprometer la salud o dignidad de las personas.





4.4 Seguridad en Salud

Seguridad en Salud

¿Qué medimos en esta dimensión?

En esta dimensión se evaluó la vulnerabilidad de las personas frente a múltiples factores y situaciones que amenazan su derecho a disfrutar de salud física y mental. Para ello, se consideró el acceso que tienen a servicios y recursos que les permitan mantenerse saludables, recuperarse de enfermedades y enfrentar los efectos que tienen contextos y situaciones adversas en la salud.

¿Cómo medimos la Seguridad en Salud?

La medición de la seguridad en salud se realizó a partir de diversos indicadores que reflejan las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales en las que viven las personas y que influyen profundamente en su salud y calidad de vida. Entre estos indicadores se incluyeron, en primer lugar, aquellos relacionados con el acceso a los servicios de salud. Se evaluó si las personas pudieron acceder a atención médica, tratamientos y medicinas, si tuvieron acceso a hospitales y a servicios de salud mental, así como su percepción sobre la calidad de estos servicios.

Además, se consideraron indicadores que permiten comprender el grado de exposición a factores que incrementan su vulnerabilidad en salud. Esto incluyó aspectos como la presencia de enfermedades crónicas, el riesgo de desnutrición, los niveles de estrés experimentados durante el último año, la capacidad para gestionar emociones difíciles y la frecuencia de consumo de alcohol o drogas.

Por otro lado, se tomó en cuenta el impacto de las condiciones de vivienda y del entorno comunitario. Se valoró si las personas disponían de servicios básicos como agua potable y recolección de basuras, el estado de salubridad y limpieza del ambiente en que habitan, así como su exposición a riesgos ambientales o desastres naturales. También se analizó su acceso a espacios adecuados para la actividad física y la recreación, elementos fundamentales para preservar la salud integral.

El índice también incorporó indicadores sobre violencias y situaciones traumáticas. Se analizó si en el último año las personas atravesaron eventos como la pérdida de seres queridos o vivieron con miedo en espacios

cotidianos —como el hogar, la escuela, el trabajo o entornos digitales—. Asimismo, se registró su exposición a violencias físicas o psicológicas y el impacto de experiencias de discriminación y exclusión social vinculadas a identidad, género, condición socioeconómica u otros factores.

Finalmente, se evaluaron las condiciones socioeconómicas y el acceso a redes de apoyo social. Se valoró por ejemplo la estabilidad laboral y la suficiencia de los ingresos para cubrir necesidades básicas como alimentación y vivienda, y por otro lado si las personas contaban con familiares, amistades u otras personas de confianza para brindar apoyo emocional y material.

Los indicadores se agruparon en tres categorías principales:

- Exposición a factores que amenazan la salud física y mental, como enfermedades crónicas, estrés, consumo de alcohol y drogas, violencias, discriminación y otros factores socio ambientales.
- Acceso a servicios de salud oportunos, eficientes y asequibles.
- Ejercicio y disfrute del derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física, mental y emocional.



Clústeres de Indicadores de Seguridad en Salud



Exposición a amenazas

- Exposición a amenazas a la salud física y mental (enfermedades crónicas, estrés, consumo alcohol y drogas, etc.)
- Miedo a movilizarse y usar el espacio público.
- Exposición a violencia física y psicológica (en el Hogar, la escuela, sitios públicos, o el trabajo, online/ social media).
- Exposición a violencia policial.
- Victimización.
- Percepción de seguridad.
- Riesgo de desnutrición por falta de ingresos, inflación o desabastecimiento.
- Riesgo a ver ingresos y medios de vida reducidos de forma arbitraria, repentina o violenta.
- Exposición a estereotipos negativos, devaluación, deshumanización o estigmatización.
- Exposición a amenazas a la identidad social / límites a la identidad / discriminación.
- Exposición a ambientes adversos para la salud y la vida digna.
- Acceso a vivienda que permita condiciones de vida saludables.
- Riesgos a la generación de ingreso básico.
- Suficiencia de los ingresos actuales.
- Acceso a empleos y fuentes de subsistencia dignas.
- Exposición a efectos negativos de las redes sociales.



Acceso a protección

- Acceso a servicios de salud (oportuno, eficiente y asequible).
- Acceso a espacios urbanos que permitan tener una vida sana.
- Acceso a redes de apoyo confiables.
- Acceso a información y guía para hacer un uso saludable de la tecnología.



Libertad para ejercer derechos

- Libertad para disfrutar del más alto nivel posible de salud física, mental y emocional

¿Qué tan vulnerables fueron las personas frente a factores que amenazan su salud?

El índice revela que el 57.5% de la población está experimentando vulnerabilidad media y alta en su seguridad en salud. De estas el grupo más numeroso de personas (43.5%) enfrentan amenazas significativas a su salud, pero cuentan parcialmente con algunos recursos, estrategias o formas de afrontarlas y por eso experimentan un nivel medio de vulnerabilidad.

Por otro lado, el 13.8% de la población de la ciudad enfrenta alta vulnerabilidad lo que significa que enfrenta graves desafíos para su salud física y mental y están enfrentando dificultades significativas para acceder a servicios de salud y deben ser una prioridad para las políticas de intervención.

El índice muestra que los niveles de vulnerabilidad en esta dimensión se deben principalmente a las dificultades que enfrentan amplios sectores de la población en el acceso a servicios de protección para la salud física y mental.

En cuanto al acceso y la calidad de los servicios de salud, el índice revela que más de la mitad de la población (52.9%) tiene acceso limitado a hospitales y centros de salud. Prácticamente una de cada dos personas depende de servicios distantes o de calidad incierta: el 28.4% indicó que los hospitales están muy lejos, lo que afecta directamente la capacidad de respuesta ante emergencias, y el 24.5% señaló que depende de uno que no está lejos, lo que implica dependencia del transporte.

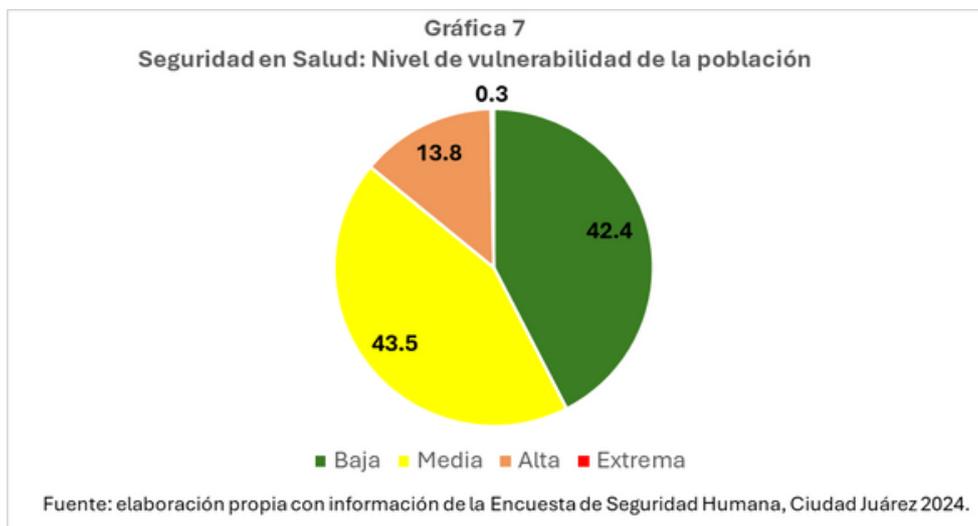
Otro factor que evidencia deficiencias estructurales en el acceso a servicios de salud es que, aunque más de la mitad de los encuestados tiene una percepción positiva del servicio, el 46.5% se declara insatisfecho: el 32.6% lo califica como "regular" y el 13.9% como "malo" o "muy malo".

Un indicador clave es el acceso a tratamientos, medicamentos y atención médica en el último año: alrededor del 30% reportó imposibilidad o dificultades para acceder a lo que necesitaba. Esto sugiere problemas de cobertura y disponibilidad parcial que afectan la experiencia de atención y ponen en evidencia brechas importantes que deben abordarse si se quiere garantizar el derecho a la salud. Estas dificultades pueden deberse a la disponibilidad limitada de medicamentos, costos inaccesibles o barreras logísticas para acceder a los servicios.

El acceso a servicios de salud reproductiva también es limitado: casi 4 de cada 10 personas (38.4%) reportan no tener acceso a estos servicios, que incluyen planificación familiar, controles ginecológicos, información sobre salud sexual, entre otros. Esta brecha representa una violación importante a los derechos sexuales y reproductivos. Las causas pueden estar relacionadas con la falta de oferta de servicios, costos, barreras administrativas, estigmas o restricciones culturales. Las consecuencias incluyen mayor riesgo de embarazos no deseados, enfermedades, pérdida de autonomía y mayor desigualdad de género, especialmente entre mujeres jóvenes.

En cuanto al acceso a servicios de salud mental, casi la mitad de la población (50.9%) reporta no tener acceso, lo que es alarmante considerando el creciente impacto de la salud mental en la calidad de vida. Esta carencia puede estar asociada a la falta de infraestructura, altos costos, o estigmas que impiden buscar ayuda.

Estos resultados deben analizarse considerando la diversidad de factores a los que está expuesta la población y que también afectan su salud física y mental. En términos de salud mental, el 21.6% reporta que durante el último año su estado de salud fue "regular", lo que indica malestares emocionales leves o esporádicos. Un 6.0% indicó que su salud mental fue



"mala" o "muy mala", posiblemente vinculada a ansiedad o depresión no diagnosticadas, estrés crónico o experiencias traumáticas.

El estrés es una condición generalizada con más del 70% de las personas reportó experimentarlo, el 40.3% de ellas en niveles altos y el 24% niveles muy altos que impactan severamente su salud. Estos niveles pueden estar asociados a diversos factores, entre estos inseguridad económica, violencia, precariedad laboral y sobrecarga de responsabilidades.

El estrés y la dificultad para manejar emociones pueden traducirse en problemas de salud general y en comportamientos de riesgo, como el consumo problemático de sustancias. En la ciudad casi el 37% de los encuestados reportó dificultades para manejar sus emociones durante el último año, lo que indica una vulnerabilidad significativa. La exposición a violencia, la pérdida de seres queridos y el miedo constante pueden aumentar el riesgo de trastornos, depresión, ansiedad crónica y somatización, así como de consumo de alcohol, drogas o ansiolíticos sin prescripción como mecanismos de escape.

En cuanto al consumo de alcohol que pueden convertirse en amenaza para la salud el 38.1% de personas reportó consumo ocasional de alcohol, y un 7.3% consumo muy frecuente. Aunque minoritario, este último grupo está en alto riesgo y requiere atención prioritaria. Los jóvenes muestran los niveles más altos de consumo ocasional y frecuente, posiblemente por dinámicas sociales, independencia reciente y menor percepción de riesgo. Entre los adolescentes, el 34.7% reportó consumo ocasional de alcohol.

En cuanto al consumo de drogas, aunque la mayor parte de la población no lo reporta, el 2% de adolescentes y jóvenes reconoció consumirlas. El hecho de que 4% de los adolescentes prefieran no responder a esta pregunta sugiere subregistro por miedo, estigma o presión social.

Ante la dificultad para reconocer estos problemas, otro indicador que tuvo en cuenta el índice fue la percepción de venta de drogas en espacios cercanos como escuelas y cerca a sus hogares: el 14.3% afirma que sí se vende droga en estos entornos inmediatos. Esto representa una alarma para instituciones y servicios locales. Los adolescentes son el grupo que más reconoce esta situación (24.5%), probablemente por mayor exposición en entornos escolares y mayor sensibilidad al entorno.

Inestabilidad y precariedad en las condiciones socioeconómicas también afectan la salud. En el 2024 en la ciudad casi el 40% de la población temió perder su empleo, lo que refleja una preocupación extendida sobre la estabilidad laboral, posiblemente influida por

contratos precarios, informalidad y falta de protección social. Este temor tiene efectos sobre la salud mental, el estrés y la planificación familiar.

Respecto a las condiciones generales de salud, si bien la mayoría percibió positivamente su salud, el índice muestra que existen sectores vulnerables: el 21% padece enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o enfermedades respiratorias, lo que requiere atención médica sostenida. Además, el 25.1% calificó su salud física como "regular", y el 5% como "mala" o "muy mala" durante el último año.

Las condiciones de vivienda y el entorno también afectan la salud. Casi la mitad de la población (47.2%) considera que su ambiente no permite vivir de forma saludable, y el 13.2% lo describe como nada limpio ni saludable. Esto puede estar relacionado con contaminación, deterioro urbano o inseguridad. La zona Surponiente muestra las tasas más altas de insatisfacción (21%). Además, más del 50% de la población encuestada no tiene espacios adecuados para el deporte y la recreación, lo que afecta la salud física, el uso del tiempo libre y la cohesión social.

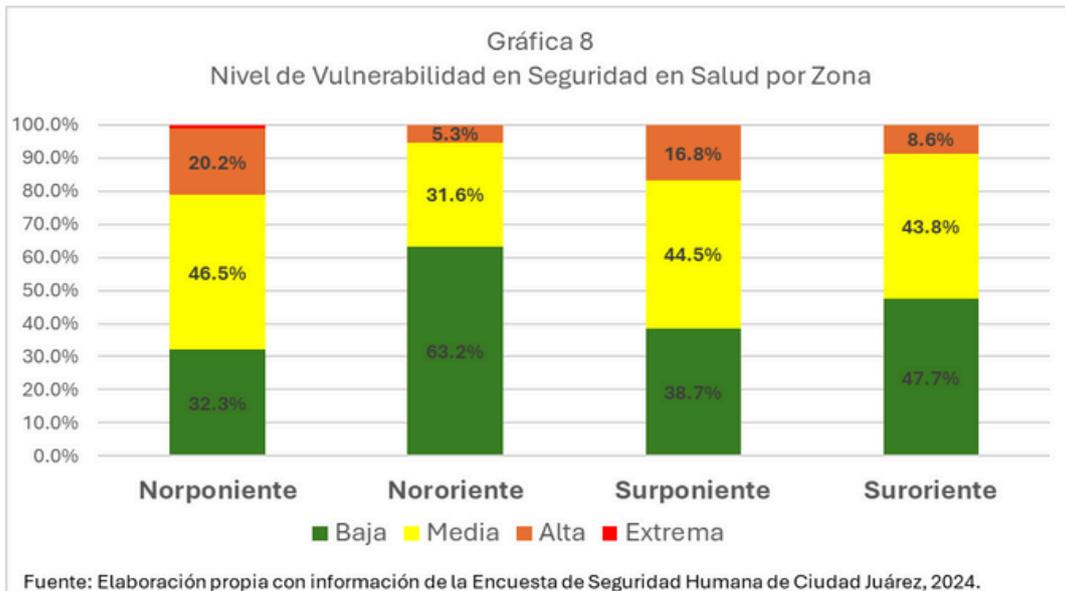
¿Dónde se encuentran las personas más vulnerables a factores y situaciones que amenazan su salud?

El índice evidencia marcadas diferencias territoriales en los niveles de vulnerabilidad frente a múltiples factores que afectan la salud física y mental de la población en Ciudad Juárez.

La Zona 2 Nororiente se destaca como el territorio con menor vulnerabilidad en salud, con el 63.2% de su población en la categoría de baja vulnerabilidad. Sus habitantes reportan mejor percepción de salud general (ninguna persona calificó su salud como mala o muy mala 78.9% dijo gozar de muy buena salud durante el último año). Esta zona es además, donde más personas afirman tener un hospital cercano (68.4%). Sin embargo, también presenta el mayor déficit de espacios deportivos (44.7% dice que no existen).

En el otro extremo, la Zona 1 Norponiente muestra la situación más crítica ya que concentra los niveles más altos de personas en vulnerabilidad media (46.5%) y alta (20.2%). Además, es donde más personas carecen de acceso a salud mental (61.2%) y donde se registra la mayor percepción de venta de drogas en el entorno inmediato (20.2%). También es la zona con mayor proporción de personas que califican su salud como muy mala (7.1%), lo que revela desigualdades internas severas.

Las zonas 3 Surponiente y 4 Suroriente presentan perfiles intermedios. En ambas predomina la media vulnerabilidad, pero con focos importantes de alta



vulnerabilidad (16.8% en zona 3 y 8.6% en zona 4). La zona 4 es la que reporta mayor prevalencia de enfermedades crónicas (25.7%), mientras que la zona 3 destaca por su limitada cobertura en salud mental (54% sin acceso). Ambas zonas muestran además niveles relevantes de percepción de insalubridad en el entorno y carencia de espacios recreativos.

Finalmente, aunque la zona 2 muestra condiciones favorables en salud general y acceso médico, las demás zonas presentan combinaciones complejas de carencias y riesgos que deben atenderse con estrategias diferenciadas. Estas diferencias territoriales subrayan la urgencia de diseñar respuestas adaptadas a cada zona, que integren mejoras en infraestructura sanitaria, salud mental, seguridad comunitaria y promoción del bienestar.

Reflexiones sobre la Seguridad en Salud en Ciudad Juárez

La índice evidencia carencias estructurales en cobertura y calidad de los servicios médicos y una acumulación de riesgos relacionados con el entorno urbano, la salud emocional, la precariedad económica y la exposición constante a la violencia.

Las disparidades territoriales, especialmente en la Zona Norponiente, subrayan la necesidad de una respuesta diferenciada que considere las múltiples dimensiones que afectan la salud y el bienestar de la población.

Para mejorar la seguridad en salud manera efectiva, se requiere una estrategia integral que combine inversión en infraestructura sanitaria, expansión de servicios de salud mental, políticas de prevención y promoción de salud, y mejoras en el entorno urbano. Es fundamental garantizar el acceso oportuno, gratuito y digno a servicios de salud física y mental, con especial énfasis en grupos históricamente desprotegidos como las mujeres, adolescentes, jóvenes y personas mayores.

Asimismo, es vital adoptar un enfoque intersectorial que aborde las condiciones estructurales que generan estrés, deterioro emocional y enfermedades crónicas. La institucionalización de un enfoque de seguridad humana permitirá diseñar respuestas sostenibles que integren atención médica, bienestar psicosocial y participación comunitaria, contribuyendo a reducir las brechas de acceso y a mejorar la salud integral de toda la población.



Foto: Joice Rivas / Pexels

4.5 Seguridad Política

Seguridad Política

¿Qué medimos en esta dimensión?

En esta dimensión se evaluó qué tan vulnerables son las personas frente a factores que amenazan el ejercicio de derechos democráticos, como la participación. Se agruparon los resultados en tres categorías de indicadores:

- Indicadores que miden la exposición a amenazas concretas que privan a las personas de recibir un trato igualitario ante la ley y obstaculizan el derecho a la libertad y la participación en asuntos públicos.
- Indicadores que evalúan el acceso a servicios de protección brindados por instituciones públicas.
- Indicadores que miden la libertad de las personas para ejercer su derecho a una participación política y comunitaria efectiva, con capacidad de incidencia en la toma de decisiones.

¿Cómo medimos la seguridad política?

Para medir la seguridad política se consideró la exposición de la población, en el último año, a agresiones o detenciones arbitrarias por oficiales de policía; las posibilidades para expresar libremente las opiniones sin temor a represalias; y, también, si perciben riesgos al participar en elecciones, protestas o formar parte de sindicatos.

En cuanto a los mecanismos de protección se valoró la confianza ciudadana en la capacidad de la policía para cumplir eficazmente con sus funciones; en caso de sufrir delitos, la probabilidad de denunciar ante las autoridades competentes; la confianza que se tiene en los servicios de atención de mujeres víctimas de violencia; y la confianza en instituciones y funcionarios públicos. Por último, en lo concerniente al ejercicio de derechos, se midieron aspectos relacionados con la posibilidad de participar en asuntos públicos y en las decisiones que afectan su vida o su comunidad.

Clústeres de Indicadores de Seguridad Política



Exposición a amenazas

- Exposición a formas de represión y límites a la participación.
- Exposición a violencia policial.



Acceso a protección

- Percepción del servicio de protección que ofrecen instituciones públicas.
- Confianza en la capacidad de las instituciones de actuar conforme a principios democráticos.



Libertad para ejercer derechos

- Libertad para ejercer el derecho a la libre expresión y a la participación en asuntos públicos y decisiones comunitarias.

¿Qué tan vulnerables son las personas en esta dimensión y por qué?

La seguridad política fue la segunda dimensión en la que la población de la ciudad registró mayor vulnerabilidad en el 2024. El índice revela que solo el 21.4% de la población se encuentra en un nivel de baja vulnerabilidad en esta dimensión de la seguridad, mientras que el 40.6% presenta vulnerabilidad media, lo que indica que una parte significativa de las personas enfrenta amenazas o restricciones parciales en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos (ver gráfica 9).

Es notable es que un 31.5% de la población se encuentra en un nivel de alta vulnerabilidad, y un 6.5% en situación extrema, lo que implica una carencia grave de acceso a mecanismos efectivos de participación y una profunda desconfianza en las instituciones públicas.

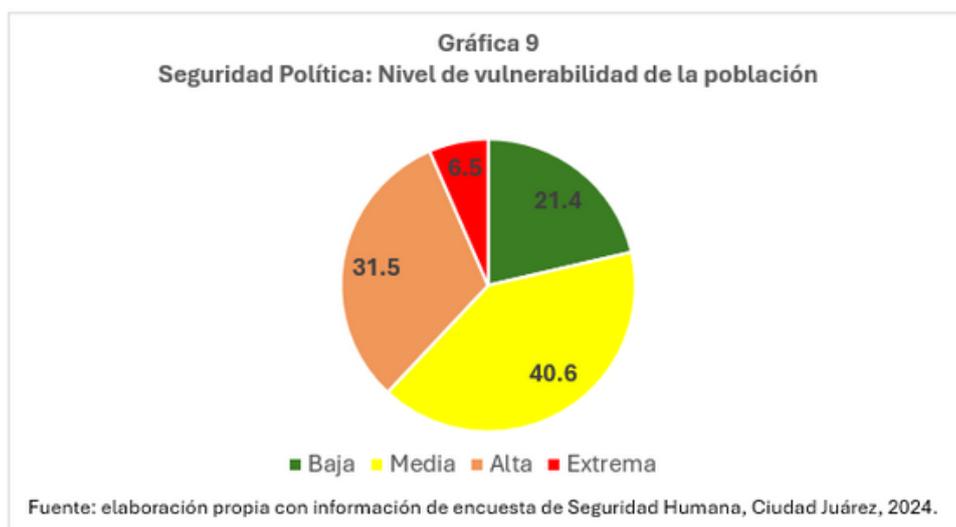
Estos resultados subrayan la necesidad de fortalecer los canales de participación ciudadana y garantizar condiciones que permitan a todas las personas incidir en las decisiones públicas. Asimismo, es fundamental responder con eficacia a las demandas de justicia de la ciudadanía para reconstruir la confianza institucional y fomentar una participación política más activa en torno a los principales desafíos que enfrenta la ciudad.

Análisis de la exposición a amenazas a la seguridad política

A continuación, se analizan resultados de los indicadores usados para medir la seguridad política. Los datos sobre exposición a amenazas en esta dimensión muestran una situación compleja respecto al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos.

Ante la pregunta de si en el último año ha sido agredido o detenido de manera arbitraria por oficiales de policía, el 9.4% declaró que en cierta ocasión le había sucedido. Este porcentaje no es menor considerando la gravedad de la violación que implica: se trata de una experiencia directa de abuso institucional que vulnera derechos fundamentales como la libertad personal, la presunción de inocencia y el debido proceso. Esta cifra es aún más significativa si se interpreta en relación con el contexto general de desconfianza hacia las instituciones de seguridad pública.

Otro indicador importante de esta dimensión política es el referente a la expresión libre de opiniones sin temor a represalias; en este caso casi una tercera parte de la población (28.4%) señaló que no puede expresar sus opiniones por temor a represalias.



Aunado a este problema de limitación para expresarse con libertad, que restringe la participación ciudadana en los asuntos públicos y socava el debate democrático, está el hecho de que el 34.5% de los encuestados consideró que es riesgoso participar en elecciones, protestas o formar parte de asociaciones o sindicatos.

La presencia de agresiones o detenciones arbitrarias por parte de oficiales de policía, así como el temor a represalias, limita gravemente la libertad de expresión y la participación ciudadana. Estas prácticas pueden generar una sociedad silenciosa y apática, donde las voces críticas y disidentes son acalladas, debilitando así la democracia y la justicia. La ciudadanía merece ser tratada con respeto y dignidad, y es fundamental que las instituciones trabajen activamente para proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Acceso a mecanismos de protección

Dentro de los factores de protección, que son de gran importancia para la dimensión política, se encontró una muy baja confianza institucional que debilita la legitimidad democrática. Solo el 14.6% de la población confía plenamente en la capacidad de la policía para cumplir su función de manera eficaz; mientras que el 22.5% de los encuestados los evaluó con la peor puntuación de la escala (que va de 1 a 5).

A pesar de este nivel de desconfianza, la población sí estaría dispuesta a denunciar ante las autoridades en caso de ser víctima de un delito (80.3%). Esta desconfianza en la principal institución encargada de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley evidencia una desconexión entre la disposición ciudadana a actuar y la credibilidad de las fuerzas policiales.

Por otro lado, la confianza que se tiene en los servicios de atención para mujeres víctimas de violencia es más elevada, ya que solo el 10.9% se ubicó en el nivel más bajo y un 23.4% tiene confianza plena. A su vez, la confianza sobre el desempeño de las instituciones y funcionarios públicos se ubicó en 15.4% de nivel más bajo, 47.3% en un valor intermedio (3) y solo 11.7% siente confianza a plenitud.

La falta de confianza ciudadana en la policía, en sus instituciones y funcionarios públicos representa un problema grave que afecta la cohesión social y la estabilidad política; generalmente, la falta de confianza está relacionada con la percepción de corrupción, abuso de poder y falta de transparencia, lo que afecta la cooperación entre la ciudadanía y las autoridades para soluciones conjuntas de problemas comunitarios, como lo son los delitos.

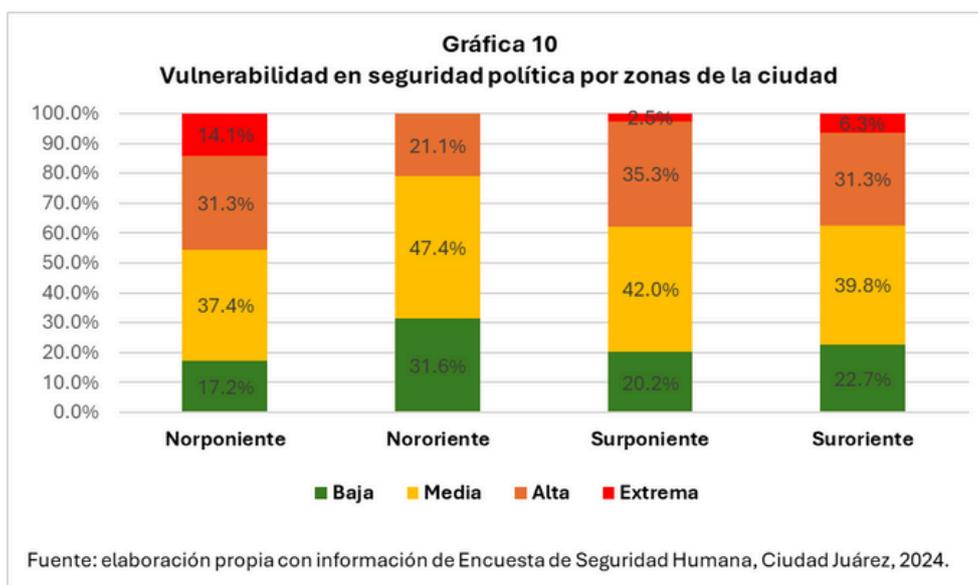
Libertad para ejercer el derecho a la participación

Un factor determinante de los altos niveles de vulnerabilidad en la dimensión política es la limitada capacidad de la población para ejercer plenamente sus derechos. El 72.9% de las personas encuestadas señalaron que, durante el último año, no han tenido la posibilidad de participar en asuntos públicos ni en decisiones que afectan su vida o su comunidad. Esta falta de participación genera una sensación de exclusión y desafección política que debilita la confianza en las instituciones y en la democracia misma. Cuando las personas perciben que no tienen voz ni influencia en su entorno, aumenta el riesgo de apatía, desencanto y desmovilización social. Frente a este escenario, es fundamental que las autoridades e instituciones promuevan una participación ciudadana significativa, mediante la creación de espacios accesibles, inclusivos y efectivos donde las personas puedan expresar sus opiniones, incidir en la toma de decisiones y ejercer sus derechos cívicos en condiciones de igualdad y dignidad.

¿Dónde están las personas más vulnerables?

El nivel de vulnerabilidad política varía significativamente entre las distintas zonas de Ciudad Juárez. El Norponiente de Juárez mostró el mayor porcentaje de vulnerabilidad extrema, alcanzando el 14.1%; en contraste, el Nororiente —zona caracterizada por mejores condiciones sociales y económicas, así como una menor proporción de población joven— no registró casos de vulnerabilidad extrema y tuvo el mayor porcentaje de población en baja vulnerabilidad política (31.6%). Asimismo, la vulnerabilidad política alta se hizo presente, mayormente, en la zona Surponiente con 35.3% seguido por la zona Norponiente y Suroriente con similares porcentajes (31.3%). Estos resultados evidencian una correlación entre las condiciones estructurales de cada zona y la capacidad de sus habitantes para ejercer sus derechos políticos con libertad y seguridad.

A continuación, se presentan resultados desagregados que explican diferencias en la vulnerabilidad política en cada una de las zonas. Los indicadores relacionados con factores de riesgo -que representan amenazas para la población según las zonas de la ciudad- mostraron diferentes porcentajes de gravedad. En el caso de agresiones o detenciones arbitrarias en el último año, la zona que mostró el mayor porcentaje fue el Suroriente con un 14.1%, mientras que el Nororiente tuvo el menor porcentaje con un 2.6% de personas que dijeron que en cierta ocasión fueron agredidas.



En cuanto a las posibilidades de expresar las opiniones libremente fue el Norponiente el espacio geográfico que peores condiciones mostró en este indicador alcanzando el 41.4% de personas mayores de 15 años que dijo no sentir esta libertad para expresarse sin temor a represalias. En contraste, y de nueva cuenta, los encuestados del Nororiente tuvieron el menor porcentaje (15.8%).

Ante la pregunta de si perciben riesgo al participar en elecciones, protestas u otras formas de expresión, el 41.4% de los encuestados en el Norponiente señaló que sí considera riesgoso este tipo de participación política; cabe señalar, también, que en el Suroriente el porcentaje resultó significativo con un 38.3%.

Los mecanismos de protección a los que la ciudadanía tienen acceso son determinantes para su presencia política en la comunidad ya que la seguridad condiciona el activismo y la participación. Una manera de identificar estos mecanismos protectores es a través de la confianza que la población tiene en sus autoridades e instituciones (como la policía). La confianza que la población tiene en la policía se midió con una escala de valores en un rango que va de 1 a 5 (a mayor valor, mayor confianza). En la zona Suroriente, la encuesta identificó menor capacidad de la policía para cumplir su función de manera eficaz, pues le otorgó una calificación promedio de 2.7; en el Norponiente el promedio se situó en 2.8 y el Surponiente relativamente evaluó mejor a esta corporación con un promedio de 3.

En lo concerniente a si la población denunciaría algún delito, en caso de sufrirlo, existe mayor probabilidad de denunciarlo en la zona Nororiente con un 94.7% y, en menor medida, en el Norponiente con el 69.1% de los encuestados que se inclinaron por esta opción.

Respecto a las valoraciones que la ciudadanía hizo sobre los servicios de atención para mujeres víctimas

no hubo diferencias en los promedios según las zonas. De hecho, el promedio de calificación subió alcanzando 3.3. Por último, en las calificaciones para las instituciones y funcionarios públicos la población del Norponiente los evaluó con el menor promedio (2.7) y, en contraste, los habitantes del Nororiente evaluaron con mayor promedio (3.2).

En materia de derecho a participar, en el último año, en asuntos públicos y en las decisiones que afectan la comunidad, se encontró que en el Norponiente el 80.8% considera que no ha tenido posibilidad, en el Surponiente el porcentaje fue de 77.3% y en el Suroriente alcanzó el 68%. Este indicador sugiere acciones inmediatas para fomentar mecanismos de mayor participación e involucramiento ciudadano en asuntos públicos.

Reflexiones sobre la seguridad política y recomendaciones

Los resultados en la dimensión de seguridad política evidenciaron ausencia de condiciones para que se fomenta la participación política de la población y pueda con ello incidir en la transformación de su comunidad. Algunos aspectos a considerar para mejorar esta dimensión son:

- Fortalecer la confianza en las instituciones y de los funcionarios públicos. Es imperativo que las autoridades y funcionarios públicos promuevan ejercicios de transparencia y rendición de cuentas en sus acciones y decisiones. Una posible ruta de trabajo inicial podría ser una mayor implementación de mecanismos de participación ciudadana y difusión de información pública de forma clara y accesible.

- Impulsar la participación ciudadana. Los tomadores de decisiones pueden involucrar a la ciudadanía en los momentos de implementación de programas y políticas públicas; esto pudiera llevarse a cabo con foros de discusión, encuestas y consultas ciudadanas, más eventos y proyectos de presupuestos participativos y programas de voluntariado y servicio comunitario.
- Mejorar los canales de comunicación entre autoridades y ciudadanía. Es necesario que se escuchen las voces ciudadanas donde se establezcan necesidades apremiantes; difusión en redes sociales, plataformas digitales, reuniones o audiencias públicas, entre otras.
- Mayor capacitación a los servidores públicos y a autoridades encargadas de la seguridad pública. Algunos temas importantes en este tipo de capacitaciones deberán considerar al menos: participación ciudadana y gobernanza, transparencia y rendición de cuentas, comunicación efectiva con los ciudadanos y garantía de derechos humanos.
- Evaluación periódica de las políticas públicas. Es recomendable mejorar los procesos de evaluación y ajuste de políticas públicas con base en evidencia para que estas respondan a las necesidades de los ciudadanos y a las especificidades de cada zona; se requiere evaluación de impactos que tengan en cuenta las experiencias de los y las habitantes de diferentes zonas.





4.6 Seguridad Comunitaria

Seguridad Comunitaria

¿Qué medimos en esta dimensión?

En esta dimensión se evaluó el nivel de vulnerabilidad de las personas frente a factores y situaciones que amenazan el tejido social comunitario: es decir, los vínculos de apoyo, identidad, confianza y organización, así como la capacidad de las comunidades para gestionar sus diferencias y conflictos por medios pacíficos. La inseguridad comunitaria se expresa en el miedo entre vecinos, la desconfianza, la exclusión y la ausencia de espacios seguros para la participación, el diálogo y la construcción de acuerdos.

¿Cómo medimos la Seguridad Comunitaria?

Para medir la seguridad comunitaria se tuvo en cuenta si las personas cuentan con su comunidad para enfrentar dificultades, resolver tensiones o vivir con tranquilidad. Observamos cómo se relacionaron con sus vecinas y vecinos, si existen lazos de confianza y respeto, si perciben la comunidad como un entorno de apoyo mutuo, y si existen formas colectivas de organización para enfrentar problemáticas comunes o mejorar la convivencia.

También se consideraron elementos que fortalecen o debilitan la cohesión comunitaria, como la presencia de violencia vecinal, la existencia de redes de protección ciudadana, la participación en organizaciones o iniciativas locales, y la posibilidad de contar con

recursos de construcción de paz como mediadores o centros de conciliación para abordar disputas entre vecinos. Estos aspectos permiten identificar si las comunidades funcionan como espacios seguros, solidarios y de contención, o si por el contrario, están fragmentadas, marcadas por la desconfianza y el conflicto mal gestionado.

Los indicadores se agruparon en tres categorías:

- Exposición a factores que amenazan la convivencia y debilitan el tejido social comunitario como la violencia vecinal, la desconfianza entre habitantes y la percepción de deterioro en las normas de respeto y ayuda mutua.
- Capacidad organizativa y acceso a mecanismos de resolución de conflictos que incluye existencia de formas organizadas de protección comunitaria, redes de cuidado, mediadores o centros de conciliación.
- Existencia de entornos de confianza y disfrute de la comunidad. Estos indicadores permiten evaluar si las personas perciben su entorno como un lugar seguro, confiable y propicio para la convivencia, a partir de sus relaciones con vecinas y vecinos.

Clústeres de indicadores vinculados a la seguridad comunitaria



Exposición a amenazas

- Exposición a violencia física y/o psicológica en el entorno comunitario.
- Exposición a factores que debilitan el tejido social.



Acceso a protección

- Capacidad comunitaria para resolver de conflictos
- Capacidad de organizacion comunitaria



Libertad para ejercer derechos

- Libertad para vivir en una comunidad que funciona como sistema de apoyo

¿Qué tan vulnerables fueron las personas frente a factores que afectan la convivencia comunitaria y el tejido social?

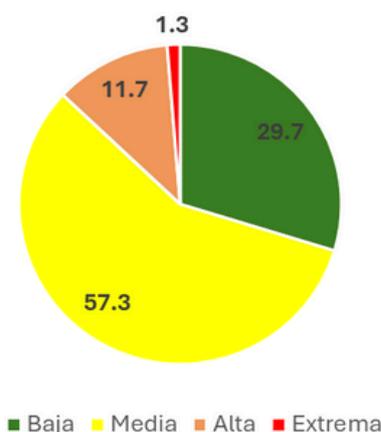
La seguridad comunitaria es una dimensión clave para comprender el estado del tejido social, es decir, los vínculos de confianza, las capacidades colectivas de una comunidad para enfrentar conflictos y construir acuerdos, los mecanismos para cuidar de sus integrantes y generar entornos donde las personas puedan generar un sentido de pertenencia.

Esta dimensión evalúa hasta qué punto las personas pueden contar con su comunidad para resolver diferencias, apoyarse en momentos difíciles o simplemente vivir con tranquilidad. Incluye, por tanto, tanto las percepciones de apoyo mutuo como la

existencia de estructuras organizadas que favorecen la convivencia.

Los resultados del Índice muestran que el 70% de la población experimenta distintos grados de vulnerabilidad n sus entornos comunitarios. Más de la mitad de la población (57.3%) se encuentra en un nivel de vulnerabilidad media, lo cual indica que, si bien las personas mantienen ciertos lazos de apoyo y espacios de interacción, estos son inestables, parciales o intermitentes, lo que reduce su capacidad para enfrentar amenazas colectivas, gestionar conflictos o participar en procesos comunitarios significativos.

Gráfica 11
Seguridad Comunitaria: Nivel de vulnerabilidad de la población



Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta de Seguridad Humana, Ciudad Juárez, 2024.

Además, un 11.7% de las personas están en un nivel de vulnerabilidad alta, lo que implica que se enfrentan a desconfianza, exclusión y falta de espacios seguros, con muy poco acceso a mecanismos organizativos o comunitarios que les permitan proteger sus derechos. Aunque es una proporción menor, un 1.3% presenta vulnerabilidad extrema, lo que evidencia condiciones severas de aislamiento social o ruptura del tejido comunitario, sin medios efectivos para enfrentar conflictos o amenazas locales.

Por otro lado, solo el 29.7% de la población muestra vulnerabilidad baja, es decir, cuenta con entornos comunitarios seguros, participativos y cohesionados. Este grupo representa una minoría, lo cual subraya que la mayoría de la ciudad vive con riesgos considerables en sus relaciones sociales de proximidad, fundamentales para la resiliencia colectiva y la construcción de paz.

Al desagregar los resultados por grupo poblacional, se observa que todos los sectores muestran niveles bajos de vulnerabilidad en cuanto a exposición a amenazas y libertad para ejercer sus derechos. Sin embargo, la gran mayoría presenta vulnerabilidad alta en el acceso a mecanismos de protección, lo que sugiere una preocupante ausencia de infraestructura comunitaria para el cuidado colectivo.

Los adultos mayores son el grupo más vulnerable en esta dimensión. Aunque reportan un nivel bajo de vulnerabilidad frente a amenazas y en el ejercicio de derechos, su nivel de acceso a mecanismos de protección es muy bajo en esta dimensión. Este patrón se repite entre los adolescentes, quienes además enfrentan una mayor incidencia de conflictos directos con vecinos y una percepción más débil de confianza y respeto mutuo. Las mujeres, por su parte, también tuvieron muchas limitaciones para acceder a mecanismos de protección comunitaria y reportaron menor confianza en su entorno vecinal y menor participación en organizaciones comunitarias.

Amenazas a la seguridad comunitaria y riesgos que debilitan el tejido social

Si bien los datos muestran que la violencia directa entre vecinos no es un fenómeno generalizado, existen signos preocupantes en ciertos grupos y territorios. El 91.53% de la población reporta no haber tenido problemas con vecinos que terminaran en amenazas o agresiones físicas en el último año. Sin embargo, el 6.08% afirma experimentarlos “rara vez” y el 2.38% “a menudo”, lo que representa cerca de una de cada diez personas con experiencias de conflicto vecinal con algún grado de violencia³.

En este sentido, los adolescentes aparecen como el grupo más expuesto: el 18.36% reporta haber tenido este tipo de experiencias, y un alarmante 10.2% lo vivió de forma frecuente. Entre adolescentes mujeres, la cifra se

incrementa al 21.74%, lo que sugiere una especial exposición a entornos comunitarios conflictivos. En contraste, el 95.65% de adultos mayores no reportó haber tenido este tipo de conflictos.

En cuanto a la confianza entre vecinos, aunque el 86.42% de la población dice confiar en algún grado, esta confianza es frágil, ya que más de la mitad (55.87%) confía sólo “en algunos pocos”, mientras que el 13.58% no confía en nadie. Este patrón refleja una convivencia selectiva y un concepto frágil o desterritorializado de comunidad. El suroriente, por ejemplo, concentra los niveles más altos de desconfianza (18.75% no confía en nadie), y entre los adolescentes, el 18.37% tampoco confía en ninguna persona de su entorno cercano. Por género, las mujeres reportan mayores niveles de desconfianza (16.04%, frente al 10.82% de los hombres). Si bien los adultos mayores son quienes más dicen “confiar mucho” (42.55%), esto podría relacionarse con redes más tradicionales, de mayor duración y de una identidad más compartida.

Respecto al respeto, la solidaridad y ayuda mutua, el panorama es diverso. Aunque el 85.38% de las personas da una respuesta favorable, de estas, sólo el 46.74% considera que la gente se respalda “mucho” mientras el 38.64% lo percibe “solo en ciertas ocasiones”, sugiriendo que la solidaridad vecinal sea selectiva o contextual.

En conjunto, los datos permiten identificar un tejido comunitario marcada por relaciones funcionales, pero no necesariamente solidarias, con presencia de conflictos que, si bien no siempre escalan a violencia, generan tensión, desconfianza y malestar. Las diferencias por edad, género y territorio indican que el debilitamiento del tejido social no es uniforme: afecta con mayor intensidad a los adolescentes, adultos mayores, a las zonas 1 y 4, y a las mujeres, quienes reportan mayores niveles de desconfianza y menor percepción de respeto mutuo.

Capacidad organizativa y mecanismos de solución de conflictos

Otro pilar fundamental de la seguridad comunitaria es la existencia de estructuras colectivas y recursos compartidos que permitan prevenir, gestionar o transformar los conflictos comunitarios y favorezcan el buen convivir. En esta dimensión, los resultados muestran un panorama preocupante: el 65.97% de las personas encuestadas aseguró que no existen redes de seguridad comunitaria en su colonia, y un 17.54% adicional señaló que las desconoce. Es decir, más del 83% de la población no cuenta con mecanismos vecinales de protección, organización o vigilancia. Incluso entre el pequeño porcentaje que identificó su existencia (16.5%), casi una tercera parte considera que no funcionan adecuadamente. Esto refleja una ausencia generalizada de infraestructura comunitaria

³ Estos datos contrastan con la ENSU (4º Trimestre 2024), donde el 77.2% reportó al menos un conflicto con vecinos y el 25.1% sufrió gritos o insultos. La diferencia se debe a que la ENSU incluye todo tipo de enfrentamientos, mientras que el Índice Glocal solo considera aquellos que escalaron a amenazas o violencia física.

para la contención del riesgo y la prevención social de la violencia.

En cuanto a mecanismos institucionales para la resolución pacífica de conflictos, como mediadores comunitarios o centros de conciliación, el panorama es aún más limitado. El 85.08% de las personas consultadas indicó que no existen o no sabe si hay espacios de este tipo en su colonia, y apenas el 9.42% afirmó conocerlos y valorarlos positivamente. La falta de visibilidad o existencia de estos mecanismos debilita las posibilidades de transformar los conflictos cotidianos sin escalar a la violencia y reduce las capacidades locales para sostener la convivencia en contextos de tensión.

La organización comunitaria también es escasa. Un 81.77% de la población afirma no conocer o no contar con grupos comunitarios, colectivos ciudadanos o grupos juveniles en su entorno, y solo un 3.65% participa activamente en alguno de ellos. La baja participación ciudadana indica una debilidad en los canales para la acción colectiva, lo que reduce el potencial de respuesta organizada frente a problemáticas comunes o situaciones de emergencia. Aunque hay conocimiento sobre la existencia de algunas iniciativas (14.58%), la falta de involucramiento directo también evidencia barreras como desconfianza, falta de tiempo, escasez de liderazgos comunitarios o ausencia de convocatorias inclusivas.

En conjunto, el Índice muestra que la capacidad de gestión colectiva de conflictos en Ciudad Juárez es limitada y está distribuida de manera desigual. Las redes de cuidado, las instancias de mediación y los espacios de participación no solo son poco frecuentes, sino que además no son percibidos como efectivos por la mayoría de la población. Este vacío organizativo representa una oportunidad crítica para impulsar políticas de fortalecimiento del tejido comunitario a partir de mecanismos locales de prevención, mediación y acción colectiva que respondan a las necesidades específicas de cada territorio.

Entornos de confianza y disfrute de la comunidad

El índice revela que una amplia mayoría de las personas en Ciudad Juárez percibe su comunidad como un espacio relativamente favorable para la convivencia cotidiana. El 72.66% de las personas encuestadas considera que su colonia es un buen lugar para vivir, mientras que un 19.79% cree que lo es la mayor parte del tiempo. Solo un 2.08% expresó una opinión abiertamente negativa, señalando que es un mal lugar para vivir, y un 5.47% lo calificó como regular.

Es de destacarse que este balance general positivo se produce a pesar de los indicadores previos de baja organización comunitaria, limitada participación, incluso con condiciones objetivamente precarias, sin embargo, la fuerte identidad y los altos niveles de arraigo a la ciudad, posiblemente son expresiones de la resiliencia de las y

los juarenses, así como su fuerte sentido de pertenencia al territorio.

¿Dónde se encuentran las personas más vulnerables a factores que amenazan su seguridad económica?

El análisis territorial de la seguridad comunitaria permite identificar diferencias importantes entre zonas en cuanto a cohesión social, capacidad de organización y percepción del entorno como un espacio seguro y de apoyo mutuo. Si bien todas las zonas muestran alguna expresión de fragmentación comunitaria, las zonas norponiente y suroriente presentan mayores signos de vulnerabilidad acumulada.

Zona Norponiente presenta los niveles más altos de vulnerabilidad alta (20.2%) y extrema (3.0%) de toda la ciudad, lo que la convierte en la zona más preocupante en esta dimensión. A esto se suma que más de la mitad de la población (53.5%) está también en vulnerabilidad media. Es una señal clara de ruptura del tejido social y desprotección comunitaria.

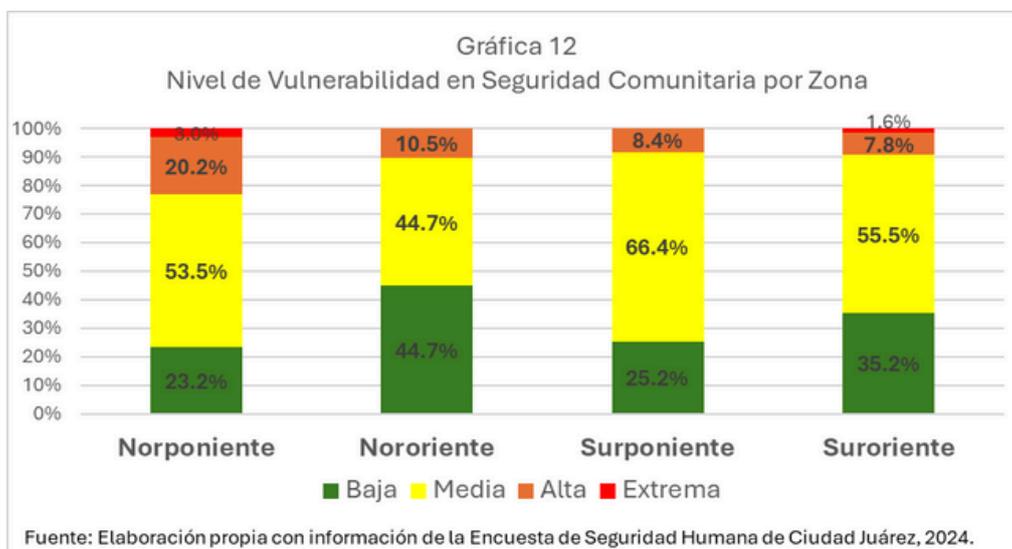
Zona Suroriente también muestra niveles elevados: 7.8% en vulnerabilidad alta y 1.6% en extrema, con un 55.5% adicional en nivel medio. Esto indica una precariedad comunitaria considerable, aunque ligeramente menor que en Norponiente.

Zona Surponiente, si bien no registra vulnerabilidad extrema, tiene un 66.4% en vulnerabilidad media y un 8.4% en alta, lo que apunta a un tejido social debilitado, pero menos extremo.

Zona Nororiente es la que presenta mejores condiciones relativas: solo 10.5% en vulnerabilidad alta y 0% en extrema, además de tener el mayor porcentaje en vulnerabilidad baja (44.7%).

Los resultados de indicadores específicos ilustran las diferencias en los niveles de vulnerabilidad por zonas. Por ejemplo, el norponiente es el territorio que mayor deterioro del tejido comunitario presenta. Esta zona integra los niveles más altos de conflictividad vecinal: el 13.69% de las personas ha tenido problemas con vecinos que derivaron en amenazas o agresiones, muy por encima del promedio general. Además, el 15.31% declaró no confiar en ninguno de sus vecinos, y un 23.47% percibe que en su colonia no hay respeto ni apoyo mutuo.

A nivel organizativo, el norponiente también es la más débil: el 88.78% afirma que no existen redes comunitarias de seguridad o que las desconoce, y el 92.78% asegura que no existen ni identifica mediadores o centros de conciliación comunitaria. Solo el 6.19% considera que los mediadores ayudan



evidenciando el vacío de capital social e infraestructura institucional para la gestión pacífica de los conflictos.

Respecto a la percepción del entorno, aunque el 88.89% considera su comunidad un buen lugar para vivir, es la zona con el mayor porcentaje que la percibe como un mal lugar para vivir (5.05%), además del 6.06% que lo califica como “regular”.

El nororiente es la zona que muestra los indicadores más positivos en todas las categorías. En términos de convivencia, solo el 7.89% considera que en su colonia no hay respeto ni ayuda mutua, y el 36.84% afirma confiar mucho en sus vecinos. También es la zona donde el 65.79% considera que su colonia es un buen lugar para vivir, y solo un 2.63% expresa alguna duda o crítica. En cuanto a organización, el 21.05% reconoce la existencia de redes comunitarias de protección, y es la única zona donde más del 15% reconoce centros de conciliación vecinal que funcionan adecuadamente. Además, el 7.89% participa en alguna organización comunitaria, lo que la convierte en la zona con mayor grado de involucramiento ciudadano.

El Surponiente – Presenta un nivel bajo de conflictos vecinales (solo el 5.88% ha tenido problemas graves) y una visión positiva del respeto mutuo (más del 90% considera que sí hay ayuda y respeto en su colonia). También el 94.12% afirma no haber tenido problemas con vecinos, lo que la sitúa como la zona con menor conflictividad. Sin embargo, a nivel organizativo, muestra una marcada debilidad: el 84.87% no identifica grupos comunitarios, y aunque un 15.13% los ubica, solo el 1.68% participa activamente. También es baja la identificación de recursos para la gestión positiva de conflictos, con apenas un 5.88% que valora positivamente los centros de conciliación.

Zona suroriente –presenta niveles preocupantes de desconfianza: el 18.75% de sus habitantes afirma no confiar en nadie en su comunidad, y el 17.19% reconoce

la existencia de organizaciones, pero no participa en ninguna. Si bien el 75.78% dice contar con redes de apoyo, es la cifra más baja entre las zonas. En lo organizativo, el 85.04% no identifica redes comunitarias de protección, y el 43.75% afirma no tener acceso a préstamos (en la dimensión económica), lo cual se cruza con un bajo capital comunitario. En cuanto a percepción, la mayoría considera que vive en un buen lugar (94.53%), pero con un mayor número de personas que lo matizan como “regular” (4.69%) o dudoso.

¿Qué sectores de la población experimentan más inseguridad comunitaria?

Los resultados del Índice permiten identificar patrones diferenciados de vulnerabilidad comunitaria según el grupo poblacional. Mientras algunos sectores presentan mayor fortaleza en sus vínculos comunitarios y acceso a mecanismos de apoyo, otros se enfrentan a entornos más hostiles, fragmentados o carentes de protección comunitaria efectiva.

·Adolescentes: Los adolescentes se posicionan como el grupo con mayor nivel de exposición a conflictos vecinales y menor acceso a recursos de apoyo comunitario. El 18.36% reportó haber tenido conflictos con vecinas y vecinos, el doble del promedio general, y un 10.20% declaró que estas situaciones ocurrieron frecuentemente. Además, el 18.37% no confía en nadie de su comunidad y solo un 8.16% reconoce la existencia de organizaciones comunitarias (aunque ninguno participa en ellas). También tienen bajo reconocimiento de redes de seguridad (apenas 8.16%) y mediadores o centros de conciliación (2.04%), lo que muestra un entorno empobrecido en términos de convivencia, diálogo y cuidado mutuo. A pesar de estas condiciones, el 89.80% considera que vive en una “buena” comunidad, aunque el 24.49% señala que no todo el tiempo.

- **Jóvenes:** Las personas jóvenes presentan una paradoja: alta confianza interpersonal, pero bajo acceso a medios organizados de respaldo. El 87.8% confía en algún grado en sus vecinos y el 92.77% considera que su comunidad es un buen lugar para vivir. Sin embargo, el 87.95% desconoce o niega la existencia de redes comunitarias; solo el 8.43% valora positivamente los centros de mediación, y la participación en grupos organizados es baja (3.61%).
- **Adultos:** Los adultos son quienes más identifican organizaciones comunitarias (20.98%) y más participan activamente en ellas (5.85%), especialmente los hombres adultos (8.82%). Aunque el 84.67% no reconoce redes comunitarias y la mayoría también desconoce mediadores, este grupo muestra mayor capacidad para vincularse, articularse y generar soluciones colectivas. También mantienen una valoración positiva del entorno (más del 90% lo considera un buen lugar para vivir), lo que refleja fortalezas comunitarias que podrían aprovecharse en procesos de fortalecimiento del tejido social.
- **Adultos mayores:** Los adultos mayores enfrentan una forma distinta de vulnerabilidad. Aunque presentan mayores niveles de confianza y valoración del entorno (el 93.62% considera su colonia un buen lugar para vivir, y el 42.55% confía mucho en sus vecinos), también muestran pocos mecanismos de protección. Un 93.62% desconoce o niega la existencia de centros de mediación y solo el 4.26% los valora positivamente. En cuanto a redes comunitarias, el 89.13% declara no tenerlas o no saber si existen. A pesar de que el 19.15% identifica organizaciones locales, ninguno reporta participar activamente.

Reflexiones sobre el estado de la seguridad comunitaria

Aunque en Ciudad Juárez existe una percepción ampliamente positiva sobre los entornos comunitarios —basada en la confianza entre vecinos y la valoración del espacio como habitable—, la capacidad colectiva y organizada para enfrentar desafíos cotidianos es limitada o prácticamente inexistente en muchas colonias. Esta brecha evidencia que el capital social relacional no se traduce necesariamente en estructuras efectivas de acción comunitaria para resolver conflictos, contener la violencia vecinal o construir acuerdos duraderos.

El análisis confirma una disociación preocupante: las comunidades en Ciudad Juárez tienen un fuerte sentido de pertenencia e identidad, pero carecen de capacidad real de acción colectiva. Mientras las personas valoran la idea de comunidad y reportan sentimientos de pertenencia, no existen redes sólidas, organizaciones vecinales ni espacios sostenidos de participación que les permitan actuar colectivamente frente a conflictos, violencias o necesidades comunes. Esta vulnerabilidad comunitaria —menos visible pero igualmente urgente—

debe ser abordada con estrategias que fortalezcan tanto la cohesión social como las capacidades organizativas locales. En este sentido, la recuperación de espacios de convivencia, la formación de liderazgos comunitarios y la promoción de prácticas de resolución pacífica de tensiones son acciones clave para reconstruir el tejido social y la paz cotidiana.

Estos hallazgos deben interpretarse también en función de las condiciones estructurales que moldean la vida comunitaria en Juárez: una ciudad fronteriza atravesada por la lógica del trabajo en la maquila, con jornadas extendidas y tiempos sociales reducidos, lo que limita el involucramiento ciudadano en iniciativas colectivas. A esto se suman las condiciones climáticas extremas, que restringen el uso de espacios públicos y desplazan la interacción vecinal a entornos privados o comerciales, muchas veces inaccesibles para sectores vulnerables. Fortalecer la seguridad comunitaria implica, por tanto, diseñar políticas públicas que reconozcan estas barreras estructurales y promuevan una vida comunitaria más activa, equitativa y resiliente.

Es indispensable que el Estado y otros actores sociales prioricen activamente el fortalecimiento comunitario. Esto implica generar políticas y programas que provoquen encuentros, fomenten la interacción social saludable (más allá de espacios centrados en el consumo) y reconozcan la diversidad de formas en las que se puede habitar lo común: celebraciones barriales, procesos artísticos, cuidados colectivos, huertos comunitarios, entre otros.

- Promover programas de fortalecimiento comunitario con enfoque territorial y cultural, que activen la vida vecinal, reactiven espacios públicos y generen oportunidades de encuentro cotidiano. Estas iniciativas deben partir del reconocimiento de los vínculos existentes, por débiles que sean, y del alto capital simbólico y cultural de Juárez.
- Fomentar procesos intergeneracionales que reparen el tejido social, creando espacios de diálogo y colaboración entre juventudes, personas adultas y personas mayores. Actividades comunitarias compartidas —como celebraciones, murales colectivos, caminatas, círculos de palabra o proyectos de memoria histórica— pueden reconstituir el sentido de pertenencia común.
- Impulsar el arte y la cultura como herramientas comunitarias de transformación, especialmente aquellas expresiones urbanas, juveniles y periféricas que tienen raíces profundas en la historia reciente de la ciudad. Estas prácticas deben apoyarse como estrategias de prevención, reconstrucción de identidad y promoción de seguridad desde lo simbólico.
- Desarrollar e institucionalizar mecanismos comunitarios de resolución de conflictos, como

centros de mediación barrial, promotores comunitarios o círculos restaurativos, que sean accesibles, culturalmente pertinentes y sostenibles. Estos mecanismos deben fortalecerse con formación y recursos desde el gobierno local y las organizaciones comunitarias.

- Generar espacios de interacción social saludable, promoviendo actividades comunitarias recreativas, culturales o educativas que no giren exclusivamente en torno al consumo (por ejemplo, ferias comunitarias, noches de cine, convivencias familiares, actividades deportivas o de cuidado colectivo), con prioridad en zonas de alta fragmentación social.
- Incentivar la participación ciudadana con enfoque de inclusión y reconocimiento mutuo, fortaleciendo la

capacidad de los actores comunitarios para incidir en decisiones locales, acceder a recursos y sostener proyectos comunitarios a largo plazo. Esto implica mecanismos accesibles, acompañamiento institucional y presupuestos participativos.

- Reconocer, articular y apoyar a las organizaciones de base y redes informales, que ya desempeñan un papel clave en el sostenimiento cotidiano de las comunidades. Estas organizaciones son aliadas estratégicas para la construcción de seguridad humana, la reconstrucción del tejido social y la protección de derechos.





Foto: Pavel Vallejo / Ciudad Juárez

4.7 Seguridad Ambiental

Seguridad Ambiental

¿Qué medimos en esta dimensión?

En esta dimensión se midió qué tan vulnerables son las personas frente a desastres, amenazas ambientales y condiciones peligrosas en el entorno construido, como infraestructura precaria y fallas en provisión de servicios esenciales de agua, alcantarillado, electricidad, y recolección de basura y residuos. Para ello, se evaluaron los resultados que arrojaron indicadores en tres categorías: 1) Indicadores para medir la exposición a amenazas ambientales concretas que privan a las personas de habitar entornos seguros y saludables, 2) indicadores que miden la protección ante amenazas ambientales que ponen a prueba la calidad de la infraestructura comunitaria y las condiciones estructurales de las viviendas, y 3) los indicadores que miden el acceso al derecho que tienen las personas a vivir en entornos seguros y sostenibles.

¿Cómo medimos la Seguridad Ambiental?

Para medir la seguridad ambiental se consideró la exposición en el último año a situaciones que comprometen el acceso a un entorno seguro y saludable, como la deficiente recolección de basura en la colonia, la percepción de un ambiente inseguro, insalubre o sucio, la presencia de riesgos o peligros asociados a desastres naturales como inundaciones o deslaves, y las malas condiciones físicas de la vivienda, incluyendo techos, paredes y pisos en mal estado. También se evaluó la percepción del entorno inmediato en términos de limpieza y seguridad como reflejo del deterioro ambiental.

En cuanto a mecanismos de protección, se examinó la calidad de la infraestructura urbana durante el último año, considerando aspectos como el estado de las calles, la iluminación y los andenes, así como la existencia de espacios públicos adecuados para el deporte y la recreación, los cuales actúan como barreras protectoras ante riesgos ambientales. Finalmente, se analizó el ejercicio del derecho a vivir en un ambiente sano mediante la posibilidad real de habitar un entorno limpio, seguro y digno, así como la disponibilidad de espacio suficiente en la vivienda para una convivencia adecuada entre sus habitantes, lo que refleja las condiciones estructurales mínimas para garantizar bienestar ambiental. Esta aproximación permite una lectura integral de las condiciones ambientales que afectan la calidad de vida en contextos urbanos

¿Qué tan vulnerables son las personas en esta dimensión y por qué?

El índice revela que 8 de cada 10 personas enfrentaron vulnerabilidad ambiental con distintos grados de afectación y solo el 19.3% de las personas se encuentra en un nivel de baja vulnerabilidad, es decir, que vive en entornos relativamente seguros y cuenta con servicios e infraestructura adecuados (ver gráfica 13).

El 56% de la población se ubica en vulnerabilidad media, lo que indica que, aunque cuentan con algunos servicios básicos, estos son parciales, inestables o intermitentes, y que enfrentan amenazas ambientales que podrían agravarse. Un 24.2% está en un nivel de vulnerabilidad alta, es decir, viven en entornos peligrosos —por ejemplo, con deficiencias en infraestructura, recolección de basura o acceso a agua potable— y solo tienen mecanismos limitados para protegerse. Esta situación evidencia un déficit estructural en la garantía del derecho a un ambiente seguro, donde factores como la marginación territorial, la precariedad urbana y la falta de políticas públicas efectivas convergen para perpetuar riesgos evitables.

Los indicadores sobre exposición a amenazas relacionadas con el ambiente y el entorno construido evidencian una marcada polarización en las condiciones ambientales de Ciudad Juárez. Mientras un 70% de la población reporta contar con un servicio eficiente de recolección de basura y el 52.6% percibe su entorno como seguro, saludable y limpio, subsisten vulnerabilidades significativas que afectan a amplios sectores de la ciudad.

Cerca del 30% enfrenta deficiencias en la gestión de residuos, el 47.4% habita en entornos percibidos como inseguros o insalubres y, el 23% reside en zonas expuestas a riesgos de desastres naturales o en viviendas con condiciones físicas regulares. Estas cifras reflejan una profunda desigualdad territorial, donde conviven áreas con servicios ambientales adecuados junto a sectores marginados que concentran múltiples carencias —desde infraestructura urbana deficiente hasta una alta exposición a amenazas ambientales—, lo que subraya la urgencia de implementar intervenciones focalizadas en los polígonos de mayor vulnerabilidad para cerrar las brechas ambientales en la ciudad.

Clústeres de Indicadores de Seguridad Ambiental



Exposición a amenazas

- Riesgo de ser damnificado a consecuencia de una emergencia o desastre natural
- Exposición a ambientes adversos para la salud y la vida digna



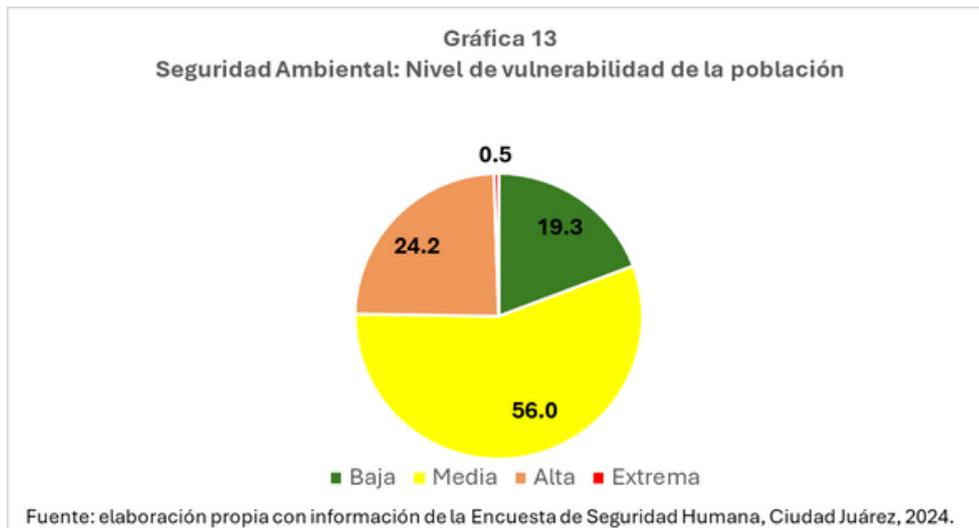
Acceso a protección

- Acceso a espacios urbanos que permitan tener una vida sana



Libertad para ejercer derechos

- Libertad para disfrutar de un ambiente limpio, saludable y sostenible



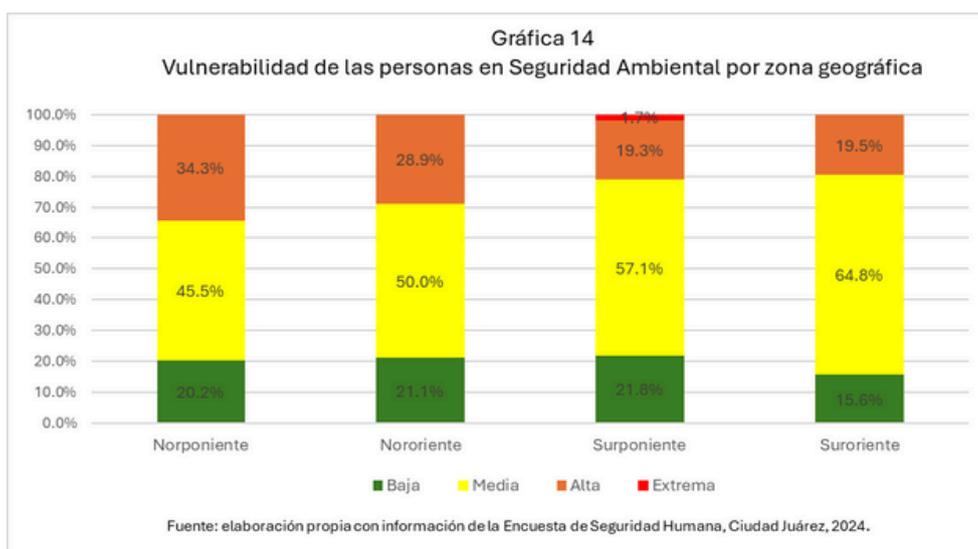
Por otra parte, los datos revelan deficiencias críticas en los mecanismos de protección ante amenazas, donde el 70.6% de la población enfrenta condiciones de infraestructura deficientes (27.6% las califica como "muy malas" y 43% como "regulares"), limitando su capacidad para prevenir o responder a emergencias. Además, más de la mitad de los habitantes encuestados (52.6%) manifestó que carece de espacios públicos adecuados para recreación y deporte (32.6% sin acceso y 20% con infraestructura en mal estado), lo que no solo afecta la calidad de vida, sino que también reduce las opciones de refugio y resiliencia comunitaria ante crisis. Estas carencias combinadas —infraestructura urbana precaria y falta de espacios públicos funcionales— configuran un escenario de vulnerabilidad sistémica, donde las capacidades de protección y adaptación ante amenazas ambientales o sociales se ven severamente comprometidas, exigiendo intervenciones urgentes que prioricen la mejora de la infraestructura básica y la creación de áreas comunes seguras y accesibles.

Con respecto al derecho a un ambiente seguro y saludable, las cifras reflejan una percepción dividida sobre las condiciones ambientales y habitacionales; así, el 52.6% de la población considera que su entorno es seguro, saludable y limpio, mientras que un 47.4% (sumando las respuestas "no" y "más o menos") identifica deficiencias en al menos uno de estos aspectos. En otro indicador, una amplia mayoría (91.6%) señala que su vivienda cuenta con espacio suficiente para una convivencia digna y el 8.4% restante vive en condiciones de hacinamiento, representando un riesgo adicional para la salud física y mental, particularmente en contextos de crisis prolongadas o exposición a amenazas ambientales o de salud (como la pandemia). Estos resultados sugieren que, en el corto y mediano plazo, se lleven a cabo acciones o políticas públicas que permitan mejorar objetivamente las condiciones ambientales para que las percepciones de los habitantes también lo hagan.

¿Dónde están las personas más vulnerables?

En el presente apartado se revisa la vulnerabilidad ambiental por zonas geográficas. Los niveles de vulnerabilidad en esta dimensión revelan diferencias importantes entre las zonas de la ciudad. La zona Surponiente presenta la situación más crítica, con un 1.7% de su población en vulnerabilidad extrema —la única con este nivel— y un 19.3% en vulnerabilidad ambiental alta, indicando problemas ambientales agudos como posible exposición a riesgos de desastres naturales o contaminación. Le sigue el Norponiente, donde el 34.3% de los encuestados enfrenta vulnerabilidad alta, siendo la proporción más elevada en esta categoría entre todas las zonas.

En contraste, el Suroriente y Nororiente muestran patrones más equilibrados, aunque complejos, por ejemplo, el primero presenta la mayor concentración de población en situación de vulnerabilidad media con un 64.8%, lo que indica una exposición generalizada a condiciones ambientales precarias, aunque sin llegar a niveles críticos; a su vez el Nororiente combina un 50% en vulnerabilidad media con un 28.9% en alta. Estos resultados sugieren que, aunque estas zonas no alcanzan niveles extremos, más de la mitad de sus residentes enfrentan desafíos ambientales moderados, como infraestructura deficiente o falta de espacios verdes. En este sentido, el abordaje de la problemática ambiental debe ser integral según las zonas y los tipos de afectaciones, de manera que se involucre a la comunidad, a las autoridades y a otros actores relevantes como las Organizaciones de la Sociedad Civil. De esta forma se puede lograr reducir la vulnerabilidad ambiental y promover un futuro más sostenible para las diferentes zonas de Juárez y sus habitantes.



En una mirada más específica de los indicadores, la encuesta arrojó que el Norponiente de Ciudad Juárez vive una dualidad ambiental preocupante: aunque la mayoría de los residentes cuenta con servicios básicos aceptables, existen focos críticos de vulnerabilidad que demandan atención urgente. Cerca del 40% de la población percibe su entorno como inseguro o insalubre, mientras que uno de cada cuatro habitantes (25.5%) vive en zonas con riesgo de desastres naturales, situación que se agrava por la precaria infraestructura urbana -el 77.8% de las personas considera que su colonia presenta condiciones regulares o deficientes-, y la falta de espacios recreativos públicos adecuados, que afecta a más de la mitad de los residentes (52.1%).

A esto se suma que el 10.1% enfrenta hacinamiento en sus viviendas, magnificando su exposición a riesgos. Estos hallazgos sugieren intervenciones gubernamentales para la mejora de infraestructura urbana, la mitigación de riesgos y el acceso equitativo a entornos saludables y seguros.

En el Surponiente de Ciudad Juárez el 47% de los habitantes reporta condiciones ambientales deficientes o apenas aceptables; la exposición a riesgos naturales es preocupante, el 24.4% reside en zonas susceptibles a desastres como inundaciones o deslaves, y el 26% habita en viviendas con condiciones estructurales "regulares", lo que reduce su capacidad de respuesta ante emergencias. Así mismo, las debilidades en los mecanismos de protección son notorias, el 62.3% de los residentes reporta infraestructura urbana deficiente en calles, iluminación o andenes, y el 56.6% carece de espacios públicos adecuados para la recreación, ya sea por su inexistencia o por el mal estado en que se encuentran.

En el Suroriente, aunque el 77.3% reporta buen servicio de recolección de basura, más de la mitad de los habitantes (55.5%) percibe su entorno como inseguro o

insalubre, y el 18.9% enfrenta riesgos de desastres naturales, situación agravada por la precaria infraestructura (71.9% con condiciones regulares o malas) y la falta de espacios públicos adecuados (50.8% entre ausentes o insuficientes).

En contraste, el Nororiente muestra mejores condiciones generales, el 92.1% considera sus viviendas en muy buen estado y solo el 10.5% reporta problemas con la recolección de basura; sin embargo, persisten desafíos significativos como el 47.3% que percibe ambientes poco saludables, el 31.6% en zonas de riesgo y el 84.2% con infraestructura regular o mala, además de una alarmante carencia de espacios recreativos (44.7% sin acceso). Estas disparidades evidencian que mientras el Suroriente concentra vulnerabilidades agudas en salubridad y protección civil, el Nororiente, pese a su mejor situación habitacional, arrastra deficiencias críticas en infraestructura básica y equipamiento urbano, requiriendo ambos territorios intervenciones específicas que atiendan sus problemáticas particulares para garantizar entornos seguros y dignos.

Reflexiones sobre el estado de la seguridad ambiental

Los resultados del Índice muestran que 8 de cada 10 personas en Ciudad Juárez no cuentan con condiciones adecuadas para ejercer su derecho a la seguridad ambiental, lo que constituye un desafío estructural urgente.

Este tipo de seguridad va más allá de la infraestructura física: se relaciona con la justicia social, la equidad territorial y la garantía de un hábitat seguro y saludable. La exposición a riesgos ambientales impacta de manera desproporcionada a los sectores más pobres y vulnerables, profundizando las desigualdades existentes.

Para revertir esta situación, se requiere una respuesta integral, multisectorial y con enfoque territorial. A continuación, se presentan algunas recomendaciones:

- Priorizar inversiones públicas sostenidas en servicios básicos esenciales como agua potable, alcantarillado, recolección de residuos y alumbrado público, especialmente en zonas con mayor deterioro urbano como el Norponiente, Surponiente y Sureste.
- Implementar planes de gestión de riesgos ambientales en las zonas más vulnerables, incorporando mapas de riesgo, protocolos comunitarios de actuación ante desastres y campañas educativas de prevención y preparación.
- Mejorar la infraestructura urbana mediante el desarrollo de espacios públicos seguros y funcionales —como parques, banquetas, jardines y áreas recreativas— que respondan a las necesidades y experiencias de distintos grupos, fomenten la convivencia y contribuyan a mitigar los efectos de la urbanización desordenada.
- Fomentar la participación comunitaria en la gestión ambiental, creando comités vecinales, talleres de formación y mecanismos de consulta que permitan a las personas incidir en las decisiones que afectan su entorno.
- Promover alianzas entre gobierno, sociedad civil y sector privado para implementar soluciones sostenibles, innovadoras y basadas en evidencia, con énfasis en justicia ambiental.
- Fortalecer sistemas de monitoreo y evaluación continua para medir el impacto de las políticas y programas implementados, asegurando transparencia, eficacia y mejoras continuas.

Fortalecer la seguridad ambiental no es solo proteger el entorno, sino garantizar condiciones de vida dignas, equitativas y sostenibles para todas las personas en Ciudad Juárez. Este esfuerzo debe ser colectivo, planificado y sostenido en el tiempo.



Foto: Adrián Alfredo Blanco / Ciudad Juárez



4.8 Seguridad Ontológica

Seguridad Ontológica

¿Qué medimos en esta dimensión?

En esta dimensión se evaluó el grado de vulnerabilidad de las personas ante factores y situaciones que amenazan su dignidad y su sentido de relevancia social. Este último se refiere a la percepción de que su existencia es importante para los demás y para la sociedad, y que tiene valor e impacto en su entorno.

¿Cómo medimos la Seguridad Ontológica?

La medición de esta dimensión se basó en diversos indicadores relacionados con la experiencia cotidiana de las personas durante el último año. Se tomó en cuenta su exposición a tratos denigrantes, violentos o maltrato, así como a estereotipos negativos, estigmatización o discriminación relacionados con su identidad.

Asimismo, se consideró si las personas sienten que son tratadas con respeto por quienes las rodean —incluidos funcionarios públicos y oficiales de policía—, si han podido expresar libremente sus opiniones y si perciben que son valoradas y tratadas con dignidad.

El índice también integró aspectos relacionados con el soporte social e institucional: la existencia de amigos, familiares o personas de confianza a quienes acudir en caso de problemas; la confianza en las instituciones y en que estas trabajan para satisfacer sus necesidades básicas; y la percepción de vivir en espacios que transmiten la idea de que sus vidas, su bienestar y el de su comunidad son importantes y merecen ser protegidos.

Los indicadores se agruparon en tres categorías principales:

- Exposición a factores que afectan la dignidad, como discriminación, deshumanización y exclusión social.
- Acceso a redes de apoyo y servicios esenciales que permitan a las personas vivir con dignidad.
- Ejercicio y disfrute del derecho a la dignidad humana y a participar en la vida social y política, incluyendo la capacidad de influir en el destino de su comunidad.

Clústeres de indicadores vinculados a la seguridad ontológica



Exposición a amenazas

- Exposición a estereotipos negativos, devaluación, deshumanización o estigmatización
- Exposición a amenazas a la identidad social (límites a la identidad y discriminación)
- Exposición a violencia física y psicológica (en el hogar, la escuela, sitios públicos, o el trabajo, online/ social media)
- Exposición a violencia o tratos denigrantes por parte de funcionarios públicos y/o oficiales de policía
- Confianza en la capacidad que tiene para influir en asuntos públicos que afectan su vida y su comunidad.



Acceso a protección

- Acceso a redes de apoyo
- Percepción de la importancia que las instituciones públicas le otorgan a sus necesidades
- Acceso a entornos urbanos que permiten una vida digna
- Acceso a servicios de salud (oportuno, eficiente y asequible)



Libertad para ejercer derechos

- Disfrute del derecho a la dignidad
- Disfrute de sentido de significancia social

¿Qué tan vulnerables fueron las personas frente a factores que afectan su dignidad y por qué?

El índice revela que dos de cada tres personas (66%) viven en un contexto de alto riesgo para la protección de su dignidad y relevancia social en Ciudad Juárez. El 56.8% enfrenta una vulnerabilidad media, lo que sugiere que una parte significativa de la población experimenta algún grado de exclusión, desvalorización o estigmatización en su entorno cotidiano.

Además, un 9.11% se encuentra en una situación de vulnerabilidad alta, lo que implica una carencia severa de reconocimiento, dignidad y validación social, así como acceso limitado a mecanismos de protección frente a estas amenazas. Solo el 28.75% de la población presenta una vulnerabilidad baja, lo que indica que menos de un tercio cuenta con condiciones adecuadas para ejercer plenamente su dignidad y sentido de pertenencia en la sociedad.

Estos niveles elevados de inseguridad ontológica pueden tener impactos significativos en la autoestima, la participación social y el sentido de pertenencia de las personas, especialmente en contextos marcados por discriminación estructural y violencia simbólica.

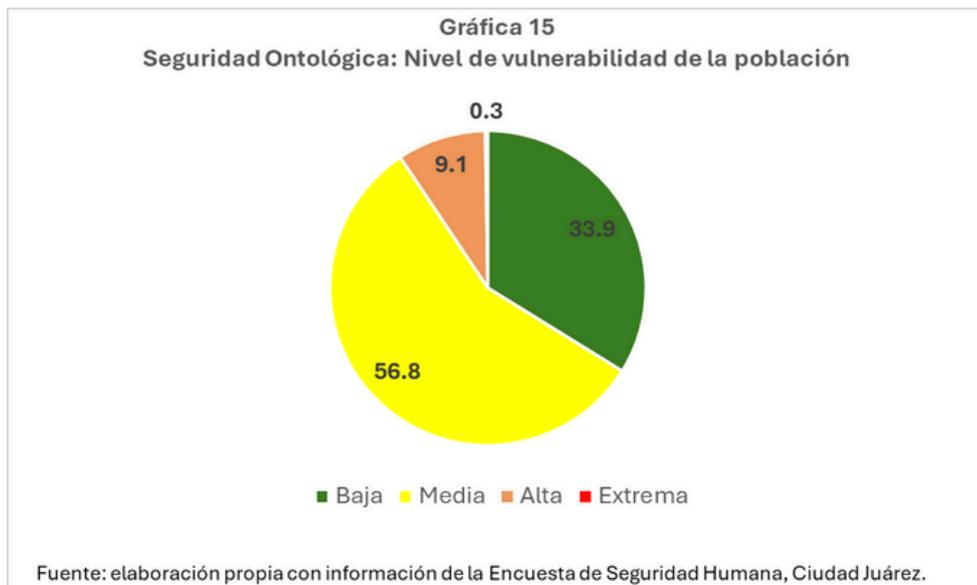
El índice evaluó la exposición a factores como discriminación, exclusión y maltrato. Aunque la gran mayoría reportó haber sido tratada con respeto y no

haber sufrido amenazas o agresiones el último año, sí se identificó un grupo importante que fue objeto de exclusión o tratos denigrantes en espacios clave. Por ejemplo:

- 14% de la población experimentó estigmatización, sintiéndose percibida negativamente por los demás.
- 11.4% reportó discriminación debido a su identidad, condición socioeconómica u orientación sexual.

Estos fenómenos son especialmente relevantes porque fomentan la exclusión social y afectan el bienestar colectivo. En particular, los adolescentes y jóvenes fueron el grupo más expuesto a estas experiencias, lo que requiere especial atención para prevenir impactos negativos en su desarrollo social y emocional (véase la sección 5.2 de este informe).

Sentirse importante y con capacidad de influir en el entorno es crucial para la seguridad ontológica. Los datos revelan un déficit importante en este ámbito. 72.7% de las personas consideraron que no tienen un impacto real en las decisiones públicas que afectan sus vidas y comunidades. Esta percepción de falta de agencia y relevancia social refuerza sentimientos de exclusión e insignificancia.



Relaciones con funcionarios públicos y fuerzas del orden
Las relaciones con funcionarios públicos y oficiales de policía son otro factor que incide en la dignidad y sentido de relevancia social de las personas. En este sentido:

- 19.5% de las personas que interactuaron con estos actores no se sintieron tratadas con respeto.
- 11.3% reportó haber sufrido agresiones o detenciones arbitrarias en los últimos años, con cifras más altas entre los sectores jóvenes de la población.

Estas interacciones negativas no solo afectan la confianza en las instituciones, sino que también refuerzan percepciones de discriminación y exclusión. Además, 27.5% de la población expresó tener poca o ninguna confianza en que las instituciones y sus funcionarios trabajen para atender sus necesidades básicas, lo que agrava la percepción de desprotección y abandono institucional.

Condiciones del entorno urbanos, acceso a servicios vitales y redes de apoyo

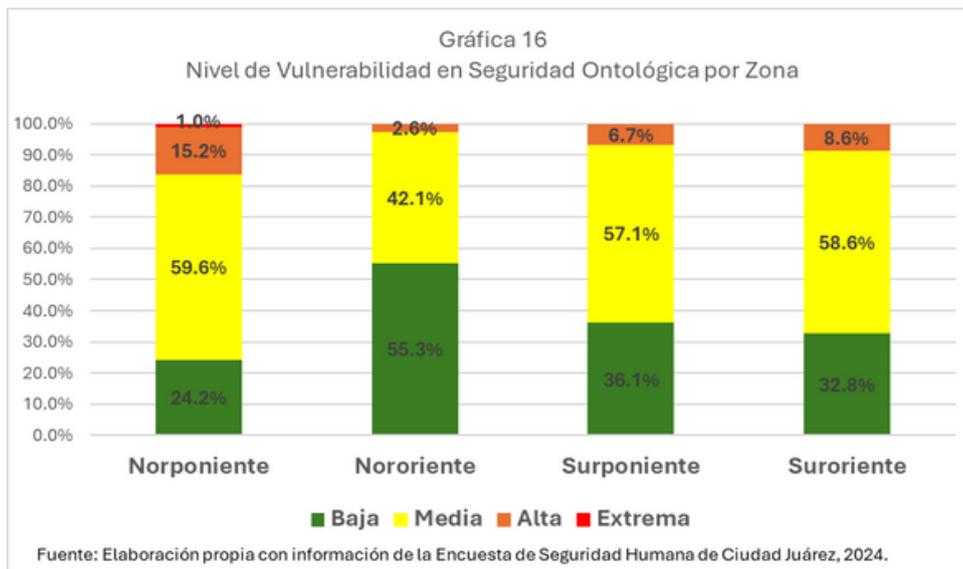
Vivir en contextos urbanos precarios impacta tanto material como simbólicamente en la dignidad de las personas. Las deficiencias en infraestructura refuerzan la percepción de exclusión y afectan la autoestima al transmitir la idea de que existen ciudadanos de segunda categoría. En ese contexto es dicente que casi la mitad de las personas (42.9%) calificó las condiciones de su colonia como regulares y 27.5% las consideró muy malas debido a problemas con calles, alumbrado, drenaje, parques y otros servicios esenciales. En total, alrededor de 7 de cada 10 personas viven en espacios con deficiencias importantes, lo que contribuye a la sensación de abandono y exclusión de los beneficios del desarrollo urbano.

Otro factor que incrementa la vulnerabilidad ontológica es la falta de acceso a servicios de salud mental, fundamentales para procesar las emociones asociadas a la exclusión y las condiciones de vida precarias. 50.9% de las personas reportaron no tener acceso a servicios de salud mental, lo que representa un dato preocupante. La ausencia de estos servicios puede llevar a que las personas internalicen sentimientos de desesperanza e insignificancia. Esto limita su capacidad para desarrollar estrategias que les permitan superar situaciones adversas.

Un factor de protección importante para la seguridad ontológica es contar con redes familiares y de amistades sólidas. Un hallazgo positivo es que en la ciudad 8 de cada 10 personas (80.8%) afirmaron contar con redes de apoyo confiables a las que pueden acudir en momentos difíciles. Estas redes juegan un papel esencial para mitigar los efectos de la exclusión.

¿Dónde se encuentran las personas más vulnerables a factores que amenazan su dignidad?

El índice muestra diferencias territoriales significativas en los niveles de vulnerabilidad frente a factores que afectan la dignidad de las personas en distintas zonas de la ciudad. Estas desigualdades se expresan tanto en el acceso al derecho a la dignidad como en la protección efectiva de la misma. La Zona Norponiente es la que presenta los porcentajes más altos de personas en situación de alta vulnerabilidad (15.2%) y vulnerabilidad media (59.6%) en seguridad ontológica. Esto la convierte en el área con mayor riesgo acumulado en términos de amenazas a la dignidad y dificultades para afrontarlas.



Por su parte, las zonas Surponiente y Suroriente también registran altos porcentajes de personas en vulnerabilidad media. Esto subraya la necesidad de fortalecer las estrategias y medidas destinadas a apoyar a las personas que viven en estas zonas, especialmente para enfrentar situaciones de exclusión y discriminación. Las diferencias en las experiencias de discriminación y exclusión son claras entre las zonas. Por ejemplo, las zonas Norponiente y Suroriente son las que reportaron los mayores porcentajes de personas víctimas de estigmatización y discriminación, con 19% y 20% respectivamente. En contraste, en la zona Nororiente, el 97% de las personas afirmó no haber experimentado este tipo de situaciones, lo que muestra una realidad marcadamente distinta.

También se observaron disparidades importantes en el trato recibido por parte de funcionarios públicos y oficiales de policía, lo cual impacta directamente en la percepción de dignidad de las personas. En la zona Surponiente, se reportó la peor percepción del trato. El 29.4% de las personas declaró no haber recibido un trato respetuoso al interactuar con autoridades, y apenas 39.5% consideró que sí fue tratado con respeto. Este fue el porcentaje más bajo. En contraste, en la zona Norponiente, el 62.6% afirmó haber recibido un trato respetuoso, mientras que en la zona Nororiente esta proporción fue del 55.3%. Estas cifras reflejan desigualdades en las relaciones cotidianas entre la población y las instituciones públicas.

Finalmente, la confianza en que las instituciones y sus funcionarios trabajan para atender las necesidades básicas también varía notablemente según la zona. La zona Nororiente es la que presenta una mejor percepción institucional. En cambio, en la zona Norponiente (41.4%) y en la zona Surponiente (39.5%), un alto porcentaje de personas manifestó tener muy poca o ninguna confianza en las instituciones. Estas percepciones no solo afectan la relación entre la ciudadanía y el Estado, sino que además refuerzan la sensación de exclusión y vulnerabilidad en estos territorios.

Reflexiones sobre la seguridad ontológica: una dimensión clave para el bienestar y la dignidad

En Ciudad Juárez, la seguridad ontológica —entendida como la garantía de ser reconocido, valorado y respetado como sujeto con dignidad— representa un ámbito frágil de la seguridad humana. Aunque esta dimensión suele estar ausente en las conversaciones tradicionales sobre seguridad, sus efectos son profundos y estructurales: afectan la autoestima, el sentido de pertenencia, la confianza institucional y la participación ciudadana. Por ello, el Índice Glocal de Seguridad Humana ha incluido esta dimensión de forma explícita y medible, lo cual constituye una innovación respecto a otros instrumentos que suelen limitarse a indicadores físicos, económicos o institucionales.

Los datos son contundentes: dos de cada tres personas enfrentan algún grado de inseguridad ontológica, con un 9% en vulnerabilidad alta y solo el 33% en baja. Esto revela una crisis silenciosa de reconocimiento y respeto que atraviesa el día a día de muchas personas en la ciudad. Las experiencias de discriminación, maltrato por parte de funcionarios públicos, exclusión en los espacios de decisión y precariedad urbana configuran entornos donde las personas no solo se sienten ignoradas, sino descartables.

Recomendaciones para dignificar la vida cotidiana

- Reconocer la dignidad como un eje de las políticas públicas. Toda intervención urbana, social o institucional debe evaluar su impacto en la percepción de respeto, relevancia y pertenencia de las personas, especialmente en contextos históricamente excluidos.

- Combatir la discriminación estructural y la violencia simbólica. Es necesario fortalecer las políticas de inclusión con enfoque interseccional, garantizando que adolescentes, jóvenes, personas LGBTIQ+, migrantes y comunidades marginadas no sean objeto de estigmatización ni exclusión.
- Mejorar el trato institucional. Las relaciones con servidores públicos deben estar guiadas por el respeto y la empatía. Programas de formación ética y protocolos de trato digno pueden marcar una diferencia significativa en la experiencia cotidiana de la ciudadanía.
- Reducir la precariedad del entorno urbano. Las condiciones del espacio también comunican valor. Mejorar la infraestructura en colonias con rezago — calles, alumbrado, parques, drenaje— contribuye simbólicamente al reconocimiento de las personas como ciudadanas plenas.
- Fortalecer las redes comunitarias y los servicios psicosociales. Las redes de apoyo son un escudo protector frente a la exclusión. Promover espacios de encuentro, escucha y acompañamiento puede fortalecer la seguridad ontológica desde lo comunitario.
- Incluir esta dimensión en el monitoreo de políticas públicas. La seguridad ontológica debe ser parte integral de los sistemas de evaluación del bienestar, ya que mide dimensiones invisibles pero determinantes en la vida cotidiana.
- Incluir la seguridad ontológica en este índice es un avance metodológico y ético fundamental: permite ver y atender formas de violencia y exclusión que, aunque no siempre se traducen en cifras de delito, erosionan el tejido social y la salud emocional de las personas. Cuidar la dignidad es cuidar la base sobre la cual se construyen comunidades seguras, justas y resilientes.



Foto: Adrián Alfredo Blanco / Ciudad Juárez



4.9 Seguridad Tecnológica

Seguridad Tecnológica

¿Qué medimos en esta dimensión?

En esta dimensión se evaluó qué tan vulnerables son las personas frente a diferentes formas de exclusión, riesgos tecnológicos y privación de acceso a los beneficios de la digitalización. Se computaron los resultados que arrojaron indicadores en tres categorías:

- Indicadores para medir la exposición a amenazas concretas que limitan el acceso a tecnologías esenciales o exponen a las personas a riesgos como ciberdelitos.
- Indicadores que miden el acceso a mecanismos de protección y resiliencia frente a los efectos negativos del uso de tecnologías digitales.
- Indicadores que miden la libertad y capacidad de las personas para ejercer sus derechos digitales, incluyendo la privacidad, la seguridad en línea y la participación equitativa en los avances tecnológicos sin sufrir daños físicos, psicológicos o socioeconómicos.

¿Cómo lo medimos?

Para medir la seguridad tecnológica se consideró la exposición en el último año a situaciones que vulneran el acceso seguro y equitativo a la tecnología, como la violencia en medios virtuales (ciberacoso, grooming), los

efectos negativos de las redes sociales (adicción, desinformación), los riesgos digitales (fraudes, robo de datos) y los impactos adversos de las nuevas tecnologías en el trabajo (tecnoestrés, vigilancia laboral invasiva).

También se evaluó el acceso a mecanismos de protección, como información y guías para el uso responsable de la tecnología, así como la disponibilidad de programas que brinden herramientas para enfrentar amenazas digitales. Finalmente, se analizó el ejercicio del derecho al acceso tecnológico, considerando la posibilidad real de beneficiarse de avances digitales, la autonomía para usarlos sin discriminación o exclusión, y la garantía de condiciones estructurales como infraestructura y alfabetización digital que permitan una participación segura y digna en el entorno digital.

¿Qué tan vulnerables son las personas en esta dimensión?

Con base en los resultados del índice para la dimensión de seguridad tecnológica, se observa que un porcentaje importante de la población de Ciudad Juárez (46.4%) se encuentra en un nivel de baja vulnerabilidad, lo que indica que estas personas disponen de un acceso adecuado, constante y confiable a medios tecnológicos, y cuentan con condiciones que les permiten ejercer sus derechos y proteger su bienestar en el entorno digital (gráfica 17).

Clústeres de indicadores vinculados a la seguridad tecnológica



Exposición a amenazas

- Exposición a violencia a través de medios virtuales
- Exposición a efectos negativos de las redes sociales
- Exposición a riesgos digitales
- Exposición a efectos negativos del uso de nuevas tecnologías en el trabajo



Acceso a protección

- Acceso a información y guía para el buen uso de la tecnología



Libertad para ejercer derechos

- Acceso a los beneficios de la tecnología

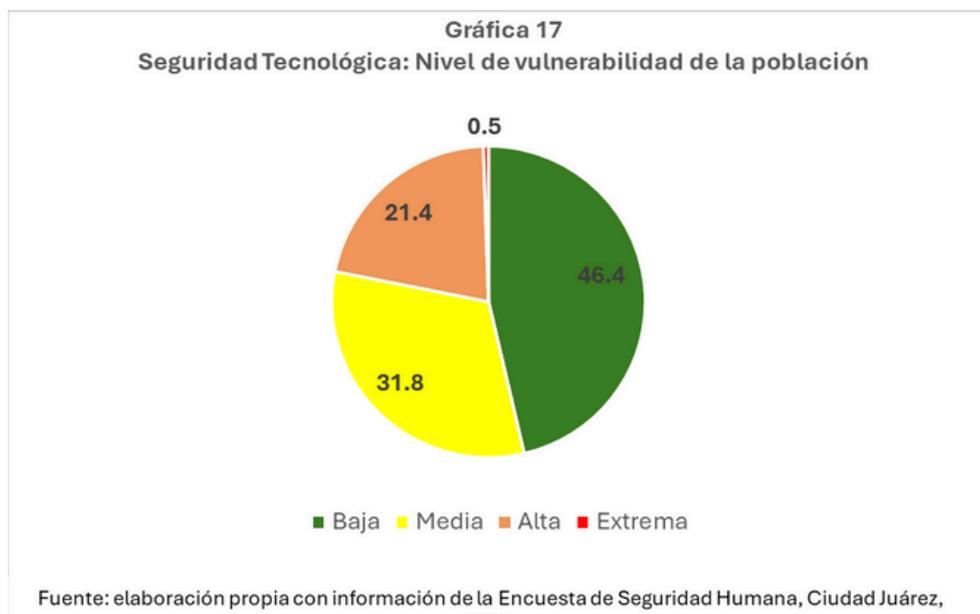
Sin embargo, una proporción significativa (31.8%) presenta vulnerabilidad media, lo que sugiere que, si bien tienen acceso a ciertos recursos digitales, este puede ser parcial o inestable, limitando su capacidad para utilizar la tecnología de manera segura y significativa. Es preocupante que un 21.4% de la población enfrente vulnerabilidad alta, lo cual implica una exposición considerable a riesgos como la conectividad precaria, el acceso limitado a dispositivos o la falta de conocimientos para protegerse frente a amenazas en línea. Estos resultados subrayan la necesidad urgente de cerrar las brechas digitales y promover un acceso equitativo y seguro a las tecnologías, especialmente para los sectores más vulnerables de la ciudad.

Los datos sobre exposición a amenazas en el ámbito tecnológico revelan vulnerabilidades significativas en distintos frentes. Por un lado, un 25.59% de la población ha estado expuesta a contenido violento en redes sociales que involucra a conocidos o vecinos,

mientras que un 4.94% ha recibido mensajes o videos amenazantes directamente, evidenciando riesgos psicosociales y de seguridad personal en entornos digitales.

A esto se suma que un 12.47% ha sufrido hackeo o suplantación de identidad, lo que refleja fallas en la protección de datos personales. En el ámbito laboral, un 11.07% reporta que la tecnología ha reducido sus oportunidades de empleo, mostrando vulnerabilidad económica. Finalmente, el 32.73% dedica más de 3 horas diarias a redes sociales, grupo en riesgo de desarrollar dependencia digital.

Estos porcentajes, aunque no mayoritarios, representan focos críticos que requieren intervenciones específicas, tales como educación digital para identificar y reportar amenazas, fortalecimiento de medidas de ciberseguridad,



programas de capacitación tecnológica laboral y promoción de hábitos digitales saludables. La convergencia de estas vulnerabilidades demanda una política integral de seguridad tecnológica que proteja tanto los derechos digitales como el bienestar psicosocial de la población.

En cuanto al acceso a mecanismos de protección contra amenazas digitales, los datos revelan una brecha crítica: El 51.05% de los encuestados no ha recibido información sobre el uso seguro y saludable de internet y redes sociales, lo que los coloca en situación de vulnerabilidad al carecer de herramientas básicas para identificar riesgos como ciberacoso, fraudes o exposición a contenido nocivo.

La falta de orientación incrementa la exposición pasiva a amenazas y limita la capacidad de respuesta autónoma. Urgen estrategias que combinen campañas masivas de alfabetización digital enfocadas en grupos de mayor riesgo (adolescentes y adultos con alta exposición tecnológica), integración de estos contenidos en programas institucionales y escolares, y colaboración con plataformas digitales para promover alertas y guías accesibles.

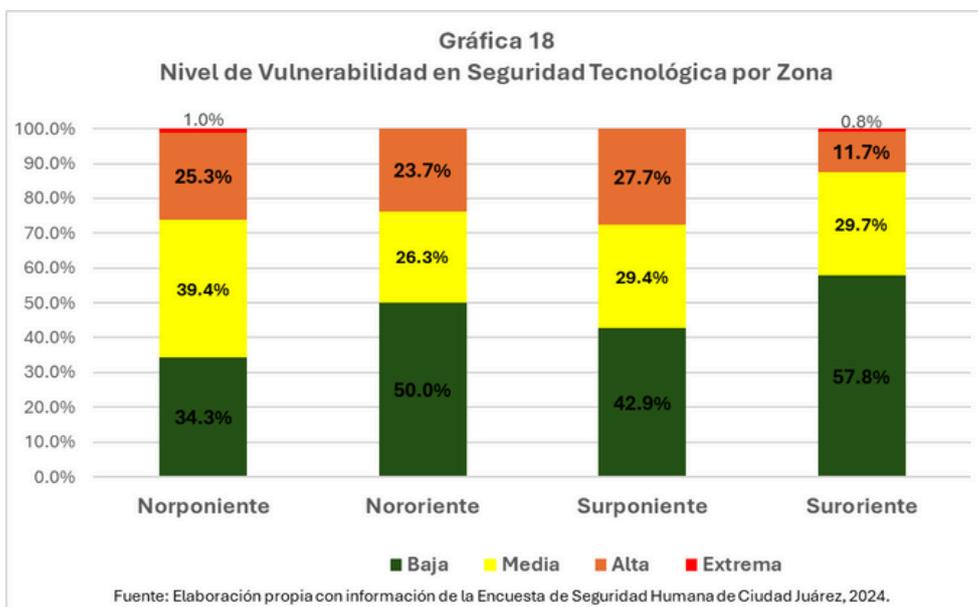
Los datos sobre el ejercicio de derechos digitales revelan un amplio acceso a internet. El 88.02% de la población cuenta con conexión regular —garantizando acceso a información, educación y servicios en línea—. Sin embargo, persiste un 11.98% en situación de vulnerabilidad (sumando 2.60% "Solo tiene internet de vez en cuando" y 9.38% "No tiene"); este grupo enfrenta exclusión en un mundo donde lo digital es requisito para ejercer derechos fundamentales, desde trámites gubernamentales hasta oportunidades laborales o educación a distancia. Aunque el porcentaje parece minoritario, su impacto es

multiplicador, sin internet, este segmento queda fuera de sistemas de protección social, alertas tempranas y redes de apoyo digitalizadas. Urgen políticas que reconozcan el acceso a internet como derecho humano, mediante infraestructura en zonas desatendidas, subsidios para dispositivos y planes de datos, y programas de alfabetización digital que empoderen a los desconectados crónicos (9.38%).

¿Dónde están las personas más vulnerables?

El análisis revela diferencias marcadas en el nivel de vulnerabilidad tecnológica entre las zonas de la ciudad. La Zona 2 (Nororiente) destaca como la menos vulnerable, con 50% de su población en niveles bajos de vulnerabilidad tecnológica, lo que indica un acceso adecuado y confiable a tecnologías y recursos digitales. Le sigue la Zona 4 (Suroriente) con un 57.8% de personas en baja vulnerabilidad, aunque presenta focos de preocupación como el 6.3% en nivel extremo entre adolescentes.

En contraste, la Zona 1 (Norponiente) y la Zona 3 (Surponiente) muestran escenarios más críticos: en la Zona 1, solo el 34.3% tiene baja vulnerabilidad y un 25.3% enfrenta niveles altos, lo cual refleja carencias importantes en conectividad, acceso a dispositivos o habilidades digitales. La Zona 3, aunque con mejores cifras que la Zona 1, también muestra que un 27.7% de la población presenta vulnerabilidad alta, lo que sugiere dificultades para desenvolverse de manera segura y plena en entornos digitales. Estos resultados evidencian la necesidad de intervenciones territoriales focalizadas para reducir las brechas digitales, especialmente entre adultos mayores y sectores con menor acceso a herramientas tecnológicas.



A continuación, se analizan diferencias entre zonas a través de indicadores específicos. El Norponiente (La Zona 1) no solo registra el menor acceso a internet (12.1% sin conexión) y la mayor exposición a contenido violento (7.1% ha recibido amenazas un par de veces y amenazas constantes), sino también presenta el porcentaje más alto de desplazamiento laboral por tecnología (14.0%) y una alarmante falta de formación en seguridad digital (63.6% no ha recibido orientación). A esto se suma que el 34,6% de sus habitantes dedica más de 3 horas diarias a redes sociales, evidenciando una combinación de exclusión digital y riesgos psicosociales.

En contraste, el nororiente (Zona 2) cuenta con el mejor acceso a internet (94.7% conectado), la menor incidencia de hackeos (5.3%) y desplazamiento laboral (4.0%), además de hábitos digitales más moderados (solo 28.1% usa redes sociales de 3 a 4 horas).

Las colonias del suroriente (Zona 4), aunque con buen desempeño en conectividad (92.2% accede a internet) y formación (59.1% informados), enfrenta desafíos específicos importantes, pues se trata de la zona con mayor porcentaje de hackeos (16.1%) y un 12.8% de reducción laboral por tecnología.

Por su parte, en el surponiente (la Zona 3) existen focos críticos, con un 10.3% de personas que sufrieron hackeos, un 38.5% que dedica más de 3 horas diarias a redes sociales y un 15.1% que carece de conexión regular a internet. Estos datos reflejan una vulnerabilidad persistente que, aunque menos extrema que en la Zona 1, requiere atención para evitar que devenga en un mayor deterioro.

Estos resultados muestran una clara disparidad territorial en seguridad tecnológica. El Norponiente demanda intervenciones urgentes y en distinta fase, expansión de infraestructura digital, programas de capacitación laboral y campañas de educación en ciberseguridad. La Zona Suroriental, necesita reforzar la protección contra ciberamenazas y mitigar el impacto laboral de la automatización. El Surponiente requiere estrategias híbridas que combinen mejoras en acceso con promoción de hábitos digitales saludables.

Reflexiones sobre la seguridad tecnológica

Si bien casi la mitad de la población en Ciudad Juárez cuenta con condiciones adecuadas para desenvolverse con seguridad en entornos digitales, persiste una proporción considerable (más del 50%) que enfrenta distintos niveles de inseguridad tecnológica.

Estos riesgos no se limitan al acceso a internet, sino que abarcan amenazas como la exposición a violencia digital, hackeos, pérdida de oportunidades laborales por falta de habilidades digitales, y un uso excesivo de redes sociales sin orientación sobre prácticas seguras.

Este panorama pone en evidencia que el entorno digital no es neutral, sino un espacio que también refleja y amplifica las desigualdades sociales preexistentes, afectando de manera más severa a jóvenes, personas adultas mayores y habitantes de zonas con menor infraestructura.

El análisis subraya la necesidad de políticas diferenciadas que aborden las particularidades de cada territorio, garantizando que el avance tecnológico no profundice las desigualdades existentes.

Tres líneas de acción en esta dimensión son prioritarias:

- Garantizar el acceso universal, seguro y de calidad a internet y dispositivos tecnológicos como un derecho fundamental, con énfasis en las zonas más rezagadas como el Norponiente y Surponiente.
- Fortalecer la alfabetización digital con campañas masivas e intervenciones educativas orientadas a prevenir riesgos psicosociales, fraudes y ciberacoso, especialmente entre adolescentes y personas mayores.
- Fomentar la inclusión digital laboral mediante programas de capacitación técnica que eviten el desplazamiento por automatización y reduzcan la brecha de habilidades.

Estas acciones deben contemplar diferencias territoriales y ser acompañadas de mecanismos comunitarios de protección digital y bienestar psicosocial para que el entorno tecnológico funcione como una herramienta de inclusión, no como una nueva forma de exclusión.

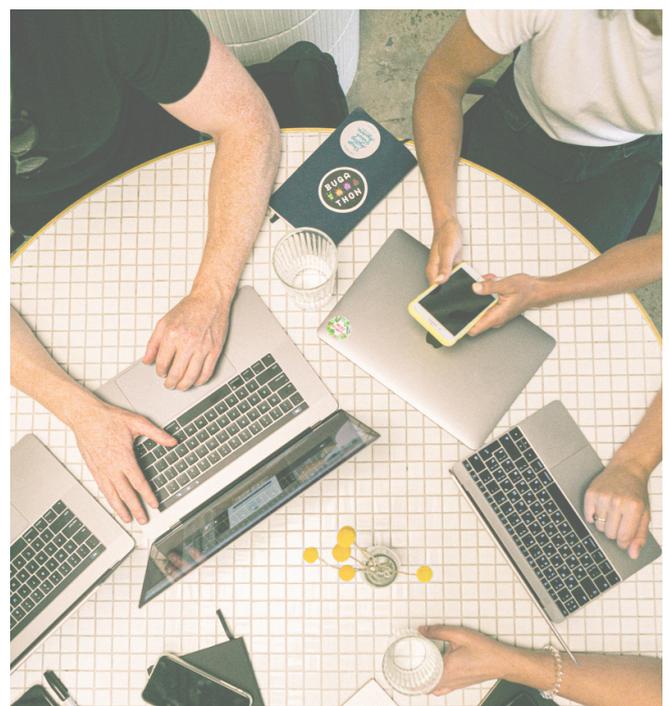




Foto: Adrián Alfredo Blanco / Ciudad Juárez

5. Inseguridad Humana: Perspectiva Multidimensional y Poblacional



Foto: Adrián Alfredo Blanco / Ciudad Juárez

Inseguridad Humana desde una Perspectiva Multidimensional y Poblacional

Esta sección presenta un análisis de los niveles de inseguridad humana que experimenta la población de Ciudad Juárez, con base en el cálculo de la intensidad de dicha inseguridad. El índice clasifica a cada persona según el número y tipo de dimensiones en las que ha presentado vulnerabilidad durante el último año.

El análisis considera que, entre más dimensiones se encuentren afectadas, mayor es la intensidad de la inseguridad humana, especialmente si se trata de las dimensiones prioritarias —seguridad personal, económica, alimentaria y en salud—, cuyo peso es mayor por tratarse de condiciones esenciales para la supervivencia y el ejercicio pleno de derechos.

Este enfoque permite reconocer la inseguridad humana como un fenómeno complejo, cotidiano y multidimensional, que no se limita a una amenaza puntual, sino que refleja el modo en que diversas formas de vulnerabilidad se acumulan e intersecan en la vida de las personas.

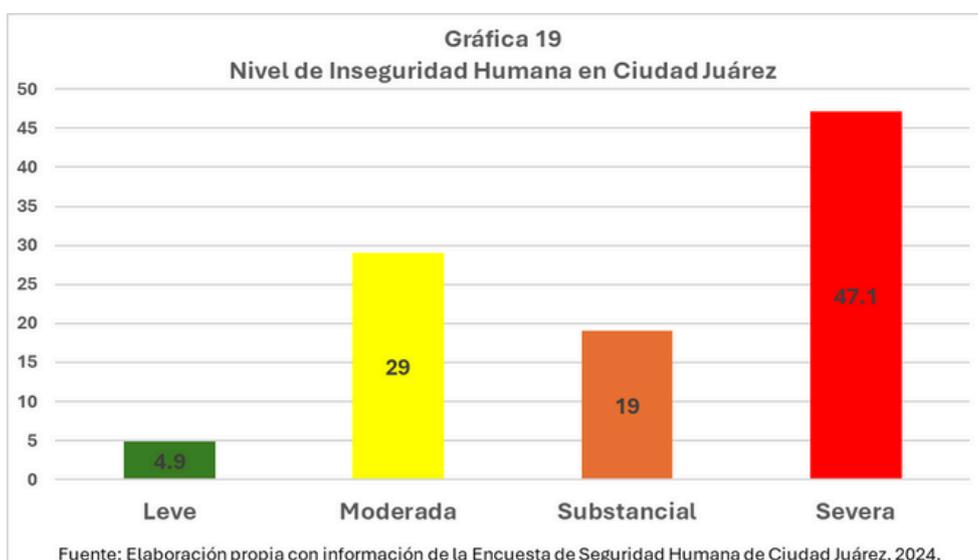
Como se observa en la gráfica, los resultados del índice muestran una situación preocupante. Casi la mitad de la población (47.1%) se encuentra en el nivel más alto de inseguridad humana, es decir, que estas personas presentan una combinación de vulnerabilidades que, por su peso acumulado, equivalen a tener las cuatro dimensiones prioritarias (como seguridad personal, salud, económica y alimentaria, por ejemplo) gravemente afectadas.

Este grupo vive en condiciones de riesgo estructural, con carencias profundas y sistemáticas que requieren atención urgente e integral.

Un 19% adicional enfrenta una inseguridad substancial, con múltiples dimensiones afectadas, aunque no todas prioritarias. Aunque su situación es ligeramente menos crítica que el grupo anterior, siguen siendo personas con condiciones de vida profundamente afectadas, que requieren políticas públicas específicas para mitigar riesgos y facilitar procesos de reparación social y acceso a derechos.

Casi una tercera parte de la población (29%) se encuentra en un nivel moderado de inseguridad humana. Estas personas presentan vulnerabilidad en varias dimensiones —hasta seis— pero sin que más de dos sean prioritarias. Este grupo podría considerarse en riesgo de caer en niveles más críticos si no se interviene a tiempo para garantizar condiciones estables de protección y bienestar.

Solo un pequeño grupo (4.95%) se encuentra en condiciones de inseguridad leve. Es decir, que no tiene ninguna dimensión prioritaria vulnerada y como máximo una complementaria afectada. Este grupo representa una minoría con condiciones relativamente estables, lo que subraya la profundidad y extensión del problema en el resto de la ciudad.



Estos datos evidencian que más de dos tercios de la población experimentan una forma de inseguridad humana intensa o crítica, lo cual exige respuestas integrales, focalizadas y sensibles al carácter acumulativo de las vulnerabilidades que enfrentan.

Desigualdades en la experiencia de inseguridad humana

El Índice Glocal de Seguridad Humana permite identificar que la inseguridad no se experimenta de la misma forma en toda la ciudad ni entre todos los grupos poblacionales. Las condiciones de vida, el acceso a servicios y el nivel de exposición a amenazas varían entre zonas —como el Norponiente, Nororiente, Suroriente y Surponiente—, y también según características sociales como género y edad.

Diferencias por Zonas

Los resultados del índice muestran diferencias significativas en la intensidad de la inseguridad humana entre las distintas zonas de Ciudad Juárez. La Zona 1 Norponiente presenta el panorama más crítico, con el 48.5% de su población en niveles de inseguridad severa y apenas un 4% en inseguridad leve, lo que sugiere una acumulación profunda de vulnerabilidades. De forma similar, la Zona 3 Surponiente y la Zona 4 Suroriente muestran también altos niveles de inseguridad severa (51.3% y 48.4% respectivamente), con una proporción reducida de población en condiciones leves.

En contraste, la Zona 2 Nororiente tiene el porcentaje más bajo de inseguridad severa (26.3%) y la proporción más alta de personas en inseguridad moderada (42.1%) y leve (10.5%), lo que la posiciona como el territorio con menor intensidad general de inseguridad.

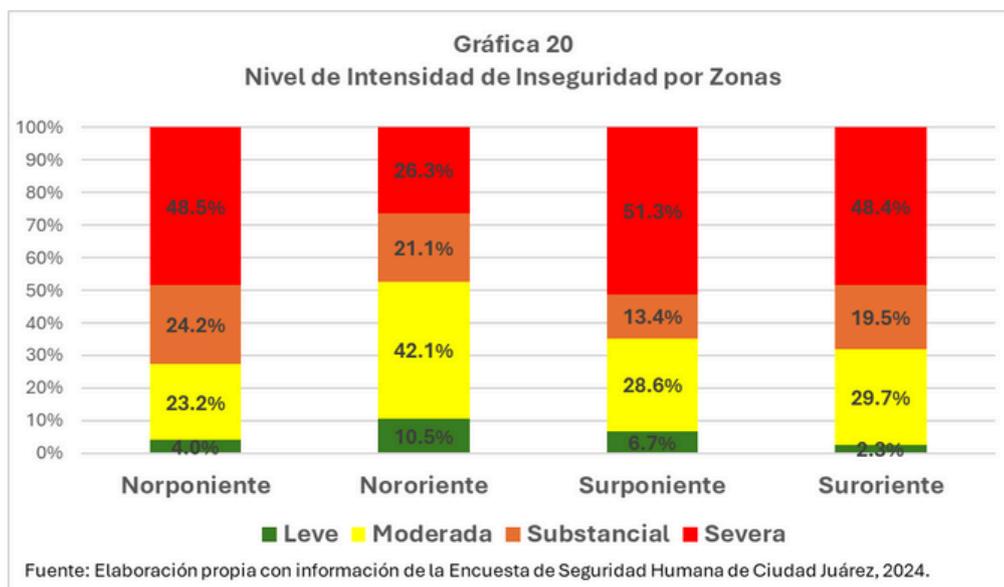
Estas variaciones territoriales reflejan diferencias estructurales en el acceso a servicios, condiciones de vida y exposición a riesgos, y refuerzan la necesidad de respuestas diferenciadas por zona, que reconozcan las realidades específicas de cada territorio.

Son estas diferencias las que ayudan a explicar los puntajes obtenidos en el índice de seguridad humana para cada una de las zonas de la ciudad. El índice asigna un puntaje entre 0 y 1, en función de la proporción de personas que experimentan inseguridad y de la intensidad con la que esta se manifiesta. Un valor de 0 representa la peor situación posible, en la que toda la población se encuentra en condiciones de inseguridad severa, mientras que un valor de 1 indica un estado óptimo, donde nadie experimenta niveles de inseguridad superiores al nivel leve.

Con base en esta metodología, los resultados para Ciudad Juárez revelan niveles sustanciales de inseguridad humana en general, con diferencias significativas entre zonas.

La Zona 2 Nororiente obtuvo el mejor puntaje (0.5), lo que indica que, aunque aún existen niveles relevantes de inseguridad, una proporción mayor de su población presenta condiciones más moderadas y menos intensas de vulnerabilidad. Le sigue la Zona 3 Surponiente, con un puntaje de 0.4, lo que representa una situación intermedia.

En contraste, tanto la Zona 1 Norponiente como la Zona 4 Suroriente alcanzaron un puntaje de apenas 0.3, reflejando condiciones más graves y generalizadas de inseguridad humana en estas áreas. Estos resultados sugieren una acumulación de carencias y amenazas que afectan de forma sostenida a importantes sectores de su población.



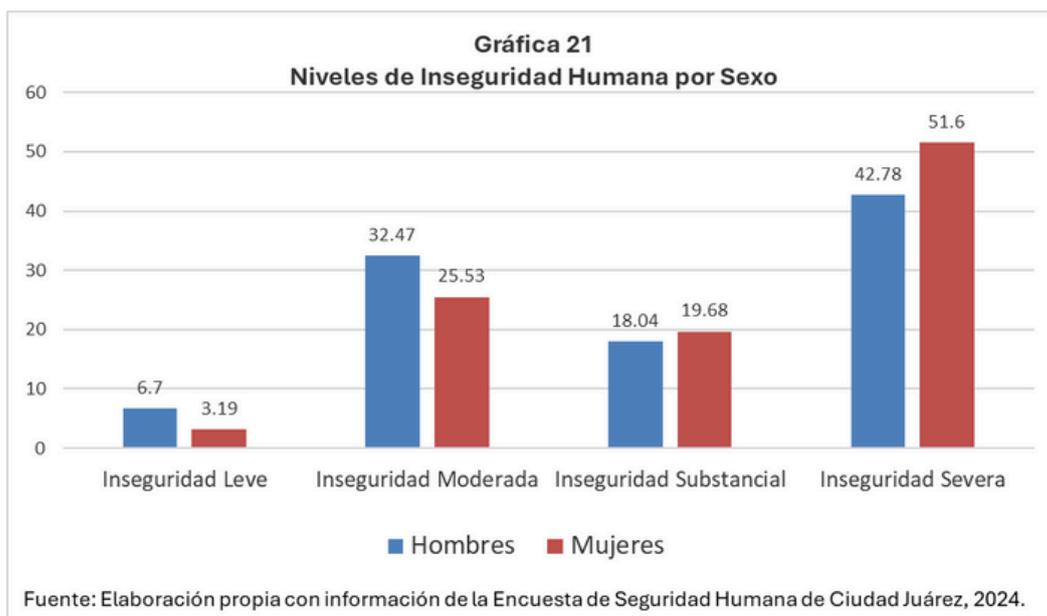
Diferencias por Sexo

El Índice también permite identificar variaciones importantes en la experiencia de inseguridad según el sexo, lo que visibiliza desigualdades estructurales que afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres. Como muestra la gráfica, las mujeres presentan mayores niveles de inseguridad severa (51.6%) en comparación con los hombres (42.8%), lo que indica una carga acumulada de vulnerabilidad más alta en múltiples dimensiones prioritarias como seguridad económica, seguridad personal, seguridad en salud y alimentaria.

Además, las mujeres registran un menor porcentaje en los niveles más bajos del índice: solo el 3.2% de ellas se ubican en inseguridad leve, frente al 6.7% de los hombres.

Aunque los hombres tienen una mayor proporción en inseguridad moderada (32.5% frente al 25.5% en mujeres), esto puede interpretarse como una mayor concentración de las mujeres en los extremos de la escala de inseguridad, particularmente en los niveles severos y substanciales.

Estos datos reafirman la necesidad de abordar la seguridad humana con enfoque de género, reconociendo que las mujeres enfrentan obstáculos particulares para el ejercicio pleno de sus derechos y que la inseguridad que viven es más intensa y estructural. Esta perspectiva es clave para el diseño de políticas públicas más justas, que no solo garanticen la igualdad formal, sino también condiciones reales de bienestar y protección.

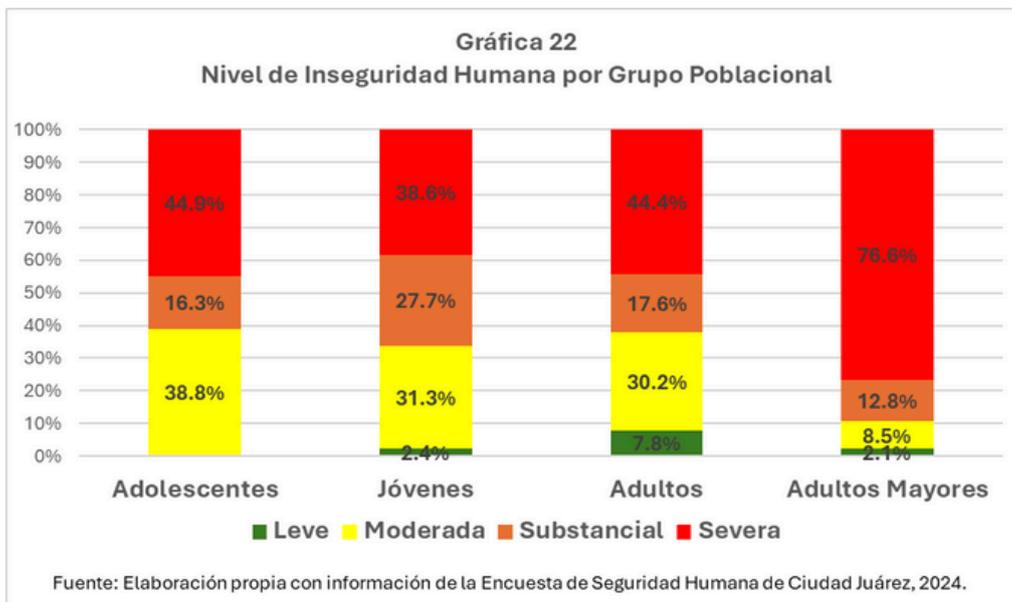


Diferencias por Edad

Los datos muestran que la edad también incide significativamente en la forma en que se experimenta la inseguridad humana, y que ciertos grupos —como las personas adultas mayores— requieren respuestas más urgentes y especializadas. Este grupo es, por mucho, el más afectado: más del 76% enfrenta inseguridad severa y solo un 2.1% presenta inseguridad leve, lo que sugiere que se encuentra sistemáticamente en condiciones críticas en múltiples dimensiones.

A su vez, una proporción muy significativa de adolescentes, jóvenes y personas adultas vive en condiciones de riesgo sostenido. Alrededor del 44% de

adolescentes y adultos y el 38.6% de los jóvenes enfrentan inseguridad severa. Los jóvenes también presentan el porcentaje más alto de inseguridad substancial (27.7%), lo que indica que varias de sus dimensiones prioritarias —como la seguridad personal, económica y en salud— están afectadas. Esta situación refleja una vulnerabilidad acumulada, que si bien aún no es extrema, puede profundizarse si no se abordan sus causas estructurales.



¿Por qué importa analizar los niveles de inseguridad humana por grupos?

Todos los grupos de la población —sin importar su edad, género o condición social— tienen derecho a vivir libres de amenazas y con las condiciones necesarias para ejercer plenamente sus derechos. Desde esta perspectiva, la inseguridad humana es una cuestión de dignidad, justicia y derechos universales.

Sin embargo, además de ser un derecho, la seguridad humana también tiene implicaciones profundas para el funcionamiento social, la cohesión comunitaria y la sostenibilidad de las ciudades. Por eso, comprender cómo se distribuyen las distintas formas de inseguridad entre los diferentes grupos poblacionales es clave no solo para garantizar derechos, sino también para anticipar y prevenir consecuencias estructurales que pueden afectar a toda la comunidad.

Por ejemplo, cuando los adolescentes enfrentan altos niveles de inseguridad —con múltiples dimensiones de su vida afectadas y escaso acceso a factores de protección—, existe un mayor riesgo de que estas condiciones se traduzcan en ciclos de exclusión, deserción educativa, problemas de salud mental o conductas de riesgo.

En contextos urbanos marcados por múltiples formas de vulnerabilidad acumulada, esto puede incluso escalar en dinámicas de violencia interpersonal, participación en economías ilícitas o rupturas comunitarias.

En contraste, la inseguridad severa que enfrentan los adultos mayores, aunque menos visible en términos de conflicto, puede significar soledad, desprotección, dependencia y deterioro acelerado de su salud física y emocional, afectando no solo su calidad de vida, sino también la capacidad de sus redes familiares y sociales de sostenerse.

Así, entender las diferencias no significa jerarquizar quién “merece” más atención, sino reconocer que las formas que toma la inseguridad humana en cada grupo pueden tener repercusiones distintas, tanto en las trayectorias individuales como en el bienestar de toda la ciudad. Este enfoque busca promover respuestas diferenciadas, justas y con mayor capacidad de transformación.



5.1 Seguridad Humana de las Mujeres

Seguridad Humana de las Mujeres

¿Cómo está la seguridad humana de las mujeres en Juárez?

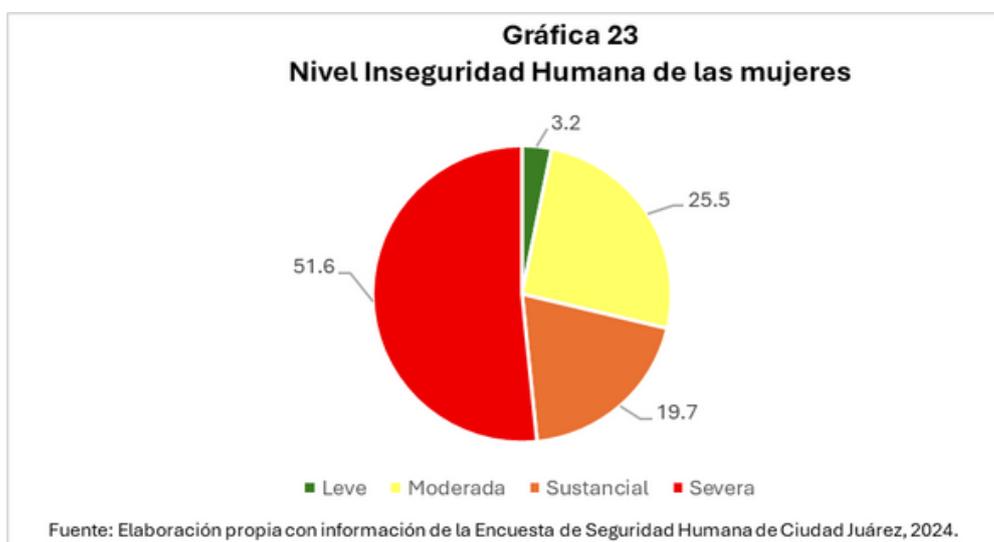
El índice evaluó el nivel de inseguridad humana que enfrentan las mujeres en un contexto marcado por la violencia estructural y la desigualdad de género. Los datos revelan una situación alarmante en materia de seguridad humana para las mujeres en Juárez, donde más de la mitad (51.6%) enfrenta un nivel severo de inseguridad (vs 42.8 de los hombres), lo que significa que presentan múltiples dimensiones de su vida — especialmente las prioritarias como salud, económica, alimentaria o seguridad personal— afectadas de manera simultánea.

Este resultado indica una acumulación crítica de vulnerabilidades y una clara ausencia de mecanismos

efectivos de protección o condiciones para ejercer plenamente sus derechos, lo que insinúa que las mujeres enfrentan amenazas más graves (violencia de género, acoso, restricciones a la movilidad, precariedad económica vinculada al cuidado).

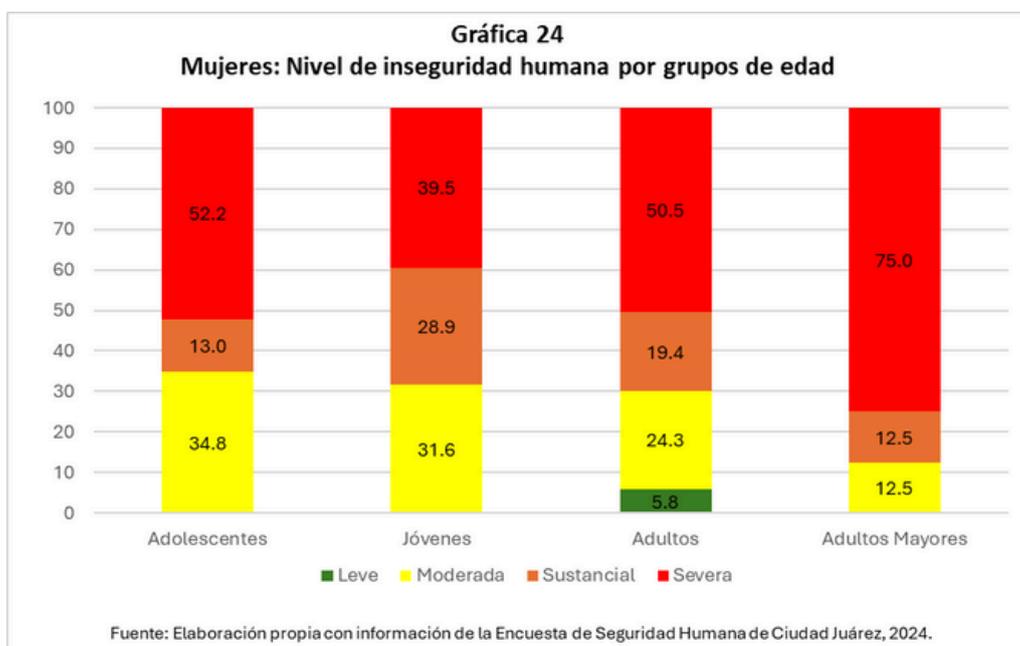
A este grupo se suma un 19.7% con inseguridad sustancial, lo que significa que 71.3% de las mujeres (sumando ambas categorías) experimenta vulneraciones graves en múltiples dimensiones de la seguridad humana.

Por otro lado, el 25.5% enfrenta un nivel moderado que, aunque menos extremo, aún indica riesgos significativos, mientras que solo un 3.2% se encuentra en un nivel leve, confirmando que la inseguridad humana es un problema generalizado.



Al examinar la información por grupo de edad, se hace evidente cómo el ciclo vital profundiza las vulnerabilidades. Los datos revelan que las mujeres adultas mayores constituyen el grupo que experimenta inseguridad con más intensidad, con un 75% en inseguridad severa - la cifra más alta entre todos los grupos - y un 12.5% en nivel sustancial, lo que significa que 87.5% enfrenta condiciones graves o muy graves de inseguridad. Esta situación refleja un abandono sistémico en dimensiones críticas como acceso a salud, protección económica y redes de apoyo social.

Las adolescentes presentan la segunda condición más crítica, con 52.2% en inseguridad severa y 13% sustancial (totalizando 65.2% en niveles graves), destacando particularmente la ausencia total de casos en el nivel leve. Así mismo, las mujeres adultas muestran un patrón similar pero menos extremo, con 50.5% en nivel severo y 19.4% sustancial, mientras que las jóvenes registran 39.5% severo y 28.9% sustancial.



¿Qué tan vulnerables son las mujeres en las nueve dimensiones?

A continuación, se presenta un análisis detallado de las dimensiones de seguridad humana que nos permite ver donde se concentran las mayores vulnerabilidades para las mujeres en Juárez a fin de identificar si los riesgos son económicos, de violencia física, exclusión política o falta de acceso a salud, entre otros, revelando patrones que en evaluaciones generales podrían pasar desapercibidos.

Los datos muestran un panorama multifactorial de vulnerabilidad en las mujeres de Juárez, donde destacan riesgos críticos en dimensiones clave. Con respecto a la **seguridad económica** un 30.9% de las mujeres experimento vulnerabilidad alta, agravada por un 46.8% en nivel medio, reflejando precariedad y falta de autonomía financiera.

La condición de precariedad la podemos ver en el 31.4% de mujeres que se dedican predominante de las tareas domésticas y de cuidado, actividades invisibilizadas y no remuneradas pero que sigue siendo fundamental para el bienestar de las familias y el sostenimiento de la economía. La falta de autonomía financiera de las mujeres la observamos en el 45.7% de las mujeres que participan en la fuerza laboral como empleadas, trabajadoras independientes o empleadoras.

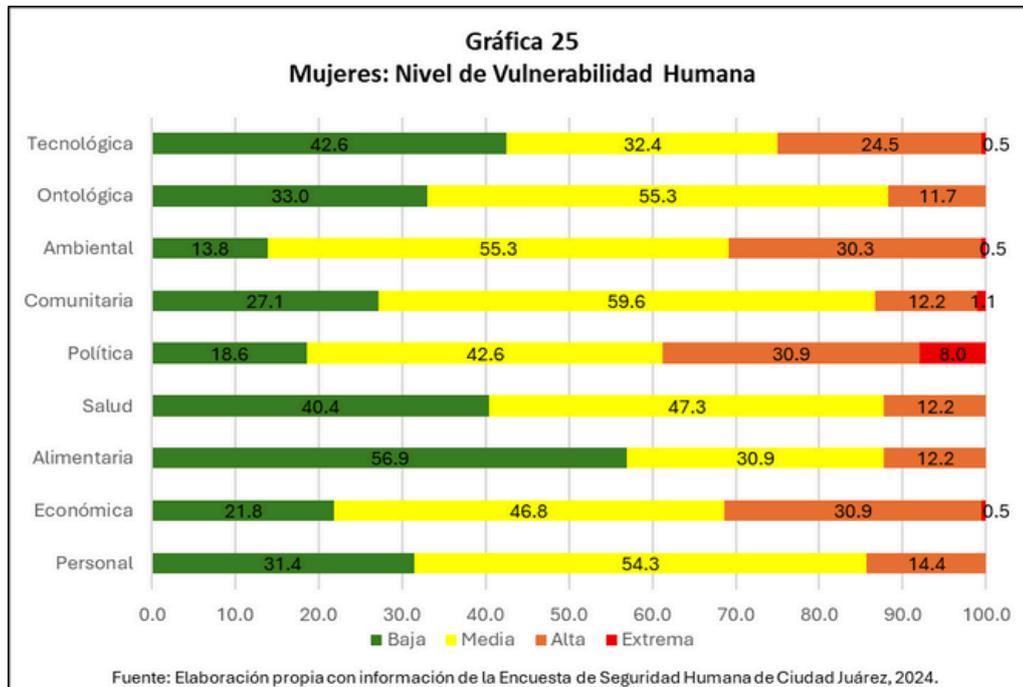
A este panorama que refleja barreras persistentes como la sobrecarga del trabajo doméstico no remunerado, la discriminación laboral y el acceso limitado a oportunidades económicas, se suman disparidades en el acceso a mecanismos de protección económica.

Por ejemplo, las mujeres de la ciudad reportan menor capacidad de ahorro (47.9% frente a 58.38% en hombres), y menor acceso seguro de desempleo (9.45% frente a 18.11%). Mientras que el 29.26% considera que no existen oportunidades laborales para ellas (vs. 16.58% de los hombres), el 40.32% afirma no tener acceso a formación (vs. 30.05% de los hombres). En general las mujeres enfrentan condiciones más desfavorables en ingresos, estabilidad, acceso a empleo, formación y respaldo institucional.

En cuanto a la **seguridad política**, el 38.8% (sumando vulnerabilidad alta y extrema) evidencia exclusión de espacios de decisión; por ejemplo, los datos de la encuesta revelan una alarmante exclusión de las mujeres juarenses en la participación pública y la toma de decisiones comunitarias, con un 74.5% que afirma no haber tenido posibilidad de involucrarse en estos asuntos durante el último año, mientras que un 5.9% lo hizo de manera intermitente ("a veces"), lo que refleja una brecha significativa en la inclusión ciudadana femenina.

La proporción de mujeres que respondieron que no tuvo la posibilidad de participar en asuntos públicos fue tres puntos porcentuales mayor en comparación con los hombres lo que muestra diferencias de género en la participación pública y desigualdades en el ejercicio del derecho a la participación.

Por su parte la **seguridad ambiental** afecta al 30.9% de mujeres con vulnerabilidad alta/extrema, vinculado a riesgos en territorios marginados. Por ejemplo, en indicadores específicos de la dimensión encontramos que el 26.2% de las mujeres en Juárez reconoce vivir en zonas con riesgo de desastres como inundaciones o deslaves, lo que las expone a emergencias recurrentes y desplazamientos forzados.



Además, el 14.9% considera que su entorno no es seguro, saludable ni limpio, reflejando condiciones ambientales críticas que afectan su bienestar, mientras que un 38.3% evalúa su ambiente como "más o menos" aceptable, lo que sugiere una percepción de vulnerabilidad latente ante la contaminación, la falta de infraestructura o la degradación de recursos básicos. Estos datos evidencian que la inseguridad ambiental es un problema extendido, con impactos diferenciados en las mujeres, especialmente aquellas en áreas marginadas, donde la combinación de riesgos climáticos y entornos insalubres agrava su carga de cuidados y limita sus oportunidades de desarrollo.

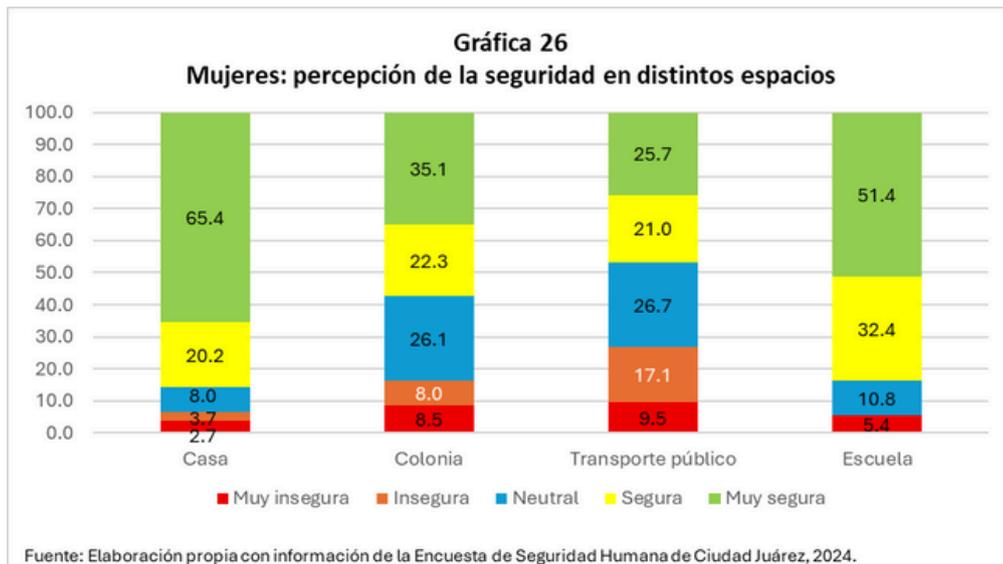
Aunque la **seguridad alimentaria** muestra mayor resiliencia (56.9% en baja vulnerabilidad), persisten carencias en 43.1% de las mujeres (alta/media vulnerabilidad). La seguridad en salud de las mujeres presenta un perfil mixto, pues mientras el 40.4% tiene vulnerabilidad baja (indicando acceso básico a servicios), un 47.3% se ubica en nivel medio y 12.2% en alta, lo que sugiere que más de la mitad (59.5%) enfrenta desafíos significativos en esta dimensión; este elevado porcentaje alerta sobre un sistema que, aunque no colapsado, opera con fragilidad, dejando a muchas mujeres en situaciones de riesgo prevenible.

En términos de **salud física, mental y emocional**, el índice revela una brecha de género significativa, evidenciando la sobreexposición de las mujeres a cargas psicosociales, factores de estrés crónico y mayores dificultades para acceder a servicios de salud. Mientras los hombres reportan con mayor frecuencia niveles altos de salud, las mujeres tienden a concentrarse en los rangos medios y bajos. Por ejemplo, en salud física, el 34.26% de los hombres calificó su estado como "muy bueno", frente al 24.46% de las mujeres.

En salud mental, la diferencia también es notable: 24.5% de los hombres se ubicó en el nivel más alto, mientras que solo 17.6% de las mujeres lo hizo. Además, el 26.66% de las mujeres calificó su salud física como "regular" y un 9.72% como muy mala, en contraste con 19.25% y 4.11% respectivamente entre los hombres. Estos datos evidencian una mayor carga de malestar acumulado entre las mujeres y refuerzan la necesidad de políticas sensibles al género para abordar las desigualdades en salud.

Por otra parte, la **seguridad personal** revela que 14.4% enfrenta riesgos altos de violencia, aunque la mayoría (54.3%) está en nivel medio, sugiriendo amenazas latentes. Los datos sobre exposición a amenazas en esta dimensión revelan que 40.1% de las mujeres experimentó temor por su seguridad personal o la de sus seres queridos, lo que refleja una percepción generalizada de vulnerabilidad ante posibles agresiones.

Este indicador va más allá de la victimización directa, mostrando cómo el miedo condiciona su vida cotidiana, limitando su movilidad y participación social. En este sentido, las mujeres perciben su hogar como el espacio más seguro (65.4% Muy segura), seguido de la escuela (51.4%), mientras que las calles de la colonia y el transporte público son identificadas como los lugares más riesgosos con 16.5% y 26.6% en inseguridad (Muy inseguro e Inseguro), respectivamente. Esta jerarquía de seguridad evidencia cómo el miedo condiciona su movilidad restringiendo actividades en espacios públicos.



Por otro lado, el 9.6% de las mujeres reportó haber sufrido acoso o violencia sexual en comparación con 2.6% de los hombres. Las adolescentes reportan los porcentajes más altos de victimización por acoso sexual con 12.2%. Este dato confirma la materialización de los temores que expresan las mujeres a ser víctimas de algún delito, aunque hay que matizar el dato, ya que probablemente está subestimada debido a la normalización de estas violencias y las barreras para denunciar.

Este temor se refleja en el 11.2% de las mujeres que evitan salir de día por temor a ser víctima de algún delito, evento que incrementa casi cuatro veces en las mujeres que declaran evitar salir de noche (41%) por los mismos motivos. En comparación con los hombres las mujeres enfrentan mayores restricciones a su derecho a la ciudad, a la autonomía y libertad de movimiento, asociadas a los riesgos que enfrentan en el espacio público. Esto se refleja en el mayor porcentaje de mujeres que dejaron de salir de casa comparado con los hombres (11,2% vs solo el 5.67% de hombres).

El análisis de los mecanismos de protección disponibles para las mujeres en Juárez revela un preocupante panorama de desprotección sistémica, donde casi un tercio de las mujeres (29.3%) desconoce los canales de ayuda ante violencia de género, situación que se agrava por la profunda desconfianza en las instituciones, pues el 38.9% de las mujeres reporta tener poca o nula confianza en la policía (26.1% "nada" y 12.8% "poca"), mientras que una cuarta parte (25%) manifiesta igual escepticismo hacia los servicios especializados para víctimas de violencia.

Estos datos evidencian una triple barrera para acceder a justicia y protección, por un lado, está la falta de información sobre recursos disponibles, y por el otro la desconfianza en la policía como primer respondiente y en los mecanismos diseñados específicamente para mujeres, lo que crea un círculo viciado de impunidad y revictimización.

La magnitud de esta desconfianza institucional no solo refleja fallas operativas en las instituciones, sino también un problema estructural de legitimidad que disuade a las víctimas de buscar ayuda formal, aumentando su vulnerabilidad en contextos de violencia ya de por sí elevados.

En **seguridad tecnológica**, el 25% de las mujeres experimenta alta/extrema vulnerabilidad exponiéndolas a brechas digitales y riesgos de violencia en línea. Aunque las diferencias no son enormes, el hecho de que las mujeres reportan una mayor exposición al hackeo (13.51% en comparación con el 11.58% de los hombres) resalta la importancia de reconocer formas específicas de violencia digital y vulnerabilidades tecnológicas por género.

Esto puede incluir desde el acceso no autorizado a cuentas personales hasta acoso en plataformas digitales o suplantación de identidad, fenómenos que normalmente afectan desproporcionadamente a mujeres y personas con presencia pública o activismo en redes.

En tanto dimensiones como **seguridad comunitaria** (13.3% de las mujeres en alta y extrema vulnerabilidad y 59.6% en nivel medio de vulnerabilidad) y **ontológica** (11.7% en alta y 55.3% en media vulnerabilidad) muestran fragilidad en acceso a mecanismos de protección y redes de apoyo. Esta situación pone de relieve la ausencia de entornos seguros y estables que garanticen condiciones mínimas de bienestar cotidiano. Las cifras sugieren la necesidad urgente de fortalecer las políticas públicas orientadas a la reconstrucción del tejido social, la presencia institucional en los territorios, y la generación de espacios comunitarios que promuevan el cuidado mutuo, el acompañamiento psicosocial y el acceso efectivo a la justicia.

¿Dónde están las mujeres que experimentan mayor vulnerabilidad?

En este apartado se analizan los niveles de vulnerabilidad de las mujeres por zonas geográficas de la ciudad, esta segmentación permite reconocer patrones de desigualdad territorial diferenciados que demandan intervenciones específicas. La gráfica 27 sintetiza la situación de las mujeres en los hogares del norponiente (Zona 1) de Juárez, en esta zona destacan las condiciones críticas que experimentan las mujeres en la dimensión económica (32.6% en nivel alto) y política (28.3% alto y 19.6% extremo), agravadas por riesgos ambientales (39.1% alto).

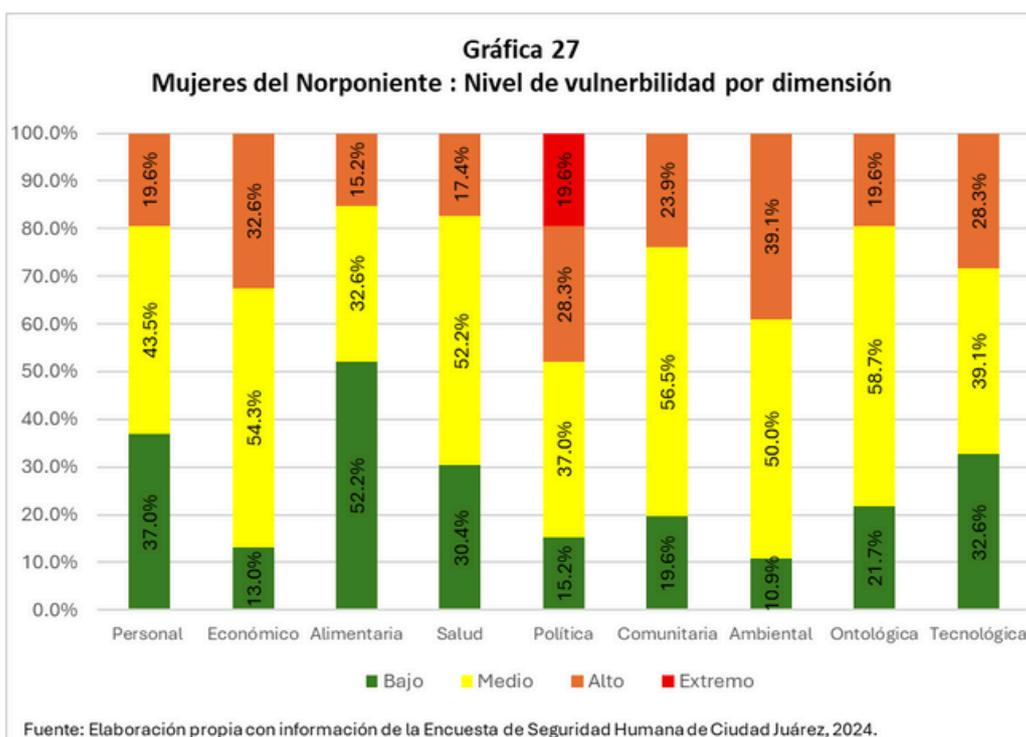
Específicamente en el área económica encontramos que solo el 23.9% de las mujeres se encuentra incorporada como parte de la fuerza laboral (como empleadora, trabajadora independiente o empleada con contrato), lo que sugiere que las mujeres en esta zona enfrentan obstáculos para el acceso a oportunidades de empleo, mientras que el 34.8% son responsables del hogar, lo que refleja una carga adicional en contextos de precariedad.

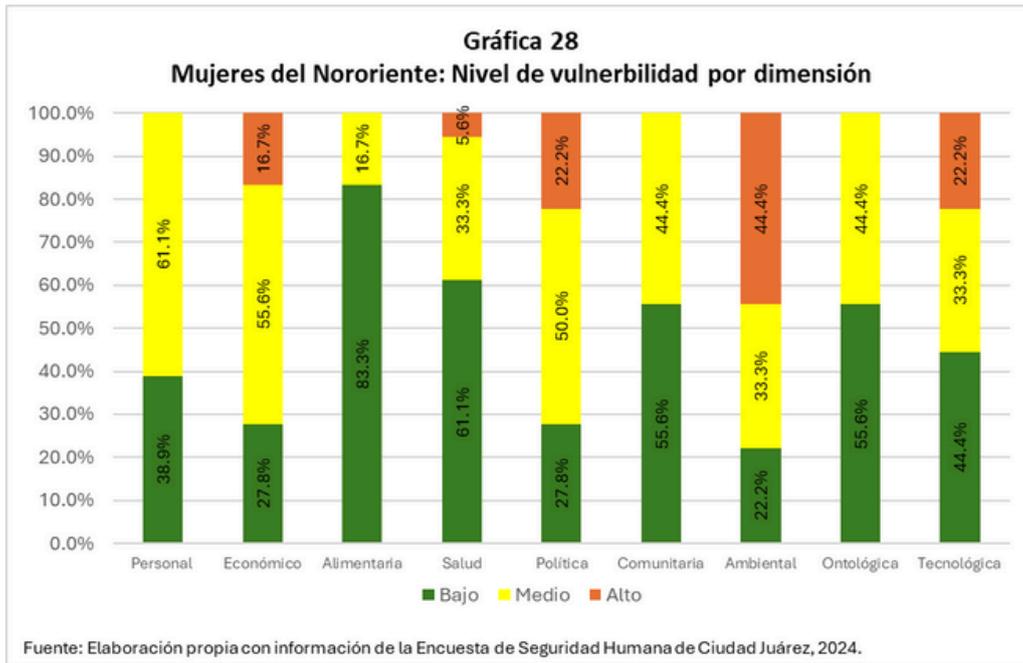
Aunado a este escenario tenemos que la inseguridad económica recurrente afecta a más de la mitad (52.2%) de las mujeres de estas colonias y un 6.5% considera que nunca logra cubrir las necesidades básicas con sus ingresos que dispone; situaciones como estas y la falta de acceso a sistemas financieros formales ha orillado al 34.8% de las mujeres a recurrir a préstamos informales para cubrir gastos esenciales.

En cuanto al panorama de la dimensión política, la encuesta arroja que el 39.1% de las mujeres en el sector no se sienten libres de expresar sus opiniones por temor a represalias, y un alarmante 82.6% considera que no ha tenido participación en decisiones que afectan su vida o comunidad, lo que denota exclusión y marginación en procesos democráticos.

Por su parte en la dimensión ambiental, encontramos que el 47.8% de las mujeres describe el entorno en el que vive como deficiente e inseguro y el 26.7% identifica riesgos de desastres como inundaciones o deslaves, lo que agrava su vulnerabilidad. Estos resultados revelan un escenario de precariedad multidimensional que demanda intervenciones urgentes en empleo, participación ciudadana y mitigación de riesgos ambientales.

La situación de las mujeres de las colonias del nororiente (Zona 2) se encuentran sintetizados en la gráfica 28, los datos revelan que las mujeres que residen en esta zona geográfica muestra mayor resiliencia, con un 83.3% de mujeres que experimentan de seguridad alimentaria (baja vulnerabilidad) y redes comunitarias sólidas (55.6% baja vulnerabilidad), aunque persisten desafíos económicos en un 16.7% de la población femenina.



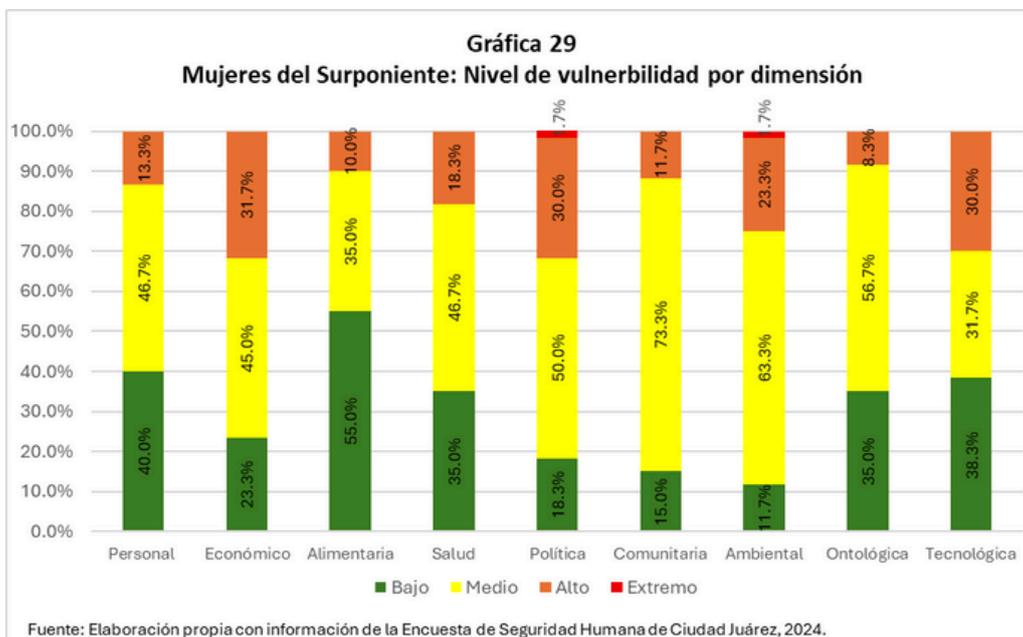


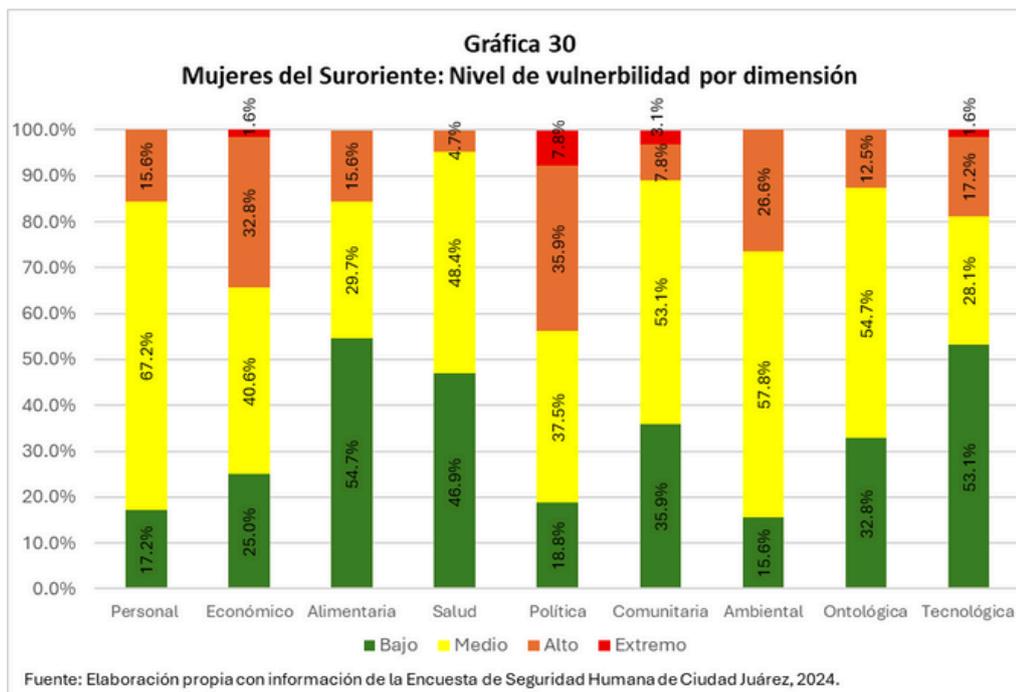
En la dimensión alimentaria, el 72.2% cuenta con ingresos suficientes para cubrir necesidades diarias, y un alto porcentaje (88.9%) afirma no haber experimentado escasez de alimentos. Además, el acceso universal (100%) a agua potable refleja una base sólida en seguridad hídrica. Sin embargo, el 28.8% enfrenta problemas económicos intermitentes, lo que señala vulnerabilidades puntuales en estabilidad financiera.

En la dimensión comunitaria, los resultados son notablemente positivos, por ejemplo, el 100% de las mujeres residentes en la zona reporta que no hay conflictos vecinales, el 94.4% expresa confianza en sus vecinos, y el 83.3% percibe un ambiente de respeto y apoyo mutuo, indicando cohesión social y redes de solidaridad efectivas.

Estos datos sugieren que, pese a las dificultades económicas ocasionales, la zona nororiente destaca por su seguridad alimentaria y fortaleza comunitaria, factores clave para reducir la vulnerabilidad social.

Por otra parte, las mujeres en los hogares del sur poniente (Zona 3), experimentan precariedad económica (31.7% alto) y la fragilidad de redes comunitarias (73.3% vulnerabilidad media), junto con riesgos ambientales (23.3% alto). El panorama que enfrentan las mujeres del sur poniente nos habla de un fenómeno multidimensional con avances y desafíos críticos (ver gráfica 29).





En la dimensión económica, si bien el 48.3% de las mujeres participa en la fuerza laboral —indicando cierta autonomía—, el 45% enfrenta inseguridad económica recurrente y el 38.4% depende de préstamos informales para cubrir necesidades básicas, lo que evidencia fragilidad financiera agravada por el hecho de que el 25% asume solas la responsabilidad del hogar.

En lo comunitario, aunque la mayoría de las mujeres (93.3%) no reporta conflictos vecinales, solo el 20% confía plenamente en sus vecinos y el 45.3% percibe ayuda mutua, revelando redes de apoyo limitadas y una cohesión social fragmentada, donde predomina la confianza selectiva (66.7%).

La dimensión ambiental añade otra capa de vulnerabilidad, donde el 43.3% de las mujeres considera su entorno deficiente e inseguro, y el 28.3% identifica riesgos de desastres como inundaciones o deslaves, lo que no solo amenaza su bienestar inmediato, sino que profundiza las desigualdades estructurales.

Estos resultados matizan un escenario donde las mujeres, pese a su inserción laboral y la convivencia pacífica, viven inseguridades económicas, desconfianza comunitaria y con riesgos ambientales, lo cual requiere políticas intersectoriales con enfoque de género que aborden estas vulnerabilidades de manera integral.

Finalmente, en la gráfica 30 se encuentran los datos que describen la realidad que enfrentan las mujeres que habitan las colonias del suroriente (Zona 4), los datos perfilan evidencia contundente donde se puede ver que las mujeres enfrentan situaciones más críticas en las dimensiones política (35.9% alto y 7.8% extremo), económica (32.8% en alta vulnerabilidad y 1.6% en extrema), y ambiental (26.6% en alta vulnerabilidad y

57.8% en nivel medio), estas vulnerabilidades limitan su participación plena en la sociedad.

En el ámbito político, el 25% de las mujeres reporta temor a expresar sus opiniones libremente debido a posibles represalias, mientras que un 75% considera que no ha tenido oportunidades para participar en decisiones que afectan su vida o comunidad, lo que refleja una grave exclusión de los procesos democráticos y de toma de decisiones.

Los indicadores de seguridad económica revelan una situación crítica para las mujeres del suroriente, donde solo el 32.8% cuenta con empleo formal, mientras el 29.7% asume la responsabilidad total del hogar, combinando precariedad laboral con sobrecarga de cuidados. La insuficiencia de ingresos es alarmante —el 46% reconoce que a veces no cubren sus necesidades básicas y el 56.3% no puede ahorrar—, lo que las obliga a recurrir a préstamos informales (50%) y las mantiene en un ciclo de vulnerabilidad, agravado por la exclusión financiera (42.2% sin acceso a créditos bancarios) y el fracaso de las redes de protección (53% no recibió ayudas gubernamentales pese a necesitarlas). Esta combinación de empleo inestable, dependencia de mecanismos informales y ausencia institucional configura un escenario de inseguridad económica.

En la dimensión ambiental, los datos de la encuesta revelan una situación compleja para las mujeres que habitan el suroriente, pues 25% de ellas percibe su entorno como inseguro, insalubre o sucio, lo que refleja condiciones de vida que vulneran su bienestar en lo cotidiano. Así mismo, el 22% de las mujeres identifica que vive en una zona de riesgo de desastres, ya sea por inundaciones, deslaves, u otros peligros ambientales, incrementando su vulnerabilidad ante emergencias.

El escenario precario se agrava con la deficiente infraestructura de algunas colonias, por ejemplo 37.5% califica como "muy malas" las condiciones de su colonia, señalando graves carencias en servicios básicos y mantenimiento urbano. Además, la falta de espacios públicos adecuados es alarmante, mientras 26.6% reconoce la existencia de áreas recreativas, estas están deterioradas o son insuficientes, y otro 25% directamente reporta su ausencia, lo que limita su acceso a entornos de esparcimiento seguro y afecta su calidad de vida.

Estos indicadores, en conjunto, proporcionan un panorama de abandono estructural y marginación ambiental, donde la combinación de infraestructura deficiente, riesgos latentes y falta de espacios públicos dignos no solo agrava la inseguridad cotidiana de las mujeres, sino que también profundiza las desigualdades de género al restringir sus oportunidades de desarrollo comunitario y autonomía en el territorio.

Reflexiones sobre la seguridad humana de las mujeres en Ciudad Juárez

Los resultados del Índice Glocal de Seguridad Humana muestran con claridad que las mujeres en Ciudad Juárez enfrentan una crisis multidimensional de inseguridad, marcada por vulnerabilidades acumuladas en todas las dimensiones evaluadas. Esta situación no es casual ni aislada: responde a patrones estructurales de desprotección que se intensifican por razones de género, generando una realidad sistémica que limita el ejercicio pleno de sus derechos, autonomía y bienestar.

- **Una estrategia de protección integral con enfoque de género es urgente:** La magnitud y complejidad de la inseguridad que enfrentan las mujeres exige una respuesta articulada entre niveles de gobierno y sectores sociales. Se recomienda una política pública que combine protección económica (empleo formal, subsidios dirigidos, capacitación), acceso garantizado a salud, justicia y tecnologías, participación efectiva de mujeres en espacios de toma de decisiones, e intervenciones focalizadas en territorios de alto riesgo. La voz de las mujeres debe ser central en el diseño, implementación y evaluación de estas acciones.
- **Ciclo de vida y género: dos dimensiones entrelazadas de vulnerabilidad:** El análisis etario evidencia que la inseguridad humana afecta con especial gravedad a mujeres adolescentes y adultas mayores. En las adolescentes, la falta de entornos protectores, educación sexual integral y oportunidades de desarrollo genera exclusión y riesgo. En las adultas mayores, el abandono estructural en salud, ingresos y redes de cuidado las deja expuestas a condiciones críticas.

Se recomienda ampliar y reforzar programas como las pensiones universales con enfoque de género, desplegar brigadas de salud geriátrica, crear redes comunitarias de apoyo y diseñar programas de "Escuelas Protectoras" con educación sexual integral, clínicas de salud reproductiva en planteles educativos y becas vinculadas a proyectos de vida que prevengan la deserción escolar y promuevan su autonomía.

- **La dimensión territorial agudiza las desigualdades de género:** El territorio opera como un amplificador de la exclusión. Zonas periféricas como el norponiente, surponiente y suroriente —la llamada "media luna"— concentran las mayores carencias en empleo, servicios, movilidad, participación y acceso a derechos. En contraste, el nororiente presenta cierta estabilidad. Se recomienda adoptar un enfoque territorial en todas las políticas públicas, con mapas de vulnerabilidad que guíen la asignación de recursos y permitan intervenciones diferenciadas. Las zonas periféricas deben priorizar el empleo con perspectiva de género, mejorar la infraestructura básica y garantizar servicios accesibles. En el nororiente, se debe consolidar lo avanzado mediante el fortalecimiento de redes sociales, organizaciones comunitarias y programas de cohesión social.
- **Brechas persistentes en todas las dimensiones:** En cada una de las dimensiones del índice —desde salud hasta entorno ambiental o participación política— las mujeres presentan mayores niveles de vulnerabilidad que los hombres. Esta tendencia demanda una política intersectorial que combine desarrollo económico, políticas de igualdad y estrategias de reducción de riesgos. El fortalecimiento de redes comunitarias, la generación de autonomía económica y el acceso igualitario a servicios son claves para romper el ciclo de inseguridad que atraviesa las vidas de muchas mujeres en Ciudad Juárez.



5.2 Seguridad Humana de Adolescentes y Jóvenes

Seguridad Humana Adolescentes y Jóvenes

¿Cómo está la seguridad humana de la población más joven de la ciudad?

El índice permite comprender con mayor profundidad las experiencias de la población más joven de la ciudad, al medir el nivel de inseguridad que enfrentan adolescentes (personas entre 15 y 19 años) y jóvenes (entre 20 y 29 años), a partir de su grado de vulnerabilidad en las nueve dimensiones de la seguridad humana. Los resultados evidencian la persistencia de vulnerabilidades acumuladas a lo largo del ciclo vital juvenil y subrayan la urgencia de diseñar políticas efectivas que acompañen la transición de la adolescencia a la vida adulta, garantizando mayores niveles de protección y bienestar.

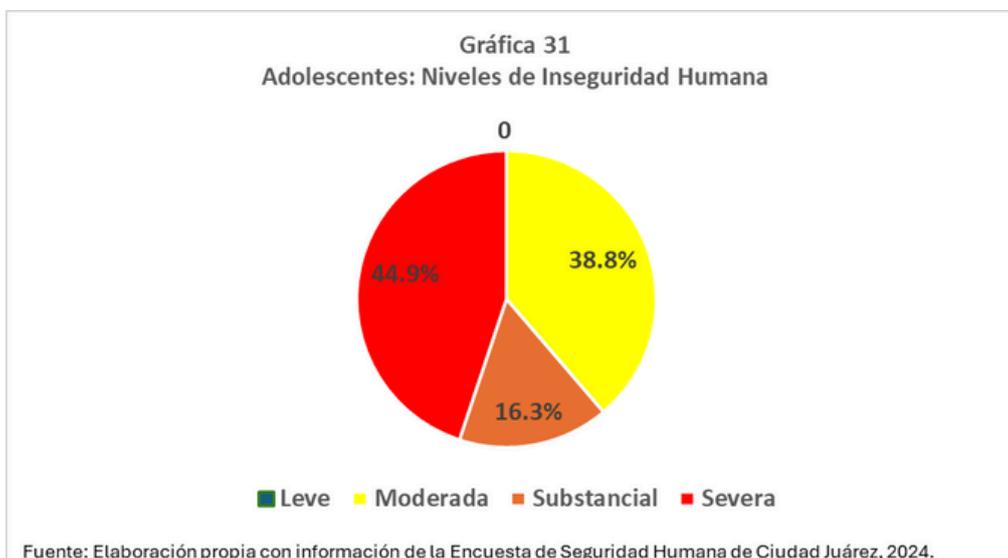
Los resultados muestran que las y los adolescentes juarenses enfrentan una situación preocupante. El 45% se encuentran en una condición de inseguridad severa, lo que indica que están expuestos a vulnerabilidad simultánea en la mayoría de las dimensiones, incluidas las cuatro prioritarias: seguridad personal, económica, alimentaria y en salud. Además, un 16.3% adicional se encuentra en el nivel substancial, lo que significa que presentan múltiples dimensiones afectadas, incluyendo hasta tres prioritarias.

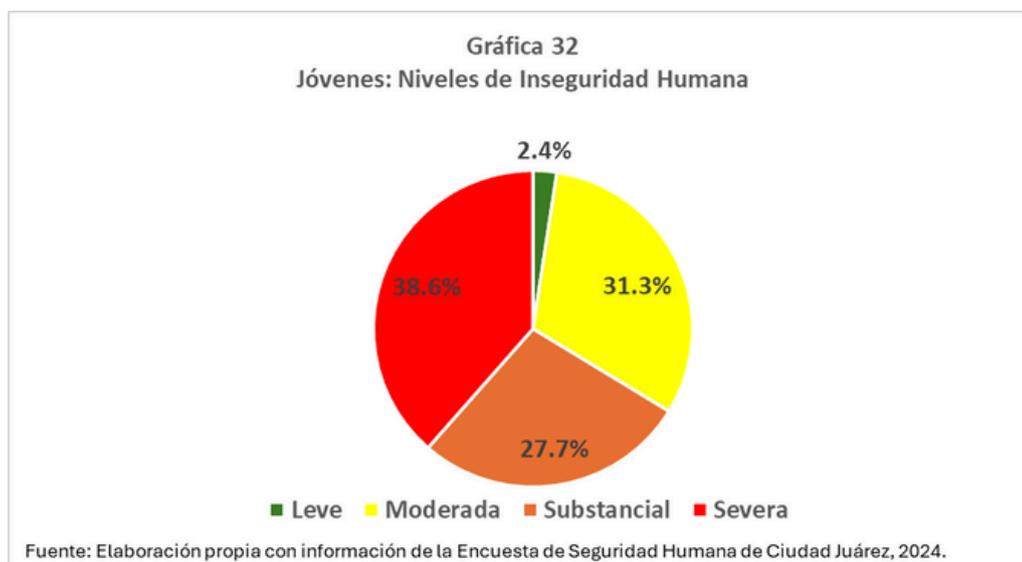
Esto implica que más del 60% de los adolescentes vive en condiciones de inseguridad intensa, con afectaciones significativas a su bienestar, desarrollo y ejercicio de derechos.

Además, el hecho de que ninguno se ubique en el nivel de inseguridad leve resalta la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y ampliar las oportunidades de desarrollo para este grupo etario, con el fin de generar condiciones reales de protección integral.

Los datos del grupo de jóvenes revelan una continuidad en la trayectoria de inseguridad humana en la población juvenil de Juárez. Aunque se observa una leve disminución en el nivel más crítico de inseguridad —el 39% de los jóvenes se encuentra en condición severa, frente al 45% en adolescentes—, esta sigue siendo una proporción alarmante, indicando que 4 de cada 10 jóvenes enfrentan vulnerabilidad simultánea en la mayoría de las dimensiones incluidas las cuatro dimensiones prioritarias.

A esto se suma un 27% en nivel substancial y un 32% en nivel moderado, lo cual significa que más del 97% de los jóvenes continúan viviendo con formas significativas de inseguridad, aunque estas puedan variar en su intensidad y composición. Solo un 2.4% de los jóvenes logró ubicarse en el nivel leve de inseguridad, lo que refuerza la idea de que las condiciones mínimas de bienestar y protección siguen siendo la excepción y no la norma.





¿Qué tan vulnerables son los adolescentes y jóvenes en las nueve dimensiones de la seguridad humana?

El análisis de los niveles de vulnerabilidad por dimensión muestra que adolescentes y jóvenes en Juárez enfrentan riesgos significativos en la mayoría de las dimensiones de la seguridad humana, incluidas aquellas consideradas prioritarias. En particular, las dimensiones política, económica, personal, comunitaria, ambiental, ontológica y de salud reflejan situaciones especialmente críticas.

La **inseguridad política** destaca por su severidad. Entre los adolescentes, un 41% se encuentra en nivel alto de vulnerabilidad en esta dimensión, mientras que entre los jóvenes (20 a 29 años), un 33.7% se sitúa en niveles alto y extremo (27.7% alto y 6% extremo). Estos datos reflejan una realidad alarmante de exclusión, falta de representación y exposición a riesgos institucionales.

El índice muestra que los niveles de participación en asuntos públicos y en decisiones que afectan su vida y la de su comunidad son notablemente bajos, especialmente entre adolescentes: apenas un 8.16% afirma haber participado activamente en espacios públicos o comunitarios.

Entre los jóvenes, la participación es más elevada, pero sigue siendo limitada: solo el 21.95% participa activamente, frente a un 69.51% que no lo hace, y un 8.54% que lo hace de manera ocasional.

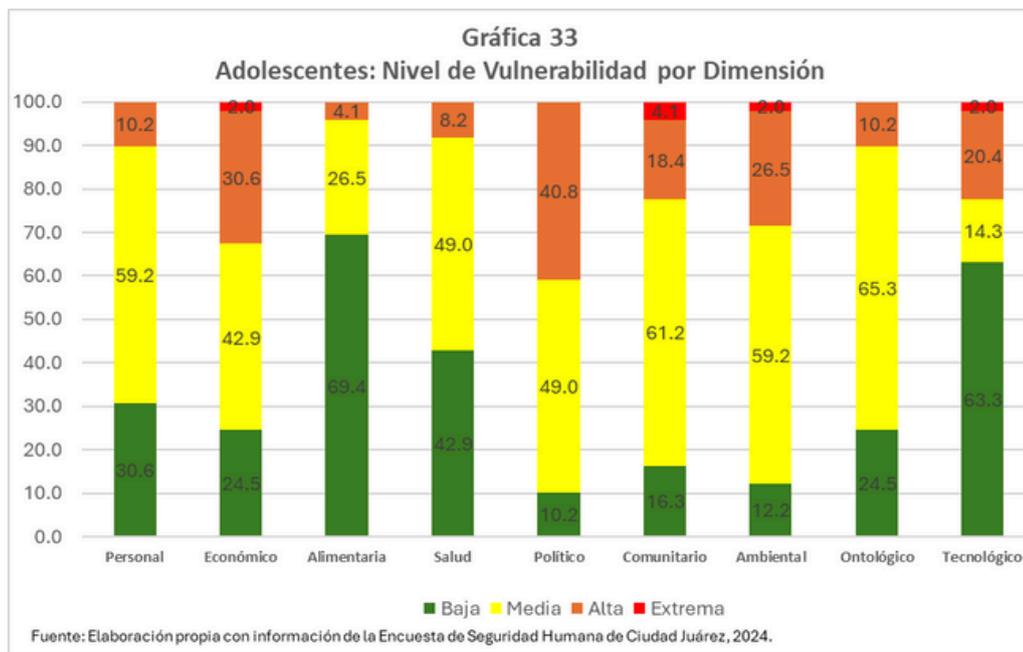
Estos datos reflejan una fractura profunda entre la juventud y las estructuras de toma de decisiones, así como la importancia de generar espacios y procesos que fomenten la participación ciudadana desde edades tempranas.

A esta exclusión se suma la experiencia directa de violencia institucional, que erosiona la confianza de adolescentes y jóvenes en las instituciones públicas y afecta tanto su seguridad política como personal. Un dato revelador es que los adolescentes reportaron la mayor incidencia de agresiones y detenciones arbitrarias por oficiales de policía en el último año: un 10.2% afirmó haber sido víctima en alguna ocasión, y un 2.04% asegura que esto ocurrió con frecuencia. En comparación con otros grupos etarios, los adolescentes y los jóvenes concentraron el mayor nivel de afectación.

En el caso de los jóvenes, un 16.05% reportó haber sido agredido o detenido arbitrariamente alguna vez el último año, lo cual refuerza la percepción de vulnerabilidad extendida, aunque no permanente. Esta exposición diferencial de la juventud a agresiones por parte de oficiales está influida por factores como la criminalización y la estigmatización social de la juventud que se ve atravesada por el género, el territorio de residencia y el estatus socioeconómico.

La población más joven de Juárez también experimentó una situación crítica en términos de **seguridad económica**. Un 30.6% de los adolescentes y un 22.9% de los jóvenes se encuentran en un nivel alto de vulnerabilidad económica, mientras que un 42.9% adicional de adolescentes y un 43.4% de jóvenes está en un nivel medio.

En conjunto, esto significa que más del 73% de los adolescentes y el 66% de los jóvenes enfrentan condiciones económicas frágiles, que limitan su acceso a recursos básicos, restringen sus oportunidades de desarrollo y aumentan su exposición a dinámicas de exclusión. La presencia de un 2% de adolescentes en nivel extremo de inseguridad económica refuerza la urgencia de atender situaciones de pobreza severa y privación estructural.



Un factor clave que condiciona tanto la situación actual como las proyecciones futuras de desarrollo y seguridad económica de esta población es su acceso a la educación. Los resultados del índice muestran que más de la mitad (53.06%) de los adolescentes se identificaron como estudiantes, lo que indica que una mayoría importante continúa su formación académica. Además, un 14.29% declaró que estudia y trabaja al mismo tiempo, lo que revela una doble carga de responsabilidades que puede comprometer su rendimiento escolar, su salud mental y su bienestar general.

Sin embargo, preocupa que el 28.57% de los y las adolescentes no estén actualmente en la escuela. De ese grupo, un 18.37% ya participa en el mercado laboral formal como empleados con contrato, mientras que un 4.08% reportó haber desertado de la escuela en el último año, lo que evidencia procesos activos de exclusión educativa. A esto se suma otro 4.08% que se identificó como responsable del hogar, reflejando que ciertos adolescentes asumen desde temprana edad tareas de cuidado o gestión doméstica como ocupación principal, lo cual puede limitar seriamente su desarrollo personal, educativo y social.

Uno de los principales factores que impulsa la inseguridad económica entre los jóvenes es la dificultad para ejercer su derecho a acceder a empleos dignos y fuentes de ingreso estables, así como la precariedad general de las oportunidades laborales disponibles. Por ejemplo, los jóvenes fueron el grupo poblacional que más calificó las oportunidades laborales como precarias o muy escasas (37.35% combinados). Además, un 18.37% de los adolescentes y un 8.43% de los jóvenes declaró que, en el último año, tuvo que aceptar trabajos que preferiría no realizar por necesidad económica.

Esto sugiere que, aunque el 68.42% de los jóvenes considera que su empleo es estable y alrededor del 63% cree que sus ingresos son suficientes, esta percepción de estabilidad convive con condiciones estructurales frágiles. En términos de formación, un 29.27% indicó no tener acceso a oportunidades de capacitación laboral, lo que limita su movilidad económica futura.

Además, la falta de acceso a mecanismos de protección social, como el seguro de desempleo, deja tanto a jóvenes como a adultos expuestos a crisis laborales sin respaldo institucional. En suma, la precariedad laboral afecta incluso a quienes reportan condiciones relativamente positivas, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad estructural del empleo juvenil en Juárez.

La **seguridad comunitaria** es otra de las dimensiones en las que una proporción muy amplia de adolescentes experimenta inseguridad. El 61.2% se encuentra en nivel de vulnerabilidad media y un 22.5% adicional en niveles alto o extremo, lo que evidencia una afectación generalizada. La situación de los jóvenes en esta dimensión es similar, aunque ligeramente menos grave: un 64% presenta vulnerabilidad media, mientras que el 11% experimenta niveles alto o extremo.

Si bien factores como la exposición a situaciones de conflictividad comunitaria afectan significativamente la seguridad comunitaria, la falta de acceso a recursos de apoyo comunitario es uno de los principales determinantes de vulnerabilidad entre la población más joven. Los adolescentes son el grupo con mayor nivel de exposición a conflictos vecinales y menor confianza en su entorno: el 18.36% reportó haber tenido conflictos con vecinas o vecinos, el doble del promedio general, y un preocupante 10.2% declaró que estas situaciones ocurren con frecuencia.

Además, el 18.37% de los adolescentes afirma no confiar en nadie de su comunidad, y solo un 8.16% reconoce la existencia de organizaciones comunitarias, lo que evidencia un limitado acceso a redes colectivas. Esta debilidad en el tejido social también se refleja en el bajo reconocimiento de redes de seguridad a nivel comunitario (8.16% de los adolescentes) y de espacios institucionalizados de conciliación o mediación de conflictos (solo el 2.04% de los adolescentes los identificó). Entre los jóvenes, solo el 8.43% valoró positivamente estos centros, lo que refuerza la idea de un entorno empobrecido en términos de herramientas para la convivencia y la resolución de conflictos.

A pesar de estas problemáticas, la mayoría de adolescentes y jóvenes considera que su colonia es un buen lugar para vivir. Sin embargo, los porcentajes de adolescentes y jóvenes que respondieron negativamente a esta pregunta son más altos en comparación con los adultos y adultos mayores: un 10.2% de los adolescentes y un 7.3% de los jóvenes, y aproximadamente el 24% de ellos, respectivamente, señaló que su colonia no es un buen lugar para vivir todo el tiempo. Esto sugiere que, aunque persiste un sentido de pertenencia, las experiencias cotidianas de conflictividad y exclusión comunitaria impactan profundamente la calidad de vida de la población más joven.

En cuanto a **seguridad personal**, la situación de adolescentes y jóvenes en Juárez es preocupante y debe ser atendida como una prioridad. El índice muestra un nivel significativo de vulnerabilidad entre los adolescentes, con un 59.2% en nivel medio y un 10.2% en nivel alto. Solo el 30.6% reporta baja vulnerabilidad, lo que significa que casi 7 de cada 10 adolescentes están expuestos a fenómenos de violencia que comprometen su integridad física, su bienestar y su desarrollo, y cuentan con acceso limitado a mecanismos de protección frente a estas amenazas.

Esta tendencia también se observa entre los jóvenes (20 a 29 años), aunque con ligeras variaciones: el 53% presenta un nivel medio de vulnerabilidad personal, y el 10.8% se encuentra en nivel alto, mientras que apenas el 34.9% reporta un nivel bajo. En conjunto, estos datos indican que más del 63% de los jóvenes también experimentan condiciones de inseguridad personal significativas, lo que subraya la persistencia del riesgo en esta etapa del ciclo vital.

Esta dimensión resulta especialmente crítica porque abarca experiencias como la violencia interpersonal, el acoso y la exposición a entornos inseguros, tanto en el espacio público como en la vida cotidiana. En este sentido, es particularmente preocupante que los adolescentes se vean expuestos a situaciones de violencia incluso en espacios clave para su desarrollo, como la escuela.

Según los datos del índice, un 14.28% de los y las adolescentes reportaron haber sido amenazados, agredidos o maltratados física o psicológicamente por personas con las que interactúan en su entorno escolar, y un 6% afirmó que estas situaciones ocurren con mucha frecuencia. Este porcentaje es más alto que el promedio general, lo que refuerza la necesidad de fortalecer las estrategias de protección integral en contextos educativos y de construir entornos más seguros, inclusivos y libres de violencia para adolescentes y jóvenes.

Otro dato que ilustra la sobreexposición de la población más joven a la violencia —y que resalta la importancia de integrar enfoques que aborden el trauma que esta genera— es que los adolescentes son el grupo con mayor proporción de personas afectadas directamente por la pérdida de un familiar debido a la violencia, con un 30.61% que ha vivido esta experiencia, frente a un 18.2% entre los jóvenes. Estos datos sugieren una experiencia generacional especialmente grave, profundamente marcada por la violencia.

La vivencia temprana de la pérdida de un ser querido puede dejar huellas profundas en el desarrollo emocional, social y político de los y las adolescentes, afectando su confianza en el entorno, su visión del futuro y su relación con las instituciones. Esto refuerza la idea de que la violencia no solo deja víctimas directas, sino que reconfigura los vínculos y las trayectorias de vida de quienes sobreviven—y, en este caso, de quienes apenas están comenzando a construirlas.

La exposición a otras formas de violencia también resulta alarmante. En el caso de la violencia sexual, el índice revela que en el último año, las adolescentes de la ciudad reportaron los porcentajes más altos de victimización por acoso sexual, con un 12.2% que afirmó haber sido víctima. Este dato da cuenta de un entorno hostil y violento para las adolescentes, particularmente en espacios públicos o de interacción cotidiana.

En el entorno digital, la exposición a mensajes violentos en redes sociales también es significativa. Si bien esta experiencia es común en todos los grupos etarios, afecta con mayor intensidad a los adolescentes, de los cuales un 12.24% declaró ver mensajes violentos con frecuencia y un 22.45% indicó que los ve “rara vez”. Esto los convierte en el grupo más expuesto de manera constante, lo cual es preocupante dada su etapa de desarrollo psicosocial y su alta presencia en plataformas digitales. Esta exposición puede contribuir a la normalización de la violencia, afectando su percepción de riesgo y sus relaciones sociales.

Además, adolescentes y jóvenes enfrentan un mayor riesgo de ser reclutados o involucrados en economías ilícitas, lo que incrementa aún más su exposición a situaciones de violencia. Aunque la mayoría de las personas encuestadas no reportó haber recibido ofrecimientos para participar en actividades ilegales durante el último año, los adolescentes fueron el grupo con mayor exposición, con un 6.12% que indicó haber recibido este tipo de propuesta, seguido por un 4% de los jóvenes.

Cabe destacar que es posible que estos porcentajes estén subestimados, ya que admitir haber recibido ofrecimientos de este tipo puede implicar temor, estigma o desconfianza hacia las instituciones. Aun así, los datos recabados son significativos y revelan un patrón preocupante, especialmente cuando se consideran en conjunto con otros factores estructurales de vulnerabilidad como la precariedad económica, la falta de oportunidades laborales, la deserción escolar y la escasa protección comunitaria. Estos elementos hacen que la adolescencia y la juventud temprana sean etapas de alta vulnerabilidad frente a las redes del crimen organizado.

Además, la distribución del riesgo no es homogénea en el territorio. En 2024, las zonas Surponiente y Suroriente fueron las de mayor riesgo para adolescentes, con un 13.3% y un 6.25%, respectivamente, que reportaron haber recibido ofrecimientos para participar en actividades ilícitas. En el caso de los jóvenes, la zona Norponiente destacó con una prevalencia cercana al 10% de personas que indicaron haber recibido este tipo de propuestas.

Un aspecto positivo es que a pesar de estos retos, la mayoría de los adolescentes (65.4%) y de los jóvenes (69.2%) percibió su hogar como un lugar seguro, aunque hay un grupo pequeño pero importante (1 de cada 10) que manifestó sentirse poco o nada seguro en este espacio, lo cual es preocupante dado que el hogar debería ser el lugar de mayor refugio para este grupo.

El índice también midió la exposición a factores que afectan la dignidad y el sentido de significancia social de adolescentes y jóvenes, elementos que inciden directamente en su **seguridad ontológica**. Esta dimensión es especialmente relevante para este grupo poblacional, ya que se encuentran en una etapa clave de construcción de identidad, búsqueda de pertenencia y afirmación de su valor en el mundo social. Cuando estas condiciones se ven deterioradas por experiencias de exclusión, discriminación o falta de reconocimiento, pueden afectar de manera profunda su autoestima, motivación y sentido de futuro.

En esta dimensión, el índice revela que más de la mitad de la población joven de la ciudad —65.3% de los adolescentes y 55.4% de los jóvenes— se encuentra en nivel medio de vulnerabilidad.

Más preocupante aún es que un 10.2% de adolescentes y un 9.6% de jóvenes presentan niveles altos de vulnerabilidad ontológica, lo que indica una afectación severa a su dignidad, valoración social y reconocimiento como sujetos de derechos.

Un dato que ilustra la afectación generalizada en la dimensión ontológica es que, ante las preguntas relacionadas con la exposición a amenazas a la dignidad —como si han sido objeto de estigmatización o menosprecio, discriminación o trato irrespetuoso por parte de funcionarios públicos y policías—, los adolescentes y jóvenes fueron los grupos poblacionales más frecuentemente expuestos a experiencias negativas.

En particular, un 22.4% de los adolescentes y un 13.5% de los jóvenes reportaron haberse sentido estigmatizados durante el último año. Además, un 16.3% de los adolescentes indicó haber sido víctima de discriminación o exclusión, y la mitad de ellos afirmó que esto ocurrió con mucha frecuencia. En comparación, solo un 6.1% de los adultos manifestó haber vivido experiencias similares, lo que resalta la brecha generacional en términos de reconocimiento y trato social.

Los jóvenes también reportaron el mayor porcentaje de experiencias de trato no respetuoso por parte de funcionarios públicos y policías, con un 26.8%, en comparación con otros grupos etarios. Este dato sugiere una relación conflictiva y cargada de desconfianza hacia las autoridades, así como percepciones sociales negativas que afectan su reconocimiento como sujetos de derechos.

Estas experiencias de estigmatización, exclusión y maltrato institucional pueden tener graves implicaciones psicológicas y emocionales, especialmente durante etapas clave del desarrollo en las que la autoimagen y la identidad están en construcción. Este tipo de vivencias debilitan la autoestima, deterioran la confianza en el entorno social e institucional, y pueden convertirse en una fuente de ansiedad social, depresión o retraimiento, ya que la necesidad de aceptación y reconocimiento es particularmente fuerte durante la adolescencia y la juventud.

Además, la exposición repetida al rechazo o al trato discriminatorio puede derivar en el desarrollo de mecanismos defensivos o conductas reactivas, que se manifiestan de forma diversa: algunos adolescentes pueden responder con aislamiento o retraimiento, mientras que otros pueden adoptar actitudes de rebeldía o agresividad como forma de autoprotección. Estas respuestas no solo reflejan sufrimiento emocional, sino que también pueden profundizar los conflictos con su entorno y reforzar patrones de exclusión social.

La **dimensión ambiental** aparece como una de las más críticas para la población joven, especialmente para los adolescentes. En esta dimensión, ambos grupos etarios enfrentan niveles muy altos de vulnerabilidad: más del 85% de los adolescentes y más del 80% de los jóvenes se encuentran en situación de vulnerabilidad media (59.2% y 61.4%, respectivamente), alta o extrema (26.5% y 24.1%). Estos datos indican que los entornos físicos en los que habitan no garantizan condiciones adecuadas de habitabilidad ni protección, lo que afecta de manera directa su bienestar físico, su salud y su calidad de vida cotidiana.

El índice muestra que todos los grupos poblacionales perciben las condiciones de infraestructura en sus colonias como regulares o malas, sin embargo, los adolescentes fueron el grupo más crítico en su evaluación de elementos como calles, andenes e iluminación. En efecto, el 32.65% de los adolescentes calificó la infraestructura como “muy mala” y el 47% como “regular”, lo que refleja una percepción generalizada de precariedad urbana.

La percepción de los más jóvenes sobre las condiciones de infraestructura varía significativamente por zona, siendo la Zona Suroriente y la Zona Surponiente las más críticas, con una mayoría de adolescentes describiendo condiciones muy malas o regulares. En contraste, la Zona Nororiente destaca por una alta prevalencia de respuestas “regulares”, lo que sugiere deficiencias persistentes, aunque menos extremas que las reportadas en otras zonas. Incluso en esta zona, el 50% de los adolescentes afirmó no tener acceso a espacios adecuados para realizar deporte y recrearse, lo que agrava las limitaciones en términos de bienestar, salud y desarrollo integral.

Estos datos subrayan que la importancia de desarrollar políticas de infraestructura comunitaria con enfoque territorial, que atiendan las desigualdades entre zonas y prioricen el acceso de adolescentes y jóvenes a espacios públicos seguros, dignos y de calidad para la recreación, el deporte y la convivencia.

Los elevados niveles de vulnerabilidad en las dimensiones personal, económica, ontológica, comunitaria y ambiental tienen un impacto directo en la salud física, mental y emocional de adolescentes y jóvenes, lo cual se refleja en un patrón inquietante de **inseguridad en salud**. Esta situación se evidencia, por ejemplo, en los altos niveles de estrés reportados por esta población. Según el índice, los jóvenes presentan la mayor prevalencia de estrés alto y muy alto con (47%) seguidos por los adultos mayores.

Esto ocurre a pesar de que una parte importante de los jóvenes evaluó positivamente su salud mental, con un 42.7% calificándola como “muy buena” y un 29.3% como “buena”. Sin embargo, esta autopercepción convive con exposición frecuente a factores de riesgo

para la salud, como la presencia de drogas en sus entornos cotidianos. En este sentido, el índice revela que los adolescentes son el grupo que más reconoce la presencia de venta de drogas en su colonia (24.5%), lo que revela una mayor exposición en espacios escolares y en su entorno inmediato. Esto representa un riesgo relevante, sobre todo considerando su etapa de desarrollo, vulnerabilidad emocional y contexto educativo.

La situación se agrava al observar el bajo acceso a servicios de salud mental. Los adolescentes y jóvenes fueron los grupos con menor acceso relativo, con un 57.1% y 45%, respectivamente, que declararon no tener acceso a servicio de salud mental. Esto es especialmente preocupante, ya que la adolescencia es una etapa de alta sensibilidad emocional, y en el caso de Ciudad Juárez, los procesos intensos de construcción de identidad de la juventud ocurren en medio de presión sociales, precariedad, y exposición a violencias, entre otros factores que aumentan la necesidad de atención oportuna.

Producto de esta combinación de factores, adolescentes y jóvenes presentan niveles similares de vulnerabilidad en salud, con cerca de la mitad de ambos grupos ubicados en nivel medio (49% adolescentes y 48.2% jóvenes), y una proporción importante en nivel bajo. No obstante, un 8.2% de los adolescentes y un 7.2% de los jóvenes se encuentran en niveles alto o extremo, lo que indica una situación crítica que demanda atención urgente y prioritaria.

En contraste con otras dimensiones, **la dimensión alimentaria y la dimensión tecnológica** aparecen como ámbitos relativamente más fortalecidos en términos de seguridad para la población más joven.

En cuanto a la **seguridad alimentaria**, el 69.4% de los adolescentes y el 60% de los jóvenes se encuentran en nivel bajo de vulnerabilidad, lo que indica una baja exposición a amenazas relacionadas con el acceso a la alimentación, así como la existencia de redes de apoyo familiar o cobertura de programas sociales. Sin embargo, persisten desafíos: un 26.5% de los adolescentes y un 30.1% de los jóvenes se sitúan en nivel medio, y un 4.1% y 8.4%, respectivamente, en nivel alto de vulnerabilidad alimentaria, lo que sugiere que la seguridad alimentaria no está plenamente garantizada para todos los sectores juveniles.

Es importante resaltar que los jóvenes el Norponiente presentan niveles más altos de vulnerabilidad en esta dimensión comparados con los de otras zonas. Esta es, por ejemplo, la única zona de la ciudad en donde existe población en extrema inseguridad alimentaria y que este grupo está compuesto exclusivamente por jóvenes (4.8%).

En cuanto a la **seguridad tecnológica**, el 63.3% de los adolescentes y el 53% de los jóvenes se encuentran en niveles bajos de vulnerabilidad, lo que refleja una alta conectividad y acceso a los beneficios de las tecnologías digitales entre los sectores más jóvenes.

No obstante, es importante destacar que una proporción significativa de esta población enfrenta vulnerabilidad alta en esta dimensión: el 20% de los adolescentes y el 15.7% de los jóvenes.

Esta vulnerabilidad se relaciona principalmente con la falta de información sobre el uso saludable y seguro de las tecnologías digitales, así como con la exposición a efectos adversos derivados del uso excesivo o desinformado de redes sociales, que puede impactar negativamente en la salud emocional, especialmente entre adolescentes. Además, algunos jóvenes están expuestos a contenidos nocivos sin contar con herramientas para filtrar o procesar dicha información.

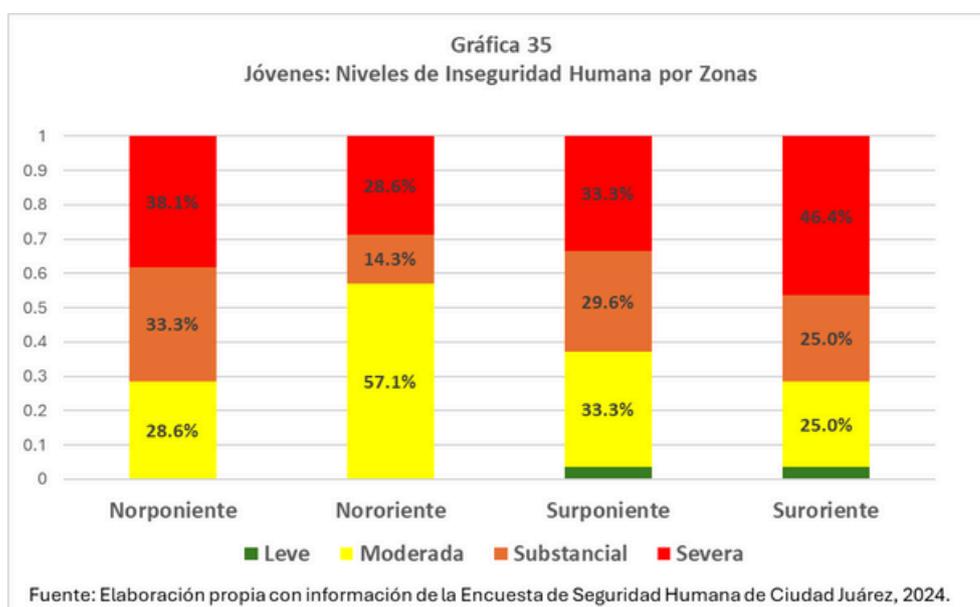
Esta situación resalta la importancia de reforzar la educación accesible sobre el uso adecuado y crítico de las tecnologías digitales, tanto para adolescentes como para padres, madres y educadores. Garantizar un entorno digital seguro, informado y saludable es fundamental para proteger el bienestar emocional y cognitivo de la población joven en un contexto de creciente digitalización.

En resumen, el perfil de vulnerabilidad de los adolescentes en Juárez revela una combinación de precariedad estructural, exclusión política y deterioro comunitario, que exige respuestas integrales. Urge reforzar la participación, la protección institucional y las oportunidades de desarrollo local, a la vez que se consolidan las fortalezas existentes como mecanismos de resiliencia.

Diferencias territoriales en la inseguridad humana de jóvenes

El índice de inseguridad humana revela que proporciones muy amplias de la población joven de Ciudad Juárez experimentan niveles elevados de inseguridad humana, resultado de la acumulación de vulneraciones en múltiples dimensiones, incluidas las dimensiones prioritarias (personal, económica, alimentaria y de salud). Sin embargo, la intensidad de esta inseguridad varía considerablemente entre las distintas zonas de la ciudad.

- El Suroriente presenta la situación más crítica: el 46.4% de los jóvenes se encuentra en el nivel de inseguridad severa, el porcentaje más alto entre todas las zonas. Esto indica que casi la mitad de los jóvenes de esta zona enfrenta afectaciones graves y simultáneas en su bienestar, desarrollo y derechos.
- El Norponiente también es motivo de seria preocupación: aunque tiene un 38.1% de jóvenes en inseguridad severa, al sumar el 33.3% en nivel substancial, se concluye que más del 70% de los jóvenes enfrenta condiciones de alta vulnerabilidad acumulada.
- En el Surponiente, el panorama es intermedio, con un 33.3% de jóvenes en inseguridad severa y casi otro tercio en nivel substancial. Esta distribución indica un nivel significativo de riesgo, aunque con mayor diversidad de experiencias que en las zonas más críticas.
- Por último, en el Nororiente hay una concentración mayoritaria en el nivel moderado (57.1%), y un 28.6% en severa, lo que sugiere una situación menos crítica en comparación con otras zonas, aunque sigue siendo importante mejorar los sistemas de protección para jóvenes y adolescentes en la zona.



Reflexiones sobre la situación de adolescentes y jóvenes

El índice revela que los y las adolescentes y jóvenes en Juárez no solo enfrentan altos niveles de vulnerabilidad en varias dimensiones, sino que muchas veces se sienten marginados y excluidos de los procesos sociales y el desarrollo de la ciudad. Esta vivencia no es solo una expresión de malestar individual, sino una realidad estructural que genera efectos sociales y comunitarios amplios: desde el aislamiento y la deserción escolar, hasta la vinculación con dinámicas de riesgo. En otras palabras, se trata de una generación que, además de sentirse invisibilizada, carga con las consecuencias emocionales, sociales y materiales de una inseguridad humana persistente y multidimensional.

Las políticas juveniles, por tanto, no pueden limitarse a programas de prevención secundaria o terciaria. Es indispensable reconocer a adolescentes y jóvenes como sujetos plenos de derechos, cuyo bienestar no debe definirse únicamente en función del control del riesgo, sino en términos de protección integral, justicia, oportunidades y dignidad.

Inclusión y participación juvenil: Los datos muestran que adolescentes y jóvenes continúan al margen de los procesos comunitarios y de toma de decisiones. En particular, los adolescentes son el grupo más expuesto a experiencias de discriminación o exclusión severa o recurrente. Esta falta de reconocimiento y participación limita su desarrollo emocional, debilita su vínculo con el entorno y puede alimentar dinámicas de desconexión social o incluso de confrontación con las normas comunitarias. Para transformar esta situación se recomienda:

- **Fortalecer la participación juvenil:**
 - Crear espacios seguros y accesibles para su expresión y organización y fortalecer las organizaciones de la sociedad civil que fomentan la participación ciudadana y el empoderamiento juvenil.
 - Fomentar prácticas pedagógicas de ciudadanía en escuelas, barrios y centros comunitarios, por ejemplo, escuelas y semilleros de participación juvenil.
 - Promover la inclusión efectiva de sus voces en la planificación local y en las políticas públicas y fortalecer mecanismos de participación juvenil existentes.
- **Prevenir la exclusión y fortalecer el tejido comunitario:**
 - Implementar políticas de inclusión social con enfoque territorial y generacional que permitan transformar estereotipos sobre la juventud y crear vínculos intergeneracionales a nivel comunitario.

- Invertir en redes de apoyo, espacios comunitarios y mecanismos para la resolución pacífica de conflictos.

- **Detectar y atender tempranamente la exclusión:**
 - Establecer sistemas de alerta y acompañamiento para adolescentes en riesgo de aislamiento o rechazo.
 - Prevenir impactos en su salud mental, desarrollo escolar o comportamiento social.

Educación, empleo y trayectorias de vida: La desigualdad educativa y la precariedad económica están moldeando de forma prematura e injusta las trayectorias de vida de la juventud. Muchos adolescentes no solo han abandonado el sistema educativo, sino que enfrentan condiciones laborales precarias o sin protección. Esta situación los hace más vulnerables a dinámicas de explotación o reclutamiento en economías ilegales. Se recomienda:

- **Garantizar el acceso a educación integral y pertinente:**
 - Diseñar políticas sensibles al contexto que favorezcan la permanencia y el reingreso educativo.
 - Incluir el bienestar, la salud mental y la conciliación entre estudio y trabajo como ejes educativos clave.
- **Reforzar estrategias de protección integral en entornos educativos:**
 - Fortalecer programas que promuevan la inclusión, el respeto y la no-violencia en espacios escolares, para prevenir el acoso escolar, la violencia de género y fortalecer la convivencia escolar.
- **Desarrollar una política de empleo juvenil con enfoque de derechos:**
 - Promover empleos dignos, estables y protegidos para los jóvenes.
 - Ampliar la oferta de alternativas de empleo seguras y formativas para adolescentes con altos niveles de inseguridad humana y en riesgo de deserción.

Violencia, trauma y recuperación psicosocial: El impacto de la violencia en la vida de adolescentes y jóvenes es profundo y duradero. Muchos han perdido a familiares cercanos, otros viven expuestos a acoso, amenazas o entornos violentos. Esta realidad afecta su desarrollo emocional, debilita su confianza en el futuro y puede dejar heridas invisibles que condicionan su relación con la comunidad y con las instituciones.

- **Incorporar enfoques basados en trauma en programas juveniles y escolares:**

- Diseñar intervenciones que promuevan la empatía, la contención emocional y la reparación del daño.
 - Integrar estos enfoques que permiten abordar el trauma individual y colectivo a programas de educación, salud mental, participación comunitaria y prevención de la violencia.
- **Ampliar el acceso a salud mental y atención psicosocial:**
 - Implementar programas diferenciados por etapa del ciclo vital, con énfasis en el acompañamiento temprano.
 - Fortalecer la cobertura comunitaria, gratuita y oportuna de servicios de salud mental.

Seguridad y bienestar en entornos físicos y digitales:

La calidad del entorno donde viven, se mueven y se relacionan los adolescentes y jóvenes también condiciona su bienestar. Muchos habitan espacios urbanos precarios, inseguros o sin acceso a servicios básicos. Además, su exposición a contenidos violentos en redes sociales es sostenida y carecen, en muchos casos, de herramientas para navegar de forma segura en estos entornos digitales. Para abordar esta realidad se recomienda:

- **Mejorar el entorno físico y urbano con enfoque territorial participativo:**
 - Generar procesos de regeneración urbana localizados que permitan la participación

- ciudadana y la inclusión de la perspectiva de los y las adolescentes y jóvenes.
- Asegurar acceso equitativo a espacios públicos, deportivos y de recreación.

- **Educar en ciudadanía digital crítica:**

- Promover alfabetización digital para el uso seguro de tecnologías incluyendo adolescentes, jóvenes, padres, madres, cuidadores y educadores.
- Diseñar campañas de comunicación efectivas con jóvenes que concienticen sobre los efectos adversos de la sobreexposición a redes sociales, especialmente entre adolescentes.

Gobernanza con enfoque juvenil: Para transformar estructuralmente la relación entre jóvenes y ciudad, es indispensable institucionalizar su presencia en el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Integrar una mirada de seguridad humana en los programas dirigidos a esta población requiere compromiso intersectorial, continuidad política y participación activa. Se recomienda:

- **Monitorear e integrar el enfoque juvenil en la política pública desde una perspectiva de seguridad humana:**

- Establecer mecanismos permanentes de seguimiento, evaluación y participación de juventudes en la toma de decisiones.



Foto: Pavel Vallejo/ Ciudad Juárez



Foto: Israel Torres / Pexels

5.3 Seguridad Humana de Adultos Mayores

Seguridad Humana de Adultos Mayores

¿Cómo está la seguridad humana de los adultos mayores en Ciudad Juárez?

La edad influye de manera determinante en cómo se experimenta la inseguridad humana. En Ciudad Juárez, las personas adultas mayores representan uno de los grupos más afectados, cuyas condiciones críticas suelen pasar desapercibidas en las conversaciones tradicionales sobre seguridad. Su situación demanda respuestas más urgentes y especializadas por parte de las políticas públicas.

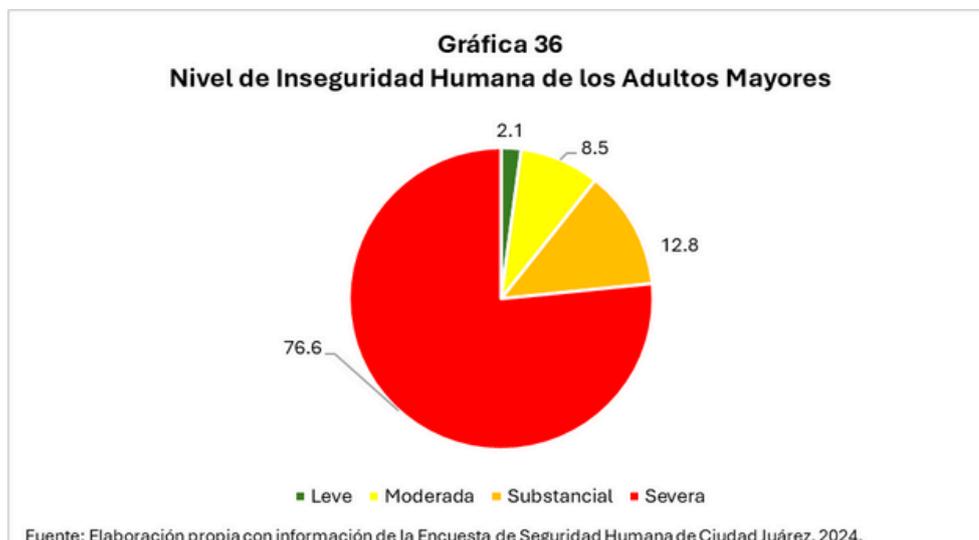
En esta sección se presenta el nivel de inseguridad humana que experimentan los adultos mayores en Ciudad Juárez, clasificado en cuatro niveles: Leve, Moderada, Sustancial y Severa. Los datos evidencian una situación crítica en materia de seguridad humana para este grupo poblacional: más de tres cuartas partes (76.6%) enfrenta un nivel severo de inseguridad, lo que refleja condiciones extremas que amenazan el bienestar y derechos fundamentales de las personas de 60 y más años.

Si a esta categoría se le suma el 12.8% con inseguridad sustancial, significa que cerca del 90% de los adultos mayores experimenta vulnerabilidades graves o muy graves en las nueve dimensiones consideradas en el presente análisis, entre las que se encuentran la seguridad personal, económica o alimentaria, por mencionar algunas.

Por otro lado, el 8.5% enfrenta un nivel moderado de inseguridad que, si bien no alcanza la gravedad de los casos anteriores, sigue representando riesgos considerables. Solo un 2.1% de los adultos mayores se encuentra en un nivel leve. Estos datos sugieren que la inseguridad humana es una condición generalizada en este segmento poblacional, con consecuencias profundas para su calidad de vida.

Los datos sobre exposición a amenazas permiten identificar que la severidad de la condición de inseguridad humana que experimentan los adultos mayores se explica por una convergencia crítica de vulnerabilidades económicas, físicas y sociales. Por ejemplo, en materia financiera, la encuesta arroja que los adultos mayores experimentan una condición precaria donde más del 65% enfrenta ingresos insuficientes (51.1% "a veces" cubre sus necesidades básicas y 14.9% "nunca" logra cubrirlas), lo que lleva al 42.6% a recurrir a préstamos de dinero informales, perpetuando ciclos de endeudamiento y estrés.

Esta situación se ve agravada con el hecho de que el 55.3% de los adultos mayores padece enfermedades crónicas, las cuales exigen gastos médicos en contextos de recursos limitados. En cuanto a la salud mental, el 23.4% reporta estrés extremo y el 21.3% dificultades para gestionar emociones, reflejando el impacto psicológico de la supervivencia en entornos difíciles como los que se viven en esta frontera, donde



el 29.8% vive en zonas con riesgo de desastre. Estos factores de pobreza, salud deteriorada, y entornos peligrosos, no solo explican la severidad de la inseguridad, sino que revelan un abandono institucional que exige intervenciones urgentes y multidimensionales.

El acceso limitado a medios o mecanismos de protección agrava la vulnerabilidad de los adultos mayores en Ciudad Juárez, pues a pesar de que el 68% de ellos cuenta con redes de apoyo de familiares o amigos, éstas no logran compensar las carencias institucionales. Los datos de la encuesta son claros en esta tendencia, ya que el 44.7% de los adultos mayores no recibió ayudas económicas en el último año a pesar de necesitarlas y el 38.3% las obtuvo, pero en montos insuficientes, lo que refleja una red de apoyo social y gubernamental precaria. Las malas condiciones del espacio donde viven se suman al problema, pues el 23.4% califica sus condiciones de vivienda como regulares, lo que sugiere entornos físicos inadecuados.

En el ámbito de la salud, el 23.4% de los adultos mayores no tuvo acceso a atención médica, y un 63% no pudo acceder a servicios de atención psicológica, a pesar de los altos niveles de estrés y dificultades emocionales previamente identificados. La brecha digital es especialmente visible entre los adultos mayores, ya que el 78.7% de ellos no ha recibido orientación sobre el uso seguro de redes sociales e internet; esto los deja al margen de herramientas digitales que podrían mejorar su acceso a servicios y redes de apoyo, exacerbando el aislamiento social. Esta combinación de factores —falta de recursos económicos, apoyo institucional limitado, acceso deficiente a la salud y exclusión digital— no solo deja a los adultos mayores expuestos a las amenazas, sino que también limita su capacidad para protegerse, perpetuando un ciclo de inseguridad y dependencia que requiere intervenciones integrales.

¿Qué tan vulnerables son los adultos mayores en las nueve dimensiones y por qué?

Los adultos mayores en Juárez enfrentan graves vulnerabilidades en tres dimensiones clave, en **seguridad económica, seguridad política y en salud**. En el rubro económico, el 48.9% presenta vulnerabilidad alta y 40.4% nivel medio, reflejando precariedad financiera y dependencia en la vejez. Las evidencias que ilustran esta tendencia las encontramos al analizar los indicadores que componen la dimensión, de forma concreta el 44.7% de los adultos mayores han vivido el último año con ingresos limitados al depender de sus jubilaciones en un contexto económico limitado, mientras que 21.3% es responsable del hogar, lo que restringe su autonomía económica. Así mismo, como se

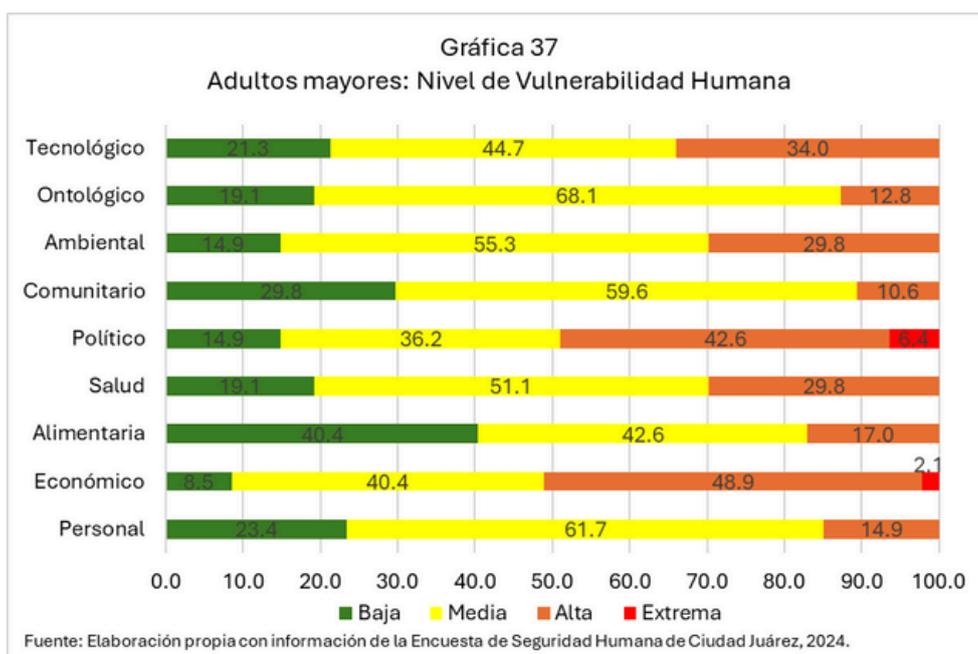
mencionó con anterioridad, más del 50% reporta ingresos insuficientes (51.1% a veces le alcanza para cubrir sus necesidades diarias y 14.9% nunca le alcanza) y 48.9% no accede a créditos bancarios o cooperativos, situación que lleva a cuatro de cada diez adultos mayores (42.6%) a recurrir a préstamos informales, limitando su capacidad para enfrentar emergencias. Este panorama revela un sistema de protección social insuficiente y falta de acceso a recursos financieros seguros, perpetuando la inseguridad económica de los adultos mayores.

La **seguridad política** también destaca por su alto nivel de vulnerabilidad entre los adultos mayores, con un 42.6% en el rango de alta vulnerabilidad y un 36.2% en nivel medio. Los indicadores concretos de esta dimensión muestran que el 38.3% de los adultos mayores siente que no puede expresar libremente sus opiniones sin temor a represalias, y un 72.3% señala no haber tenido la posibilidad de participar en asuntos públicos que afectan su vida o su comunidad en el último año. Estos datos evidencian un limitado ejercicio de sus derechos civiles y políticos, lo cual contribuye de manera importante a la inseguridad humana en este grupo poblacional.

En materia de **seguridad en salud**, se observa que el 51.1% de los adultos mayores se encuentra en un nivel medio de vulnerabilidad y el 29.8% en un nivel alto. Así mismo, el 55.3% padece enfermedades crónicas, el 36.2% no recibe atención médica oportuna y el 63% carece de acceso a servicios de salud mental. Esta situación se ve aún más agravada por barreras geográficas, ya que el 31.9% reporta que los hospitales o clínicas de atención médica están muy lejos de su domicilio, lo que limita su derecho a una salud digna.

La **seguridad tecnológica y ambiental** representan riesgos de nivel medio, pero igualmente preocupantes. En el caso de la seguridad tecnológica, el 44.7% de los adultos mayores se encuentra en un nivel medio de vulnerabilidad y el 34.0% en un nivel alto. En cuanto a la seguridad ambiental, se observa que el 55.3% de los adultos mayores presenta un nivel medio de vulnerabilidad, mientras que el 29.8% enfrenta un nivel alto. Esto refleja el impacto de problemas como la contaminación, la infraestructura urbana deficiente y la exposición a riesgos naturales en su calidad de vida alto.

Finalmente, la **seguridad personal, alimentaria, comunitaria y ontológica** presentan vulnerabilidades menos extremas, pero igualmente relevantes. La seguridad personal registra un 61.7% en nivel medio, lo que indica riesgos moderados en cuanto a la autonomía y el control sobre la propia vida. En cuanto a la seguridad alimentaria el 40.4% se ubica en un nivel bajo de vulnerabilidad y un 42.6% se encuentra en nivel



medio. A su vez, la seguridad comunitaria, con un 59.6% en nivel medio, sugiere la existencia de redes de apoyo relativamente estables, mientras que la seguridad ontológica, con un 68.1% también en nivel medio, refleja preocupaciones existenciales moderadas relacionadas con el sentido de vida y el sentido de pertenencia. Aunque estas dimensiones no presentan niveles críticos de vulnerabilidad, sí requieren atención para asegurar un envejecimiento digno, integral y con calidad de vida.

¿Dónde están los adultos mayores que experimentan mayor vulnerabilidad?

Los niveles de vulnerabilidad que enfrentan las personas adultas mayores están estrechamente vinculados al factor geográfico. Este hallazgo es de gran relevancia para comprender la distribución diferenciada de las afectaciones en cada dimensión, lo cual permite orientar la búsqueda de soluciones mediante políticas públicas más efectivas. Identificar estas variaciones territoriales posibilita una asignación estratégica de recursos hacia las zonas más críticas y el diseño de intervenciones adaptadas a las necesidades específicas de cada contexto local.

En el norponiente de Juárez (véase gráfica 38), se encontró que las dimensiones con mayor vulnerabilidad para los adultos mayores son la económica (46.7% media y 40% alta), política (53.3% media, 20% alta, y 13.3% extrema), y las dimensiones ambiental y tecnológica con los mismos porcentajes (53.3% media y 33.3% alta).

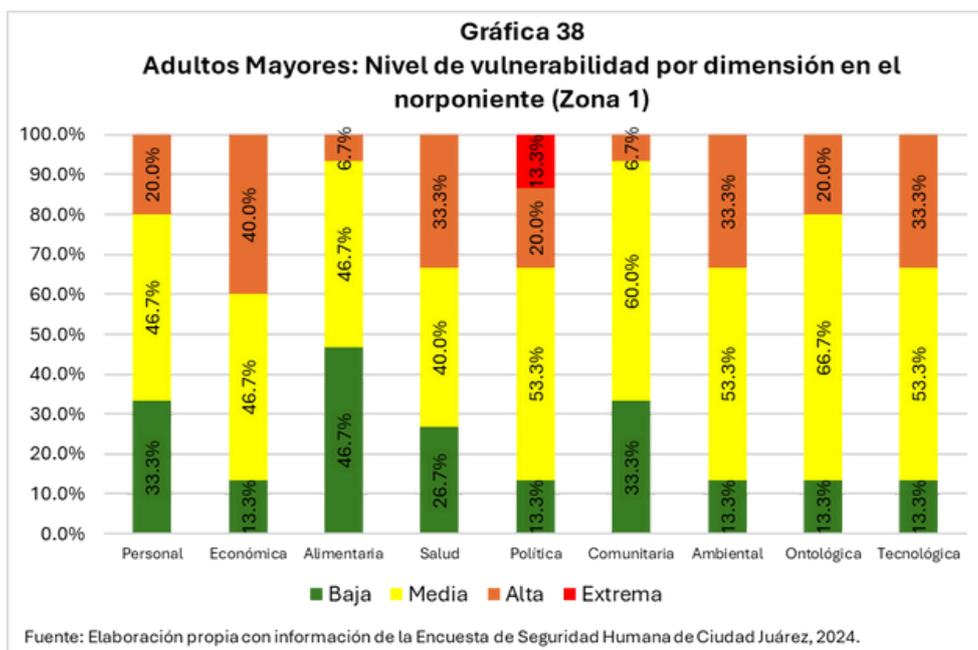
El análisis de los indicadores específicos de cada dimensión permite una mejor comprensión de la realidad de las colonias que pertenecen a esta zona de

la ciudad, por ejemplo, los resultados reflejan una situación crítica en la seguridad económica de los adultos mayores, donde solo el 40% cuenta con jubilación, mientras que el 53% enfrenta insuficiencia de ingresos (33% a veces y 20% nunca les alcanza), agravado por el miedo a perder recursos (33%) y la necesidad de recurrir a préstamos informales (20%). Así mismo, aunque el 26.7% recibe ayudas, son insuficientes, y el 60% no puede ahorrar, evidenciando precariedad estructural.

En cuanto a la seguridad política, el 40% de los adultos mayores percibe censura al expresarse y el 86.7% sufre exclusión de la participación pública, señalando marginación en decisiones comunitarias. La seguridad ambiental también es frágil, pues el 26.7% considera su entorno inseguro y el 66.7% identifica riesgos de desastres, lo que demanda medidas e intervenciones urgentes.

Finalmente, en seguridad tecnológica, el 86.7% de este grupo etario carece de orientación sobre el uso seguro de internet, dejándolos expuestos a fraudes o desinformación. En resumen, la zona nororiente se caracteriza por una precariedad económica marcada, sumada a carencias política y riesgos ambientales y tecnológicos. La combinación de estos factores exige políticas públicas que aborden el acceso a recursos básicos, inclusión política, protección ambiental y alfabetización digital.

Por otra parte, los adultos mayores del nororiente de Juárez muestran niveles de vulnerabilidad más bajos, comparados con otras áreas geográficas de la ciudad; esta situación es visible en las dimensiones ontológica (66.7% en nivel bajo de vulnerabilidad) y en la dimensión alimentaria (33.3% en nivel bajo y 66.7% en medio), reflejando una sólida percepción de identidad y



propósito, así como una relativa estabilidad en el acceso a alimentos. Asimismo, en la dimensión personal (33.3% en nivel bajo y 66.7% en medio) se observa cierta capacidad de adaptación, aunque con desafíos moderados. Estas áreas contrastan con las vulnerabilidades críticas que experimentan los adultos mayores en lo económico, tecnológico y ambiental, cada una con un 66.7% de los casos en nivel alto, agravándose la situación de lo ambiental con 33.3% de los adultos mayores que se encuentran en vulnerabilidad extrema, lo que significa una marcada precariedad material, exclusión digital y exposición a condiciones físicas peligrosas o insalubres.

En lo que se refiere a la seguridad económica, el 100% de los adultos mayores del nororiente se identifican como responsables del hogar y enfrentan fluctuaciones en sus ingresos que no siempre cubren sus necesidades básicas. Esta situación se agrava por el temor a perder sus recursos (66.7%) y la imposibilidad de acceder a créditos bancarios (66%). Así mismo, aunque dos terceras partes (66.7%) no han recurrido a préstamos informales, el mismo porcentaje no recibió ayudas económicas a pesar de necesitarlas.

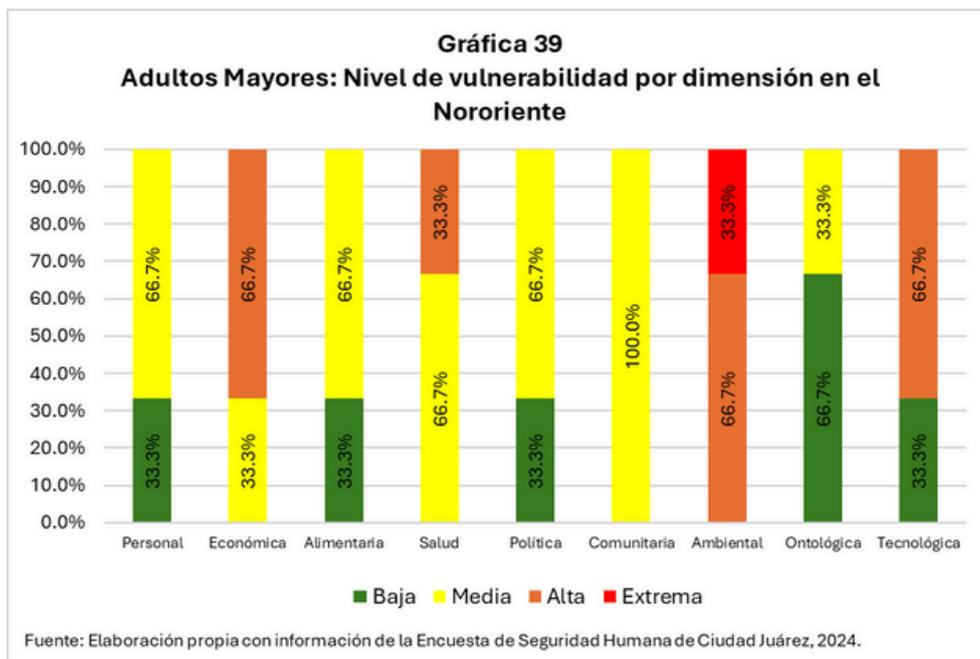
Particularmente preocupante es que ninguno de los encuestados tiene capacidad de ahorro con sus ingresos actuales, reflejando una precariedad financiera generalizada que limita severamente su autonomía económica y calidad de vida. En cuanto a la seguridad ambiental, el 66% de los adultos mayores percibe su entorno como medianamente saludable y limpio, y el 100% identifica su zona como vulnerable a desastres, lo que subraya la urgencia de medidas de prevención y mitigación. Finalmente, en seguridad tecnológica, el 66.7% no ha recibido información sobre el uso seguro de internet y redes sociales, lo que los expone a riesgos como fraudes o desinformación. Estos

hallazgos demandan intervenciones integrales que aborden la inseguridad económica, mejoren las condiciones ambientales y promuevan la alfabetización digital para la población adulta mayor de esta zona.

El análisis de la vulnerabilidad en adultos mayores del sur poniente de Juárez expone situaciones críticas en algunas dimensiones, por ejemplo, la vulnerabilidad política presenta el nivel más severo (71.4% en nivel alto), seguida de la económica (57.1% alto) y tecnológica (50% alto), identificando que son áreas o dimensiones de atención prioritaria. La dimensión de la salud muestra un 28.6% en alta vulnerabilidad, aunque predomina el nivel medio (64.3%), mientras que en la ambiental predominan los niveles medio y alto (35.7% cada uno). En contraste, la dimensión comunitaria presenta principalmente vulnerabilidad media (71.4%), al igual que la ontológica (64.3% medio), sugiriendo redes de apoyo relativo.

La alimentación muestra mayor estabilidad (35.7% baja y 42.9% media), al igual que la dimensión personal (50% medio y 28.6% baja). A continuación, revisaremos con mayor detalle las dimensiones que marcan severidad y demandan atención prioritaria por aparente carencia institucional (política), financiera (económica) y digital (tecnológica).

En materia de seguridad económica, podemos apreciar un escenario de precariedad en términos de ingresos para garantizar una calidad de vida aceptable en esta etapa del ciclo vital. La evidencia muestra que, aunque el 71.4% de los adultos mayores están jubilados, el 57.1% señala que sus ingresos solo les alcanzan ocasionalmente (a veces) para cubrir sus necesidades diarias, y un 21.4% ha sentido temor de perder esos ingresos. La precariedad se agrava al observar que el 50% ha tenido que recurrir a préstamos informales para



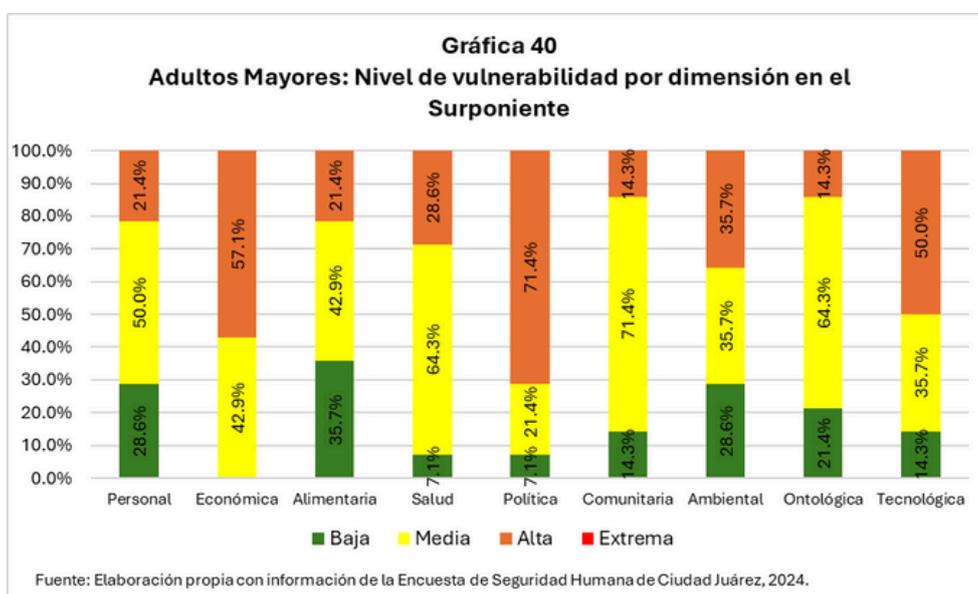
cubrir gastos básicos, mientras que el 42.9% recibió ayudas económicas o subsidios del gobierno que resultaron insuficientes y el 35.7% no recibió ningún apoyo gubernamental pese a necesitarlo. Además, el 78.6% no tiene posibilidad de ahorro con sus ingresos actuales y la mitad no puede acceder a préstamos bancarios.

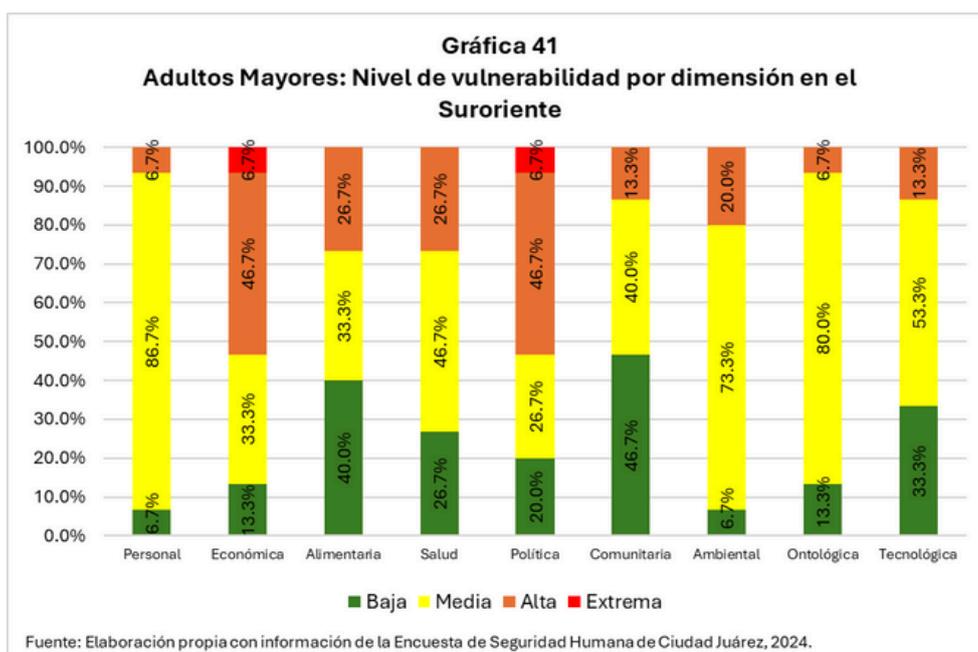
En cuanto a la seguridad política, el 42.9% de esta población no se siente en libertad de expresar sus opiniones sin temor a represalias, y el 78.6% no ha tenido oportunidad de participar en decisiones públicas que afectan su comunidad, lo cual refleja un alto nivel de marginación institucional.

Finalmente, en la dimensión tecnológica, el 85.7% de los adultos mayores del sur poniente no ha recibido información sobre el uso saludable y seguro de internet y redes sociales, contrastando con el alto nivel de conectividad (71.4%) que presentan los adultos

mayores en esta zona, lo que sugiere una exclusión digital significativa que limita su acceso a información, servicios y formas emergentes de participación y les expone a mayores riesgos de fraude cibernético. Estos datos ponen de relieve un panorama de triple vulnerabilidad estructural, para la población adulta mayor, donde la inestabilidad económica se combina con marginación política y desprotección tecnológica, requiriendo intervenciones urgentes e integrales que aborden simultáneamente el acceso a recursos, la inclusión ciudadana y la alfabetización digital.

En cuanto a la situación de seguridad humana de los adultos mayores en los hogares del sur oriente (Zona 4) de Juárez, los datos apuntan a mayor vulnerabilidad en las dimensiones económica (46.7% en vulnerabilidad alta y un 6.7% en extrema) y política (46.7% en nivel alto y 26.7% en medio), con relativa estabilidad en aspectos alimentarios y comunitarios, aunque con presencia significativa de vulnerabilidad





media en la mayoría de las dimensiones. A continuación, se analiza con mayor detalle las dos dimensiones que revelan una situación precaria para este grupo poblacional.

En términos de seguridad económica, los datos arrojan que solo un tercio de las personas mayores están jubiladas, mientras que más de una cuarta parte asume la responsabilidad del hogar, lo que agrava su situación económica. Más de la mitad (53.3%) declara que sus ingresos a veces no les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, y un preocupante 20% afirma que nunca le alcanza, lo que refleja una situación de alta precariedad por ingresos. A esto se suma que el 53.3% ha sentido temor de perder sus ingresos, lo cual incrementa su inestabilidad emocional y financiera. Esta situación ha llevado al 46.7% de los adultos mayores a recurrir a préstamos informales para cubrir necesidades básicas, evidenciando la falta de acceso a mecanismos formales de apoyo. Si bien un 46.7% recibió subsidios o ayudas económicas, estas fueron insuficientes; el panorama precario de los adultos mayores se agrava ante la imposibilidad de que seis de cada diez (60%) ahorren con los ingresos actuales que percibe y con el 46.7% que no puede acceder a préstamos bancarios, lo que limita sus capacidades de resiliencia financiera.

En el ámbito político, el 40% de los adultos mayores de esta zona de la ciudad se siente limitado para expresar libremente sus opiniones por temor a represalias, mientras que el 60% manifiesta no haber tenido oportunidad de participar en decisiones públicas que afectan su vida o comunidad. Esta exclusión política no solo merma su capacidad de incidencia social, sino que perpetúa su invisibilización en los procesos

comunitarios que determinan el acceso a derechos y mejoras en sus condiciones de vida. La conjunción de estos factores configura un circuito de vulnerabilidad estructural, donde la precariedad económica y la marginación política se retroalimentan, generando una doble barrera que compromete tanto su autonomía inmediata como sus perspectivas de bienestar a mediano y largo plazo. Este entramado de desventajas sistémicas exige respuestas institucionales eficaces e integrales que aborden simultáneamente la inclusión económica y la participación ciudadana de este grupo vulnerable.

Reflexiones sobre la situación de los adultos mayores

Los datos del Índice Glocal de Seguridad Humana son contundentes: más del 76% de las personas adultas mayores en Ciudad Juárez enfrenta inseguridad severa, y solo un 2.1% se encuentra en condiciones de inseguridad leve. Esta situación revela una afectación estructural y persistente que compromete el ejercicio de derechos fundamentales, así como la autonomía, la dignidad y la calidad de vida en la vejez.

- **Un grupo altamente vulnerable y prioritario:** Los indicadores de seguridad humana examinados, junto a los niveles de vulnerabilidad de las nueve dimensiones, reflejaron condiciones desfavorables que ponen en peligro la satisfacción de necesidades prioritarias (salud, económica, alimentaria) y otras que son significativas para vivir con dignidad, calidad de vida, inclusión, y con felicidad en esta etapa del ciclo vital.

- **El reto del envejecimiento demográfico:** El contexto actual se agudizará en los próximos años con el crecimiento sostenido de la población adulta mayor como resultado del aumento en la esperanza de vida y la reducción de la fecundidad. Este cambio demanda respuestas estructurales para fortalecer los sistemas de salud, repensar los esquemas de pensiones y generar condiciones dignas para envejecer con seguridad, autonomía y bienestar.
- **Una política pública con enfoque de ciclo vital y derechos:** Los tres niveles de gobierno deben diseñar e implementar políticas integrales que atiendan las múltiples dimensiones de la seguridad humana en esta etapa. Esto implica intervenir desde la planificación y la asignación presupuestaria hasta la evaluación participativa de resultados, con enfoque de derechos humanos y perspectiva gerontológica.
- **Seguridad humana y calidad de vida como ejes centrales:** Atender a las personas mayores requiere ir más allá de los umbrales etarios. Es necesario promover una vida digna basada en: decisiones autónomas, redes de apoyo formales e informales, entornos adecuados y seguros, acceso oportuno a servicios de salud, reconocimiento institucional, y protección ante el maltrato o el abandono. La calidad de vida debe medirse no solo por la ausencia de carencias, sino por la posibilidad de alcanzar metas personales, vivir con satisfacción y ejercer plenamente los derechos ciudadanos.



6. Conclusiones y Recomendaciones

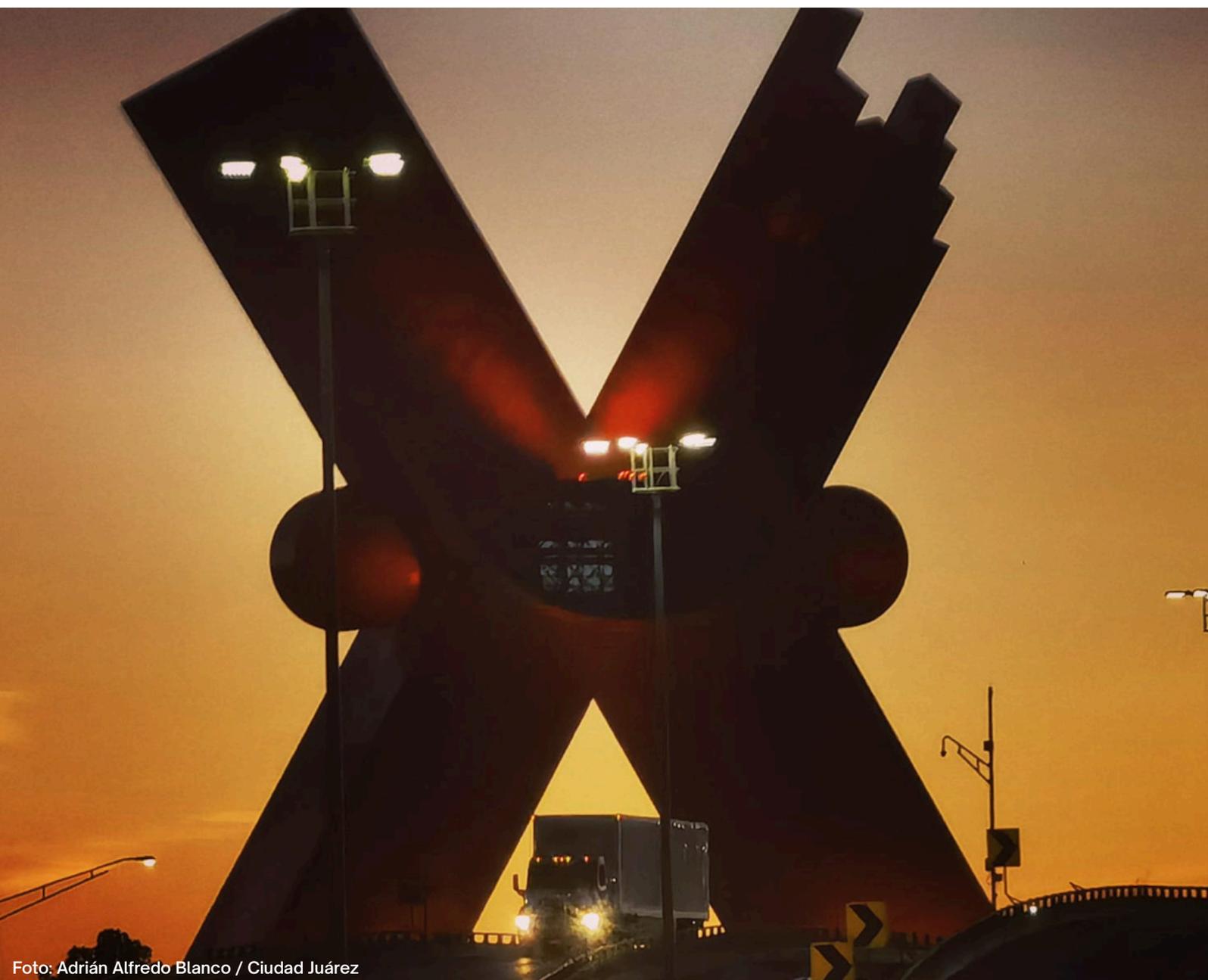


Foto: Adrián Alfredo Blanco / Ciudad Juárez

Conclusiones y Recomendaciones

Abordar la inseguridad desde la raíz: hacia estrategias de seguridad humana multidimensional

Los datos recopilados a través del Índice Glocal de Seguridad Humana en Ciudad Juárez revelan que la inseguridad no es un fenómeno aislado ni meramente delictivo. Se trata de una condición estructural, multidimensional y extendida que atraviesa múltiples aspectos de la vida cotidiana y limita de forma persistente el ejercicio de los derechos, el bienestar y las oportunidades de futuro para amplios sectores de la población.

La inseguridad humana, tal como lo muestra este índice, es un fenómeno sistémico, acumulativo e interconectado. No se trata de inseguridades aisladas, sino de un entramado de amenazas que interactúan y se refuerzan mutuamente, generando condiciones persistentes de alta vulnerabilidad. En otras palabras, lo que enfrentan muchas personas en Juárez son verdaderos sistemas de inseguridad humana: un conjunto de factores, actores y procesos — económicos, ontológicos, comunitarios, ambientales, políticos y de salud— que, en su interacción, producen amenazas entrelazadas y sostenidas para la vida, los medios de sustento y la dignidad humana.

El análisis territorial muestra que la zona de residencia condiciona profundamente el bienestar. Áreas como el Norponiente, Surponiente y Suroriente concentran los niveles más altos de inseguridad severa, lo que confirma que el territorio no solo estructura la exposición a violencias, sino también el acceso a derechos, servicios y oportunidades.

Los grupos históricamente marginados —mujeres, personas adultas mayores, adolescentes y jóvenes— enfrentan los niveles más altos de vulnerabilidad en todas las dimensiones de la seguridad humana, lo que refuerza formas acumulativas de exclusión económica, institucional y simbólica. Las personas adultas mayores viven una inseguridad invisible pero extrema. Su situación crítica suele pasar desapercibida en las narrativas tradicionales sobre seguridad, por lo que es indispensable implementar intervenciones diferenciadas, por grupo poblacional y por territorio, que atiendan sus necesidades específicas y reconozcan su agencia.

En el caso de las juventudes, los hallazgos indican una desconexión crítica del entramado institucional y comunitario. Jóvenes y adolescentes reportan baja participación, exposición frecuente a la violencia, estigmatización y visiones pesimistas sobre el futuro, especialmente en relación con el mercado laboral. Esta acumulación de exclusiones configura trayectorias de vida precarias desde etapas tempranas y requiere estrategias específicas de inclusión, protección y reconocimiento.

Un dato inquietante es la fractura profunda entre ciudadanía e instituciones públicas. La baja confianza, la escasa participación en decisiones colectivas y la percepción de ineficacia institucional revelan un vínculo deteriorado que limita la posibilidad de construir respuestas colectivas sólidas. En particular, la seguridad política concentra altos niveles de vulnerabilidad, marcados por la desconfianza en las autoridades, la falta de representación y la debilidad del tejido cívico.

La seguridad ambiental, a menudo entendida únicamente en términos materiales o espaciales, emerge como una dimensión estratégica y catalizadora de riesgos en otras dimensiones. Vivir en entornos deteriorados no solo afecta la salud o la movilidad, sino que agrava la inseguridad personal, comunitaria y ontológica. Por ello, mejorar las condiciones del entorno urbano debe ser parte esencial de cualquier estrategia de seguridad humana.

A nivel económico, el índice revela la necesidad de mejorar los factores de protección institucional, laboral y social que garanticen seguridad económica a mediano y largo plazo. Las personas no solo enfrentan ingresos bajos o empleos precarios, sino que lo hacen sin redes de respaldo adecuadas, sin acceso pleno a servicios de cuidado, sin mecanismos de ahorro ni protección ante crisis.

Una de las dimensiones más críticas es la seguridad ontológica, entendida como el derecho a ser reconocido, respetado y valorado como sujeto con dignidad. Dos de cada tres personas en Ciudad Juárez experimentan algún grado de inseguridad ontológica, con un 9% en niveles severos. Esta crisis silenciosa de reconocimiento se expresa en experiencias de discriminación, maltrato institucional, exclusión social y desvalorización simbólica, y tiene consecuencias profundas sobre la autoestima colectiva, la participación ciudadana y la confianza institucional.

Asimismo, la inseguridad en salud afecta a todos los grupos sociales, pero es especialmente alarmante entre personas adultas mayores, mujeres y hombres jóvenes. Estos grupos presentan altos niveles de malestar emocional, estrés y falta de acceso a atención especializada. Esta dimensión es una de las más interconectadas del índice, influida por factores económicos, ambientales, sociales y simbólicos que generan afectaciones psicosociales progresivas y desatendidas, y que requieren respuestas urgentes e integrales.

En Ciudad Juárez, aunque la situación general es preocupante, uno de los hallazgos más relevantes es que buena parte de los niveles de inseguridad humana se explican por la falta de acceso a mecanismos de protección eficaces. Esto significa que sí existen oportunidades de mejora: si los distintos actores — instituciones, sociedad civil, sector privado y ciudadanía— se articulan y colaboran a nivel de ciudad, zona y comunidad, es posible fortalecer esos sistemas de protección y construir entornos más seguros. Este esfuerzo requiere tanto políticas públicas robustas como procesos sostenidos de empoderamiento ciudadano.

Frente a esta realidad, los enfoques de seguridad humana ofrecen un marco transformador: promueven respuestas centradas en las personas, integrales, contextualizadas y orientadas a la protección, especialmente de los más vulnerables, así como a la prevención de que dichas vulnerabilidades se profundicen o amplíen.

A diferencia de las aproximaciones tradicionales centradas en el control y la prevención del delito, estos enfoques buscan fortalecer simultáneamente la protección institucional, el empoderamiento de las comunidades, la solidaridad social y la co-construcción de entornos seguros⁴. En este sentido, los resultados del índice no solo permiten dimensionar la magnitud del problema, sino que aportan evidencia práctica y medible para diseñar intervenciones más justas, eficaces y sostenibles en Ciudad Juárez.

Recomendación general: Abordar las causas estructurales de la inseguridad y la violencia desde una perspectiva sistémica y multidimensional

Dado que las amenazas a la seguridad humana se manifiestan de forma simultánea en múltiples dimensiones —económica, ambiental, política, personal, comunitaria, ontológica, entre otras— las respuestas también deben ser sistémicas. No se trata de sumar programas fragmentados, sino de construir intervenciones que reconozcan las conexiones entre problemas estructurales y trabajen de manera transversal sobre ellos.

Por ejemplo, las deficiencias en infraestructura urbana no solo afectan la seguridad ambiental, sino también la seguridad en salud, la dignidad (seguridad ontológica) e incluso la seguridad personal. De igual forma, la exclusión de jóvenes y adolescentes de los procesos participativos y comunitarios afecta su seguridad política, debilita su sentido de pertenencia y relevancia social.

En este marco, por ejemplo, diseñar estrategias integrales y programas de mejoramiento barrial, que combinen inversión en infraestructura con ejercicios y espacios de participación sustantiva de mujeres y jóvenes, puede impactar múltiples dimensiones al mismo tiempo y ayudar a reconstruir vínculos sociales e institucionales.

Transformar los sistemas que producen inseguridad humana requiere cambiar los paradigmas que los sostienen. Por ejemplo, desplazar el enfoque de seguridad centrado únicamente en el control del delito hacia uno orientado a garantizar condiciones para el ejercicio pleno de los derechos constituye, en sí mismo, una palanca de cambio estructural con un alto potencial de transformación profunda y duradera.

Un paso concreto hacia esa transformación sería institucionalizar el enfoque de seguridad humana en el diseño, implementación y evaluación de políticas y programas, asegurando así que las respuestas estatales se alineen con las necesidades reales y multidimensionales de la población.

⁴ Ver: UNHSTF (2016) y PNUD (2022)

Caso Destacado: Colonia 16 de Septiembre

Seguridad humana aplicada a escala comunitaria

Entre 2022 y 2023, en el marco del Programa Ciudades más Seguras de ONU-Hábitat y con apoyo del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana (UNTFHS), el municipio de Ciudad Juárez diseñó un Plan de Seguridad Humana para la colonia 16 de Septiembre. Esta colonia fue seleccionada como piloto por su alto nivel de vulnerabilidad, pero también por sus capacidades institucionales y comunitarias. El plan se construyó a partir de una evaluación participativa con residentes, niñas, niños, adolescentes, mujeres y organizaciones de la sociedad civil.

El resultado fue un plan de acción integral a cinco años, con medidas a corto, mediano y largo plazo, centrado en siete dimensiones de la seguridad humana. Su implementación comenzó en 2024 bajo el liderazgo de la Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en articulación con organizaciones comunitarias activas en el territorio.

Aunque el Índice Glocal no fue diseñado para evaluar directamente el impacto del plan, los datos recogidos en esta colonia muestran señales iniciales de mejora: niveles comparativamente más bajos de vulnerabilidad en seguridad personal, comunitaria, política y ontológica, y mayores niveles de confianza institucional, en contraste con otras zonas de la ciudad. Estos avances son relevantes, ya que el diagnóstico participativo previo había identificado como problemas prioritarios la violencia institucional, la falta de respuesta policial, los asaltos y robos frecuentes, la violencia en espacios familiares, el acoso en vía pública y la estigmatización de jóvenes.

Si bien aún persisten desafíos importantes en las dimensiones económica y ambiental, que requieren acciones a mediano y largo plazo, los avances iniciales sugieren que es posible integrar la seguridad humana al diseño de estrategias locales y comunitarias.

Cuando se adopta el enfoque de seguridad humana como principio orientador, es posible generar intervenciones más justas, contextualizadas y sostenibles desde el nivel sublocal. El caso de la colonia 16 de Septiembre es un ejemplo esperanzador de que la co-producción de iniciativas con la comunidad puede potenciar transformaciones de realidades complejas con enfoque de derechos y corresponsabilidad.

Recomendaciones específicas: estrategias clave para activar el cambio

A lo largo del informe se presentan recomendaciones detalladas por dimensión de la seguridad humana y por grupo poblacional en situación de vulnerabilidad. Esta sección, en cambio, sintetiza un conjunto de estrategias clave orientadas a activar transformaciones estructurales, intersectoriales y sostenibles, que aborden la inseguridad humana desde una perspectiva sistémica y multidimensional.

1. Adoptar estrategias de seguridad humana con enfoque territorial

Priorizar zonas con mayores niveles de vulnerabilidad (como el Suroriente y el Norponiente), mediante programas que aborden simultáneamente condiciones físicas (infraestructura, servicios), sociales (cohesión, participación) e institucionales (presencia estatal, acceso a justicia y salud).

2. Fortalecer la confianza institucional, especialmente en la policía, mediante enfoques de proximidad social, prevención social de la violencia, justicia cívica y protección de derechos

Fortalecer y ampliar estrategias de proximidad policial e integrar servicios sociales sensibles al trauma en las zonas más afectadas. Es fundamental avanzar en la transparencia, la rendición de cuentas y el acompañamiento comunitario sostenido, así como reducir las interacciones abusivas entre policías y jóvenes, promoviendo un enfoque policial centrado en la protección de derechos.

3. Fortalecer programas con enfoque generacional e interseccional para proteger a los más vulnerables

Reconocer que mujeres, adolescentes, jóvenes y personas mayores enfrentan patrones específicos de vulnerabilidad. Las políticas deben adaptarse a sus realidades particulares e incluir su participación activa en el diseño, implementación y evaluación.

4. Impulsar programas multisectoriales de empoderamiento juvenil que promuevan la inclusión y garanticen la protección integral de los derechos de adolescentes y jóvenes

Implementar programas integrales que, desde una coordinación multisectorial —educación, salud, desarrollo urbano, cultura, empleo, protección y participación—, reconozcan y empoderen a adolescentes y jóvenes como titulares de derechos y agentes de transformación social. Estos programas deben trascender la lógica del riesgo y centrarse en la creación de entornos seguros, inclusivos y dignos para la juventud, tanto físicos como digitales.

6. Incorporar enfoques basados en trauma en las políticas públicas y comunitarias

Reconocer y reparar los impactos del trauma social causado por la violencia, considerando que aproximadamente una de cada cinco personas —más del 22% de la población— ha perdido a un ser querido por hechos violentos en los últimos cinco años. Estos enfoques deben integrarse en programas de educación, salud mental, prevención de la violencia y participación comunitaria.

7. Ampliar el acceso universal y digno a servicios de salud física y mental

Mejorar la cobertura territorial, reducir el estigma y garantizar el acceso gratuito y oportuno, especialmente en contextos de exposición prolongada a violencia y estrés crónico. Se debe fortalecer la prevención de enfermedades crónicas en personas mayores y promover la salud mental comunitaria sin estigmas.

8. Mejorar el entorno urbano mediante intervenciones participativas

La precariedad urbana incrementa la inseguridad ontológica, emocional y física. Invertir en infraestructura, alumbrado, transporte y áreas verdes no solo mejora la calidad de vida, sino que también refuerza la dignidad y el sentido de pertenencia. Estas intervenciones deben incorporar mecanismos de participación ciudadana en su diseño y ejecución.

9. Recuperar el espacio público para la vida comunitaria

Promover transformaciones urbanas que faciliten la convivencia, programación cultural nocturna, convivencia intergeneracional y apropiación comunitaria del entorno. Esto fortalece la cohesión social y reduce la exposición y la percepción de riesgo.

10. Reforzar la capacidad organizativa de las comunidades

Fomentar el capital social mediante redes vecinales, mecanismos comunitarios de resolución de conflictos y proyectos que fortalezcan la identidad, los vínculos y acción colectiva.

11. Fortalecer estructuras de gobernanza participativa

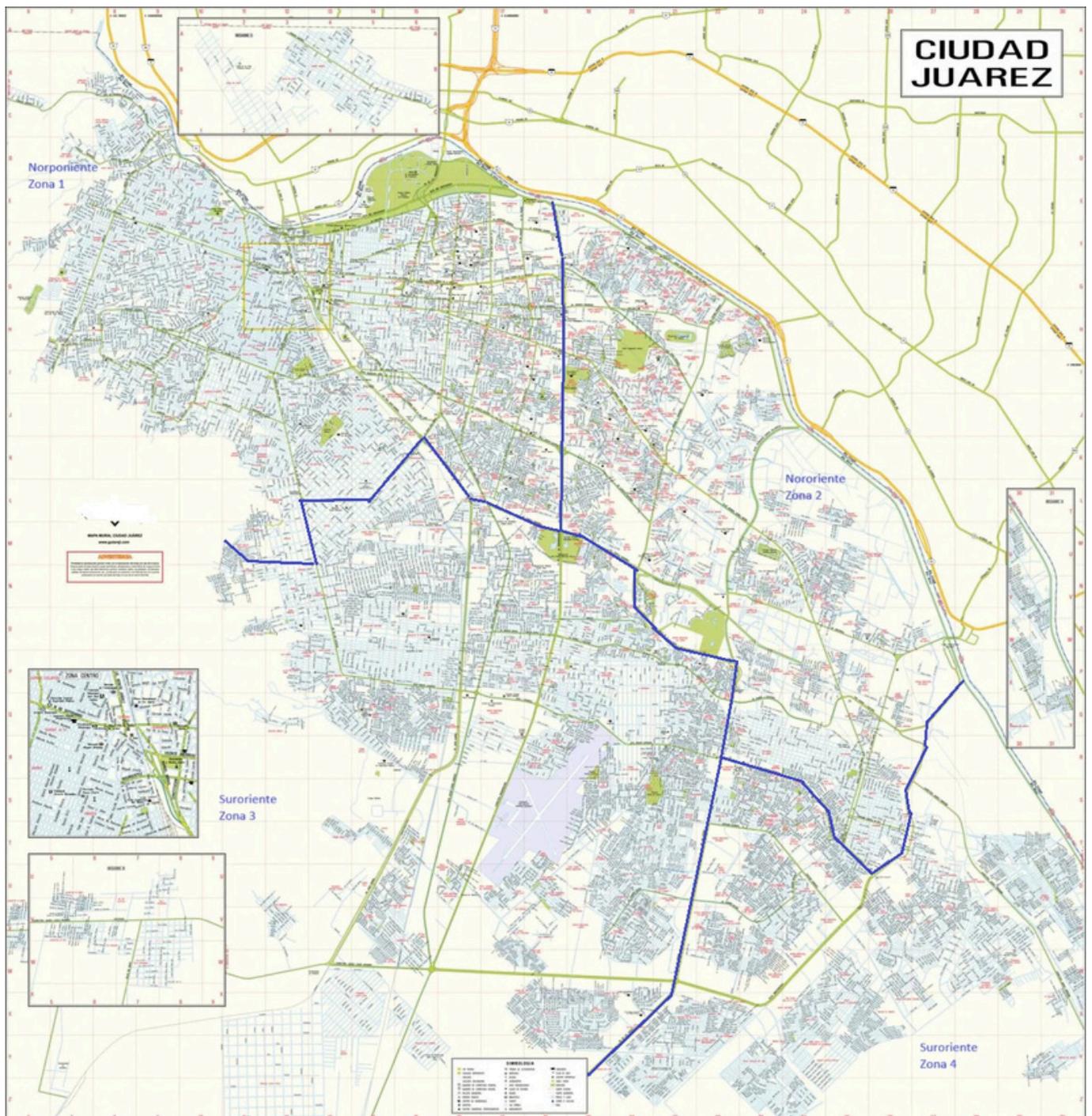
Reformar y revitalizar los mecanismos de participación ciudadana para que permitan una incidencia real en las decisiones que afectan a los territorios. Es fundamental incluir activamente a jóvenes, mujeres y adultos mayores en estos espacios.

El Índice Glocal de Seguridad Humana no es una herramienta exclusiva para gobiernos o instituciones, sino un instrumento para toda la ciudad: sociedad civil, sector privado, comunidad académica, medios de comunicación, y ciudadanía organizada.

Construir seguridad humana exige alianzas sostenidas, corresponsabilidad social y acción colectiva. Solo así será posible transformar las condiciones estructurales que perpetúan la inseguridad y avanzar hacia una Ciudad Juárez más justa, digna y segura para todas las personas.



7. Apuntes Metodológicos



Apuntes Metodológicos

¿Este índice mide la percepción de seguridad?

No. El Índice Glocal de Seguridad Humana mide la experiencia integral de seguridad que viven las personas y no únicamente la percepción de seguridad. Esta experiencia se construye a partir de una combinación de realidades objetivas y condiciones medibles —como el grado de exposición a amenazas, el acceso efectivo a servicios de protección o la posibilidad real de ejercer derechos—, junto con percepciones subjetivas que reflejan cómo las personas interpretan y sienten su entorno. Por ejemplo, alguien puede no haber sufrido una agresión directa el último año, pero sentirse inseguro si percibe que las instituciones no están en capacidad de protegerle. El índice capta esta complejidad al evaluar qué tan vulnerables son y se sienten las personas frente a distintas amenazas, considerando tanto las condiciones estructurales como sus significados vividos. Esta mirada permite entender la seguridad humana no solo como la ausencia de riesgo, sino como la presencia activa de condiciones que resguardan la vida, la dignidad y los derechos.

¿Cómo permite el índice comparaciones entre ciudades con contextos distintos?

La generación del Índice Glocal de Seguridad Humana se basa en una metodología mixta que combina una etapa cualitativa con otra cuantitativa, lo que permite adaptar el instrumento a contextos específicos sin sacrificar su comparabilidad global. El índice se compone de clústeres de indicadores generales que abarcan las distintas dimensiones de la seguridad humana y que pueden aplicarse en contextos urbanos o rurales, tanto del norte como del sur global. Esta estructura facilita la comparación entre ciudades y comunidades de distintos países y continentes. Sin embargo, los indicadores se ajustan a las particularidades del entorno local mediante un proceso riguroso y participativo.

En la primera etapa, de carácter cualitativo, se realiza un diagnóstico participativo que permite comprender las dinámicas locales de inseguridad humana a través de metodologías cualitativas, análisis sistémico y mapeo de actores. Esta fase incluye la recolección de información con habitantes, líderes y lideresas

comunitarias, prestadores de servicios esenciales y otros actores clave del territorio, así como la revisión de fuentes secundarias disponibles. Con base en estos insumos, se ajustan los indicadores, se afinan las preguntas de la encuesta y se contextualiza el lenguaje y los ejemplos utilizados.

En la segunda etapa, de enfoque cuantitativo, se diseña y aplica una encuesta representativa y, mediante el uso de software especializado, se generan los puntajes individuales y agregados que permiten un análisis integral de la seguridad humana. Esta medición permite diferenciar condiciones de vulnerabilidad por zonas geográficas, por grupos poblacionales y por niveles de intensidad.

Gracias a esta combinación de estructura comparativa y sensibilidad local, el índice refleja tanto los patrones estructurales de inseguridad humana como las experiencias vividas en cada contexto, y abre la posibilidad de generar análisis y aprendizajes cruzados entre ciudades y territorios del mundo.

¿Por qué el índice mide la seguridad humana con un enfoque de nueve dimensiones?

El índice mide la seguridad humana a través de un enfoque multidimensional que permite captar con mayor precisión y profundidad la diversidad de factores y condiciones que afectan a diario el bienestar, la dignidad y la autonomía de las personas.



Para ello, contempla nueve dimensiones de la vida — cuatro prioritarias y cinco complementarias— para responder a la necesidad de entender la seguridad como un fenómeno integral, relacional y contextual. Los enfoques tradicionales de seguridad humana — como el propuesto por el PNUD en 1994— se centran en siete dimensiones (personal, económica, alimentaria, en salud, ambiental, comunitaria y política). Este índice amplía el marco al incorporar la seguridad tecnológica y la seguridad ontológica, lo que representa una innovación conceptual y metodológica clave.

La seguridad tecnológica reconoce que, aunque las tecnologías están mejorando aspectos de nuestras vidas, también generan nuevas formas de vulnerabilidad: exclusión por falta de acceso, violencia en entornos digitales, desinformación y exposición a sistemas de vigilancia o control que pueden profundizar la estigmatización y discriminación social de ciertos grupos. Incluir esta dimensión —como lo sugiere el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana (UNTFHS)— permite reflejar cómo la desigualdad también se reproduce en espacios virtuales.

Por su parte, la seguridad ontológica se refiere a la protección del derecho a la dignidad y al sentido de relevancia social de las personas: sentirse valorada, respetada, reconocida y con un lugar en la comunidad. Esta dimensión visibiliza daños que no siempre son físicos o materiales, pero que afectan profundamente la autoestima, el sentido de pertenencia y los proyectos de vida de las personas. Diversas investigaciones en psicología han demostrado que este sentido de significancia social es un componente fundamental del bienestar psicológico, con efectos comprobados en la salud mental, la resiliencia emocional, la participación cívica y en el riesgo de violencia, tanto en términos de victimización como de involucramiento en conductas violentas⁵.

Incorporar ambas dimensiones actualiza y profundiza el enfoque de seguridad humana, adaptándolo a los desafíos contemporáneos y poniendo en el centro no solo la protección, sino también la reconstrucción del tejido social y simbólico.

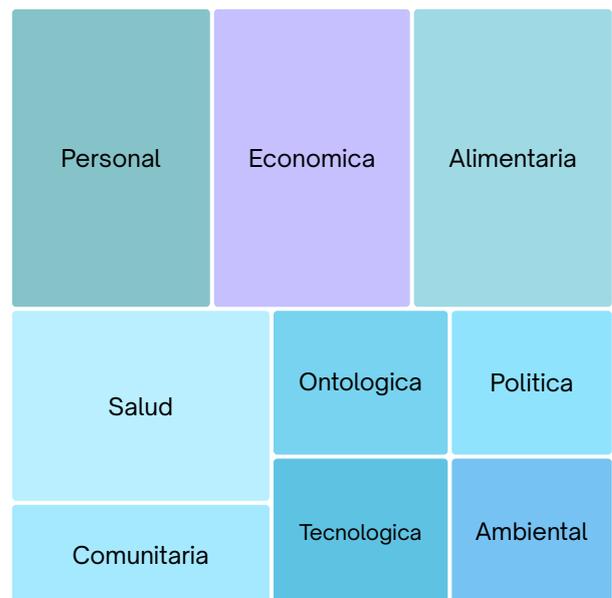
¿Por qué se consideran cuatro dimensiones prioritarias?

El Índice incorpora un enfoque integral que reconoce la multiplicidad de factores que inciden en el bienestar de las personas. Sin embargo, dentro de este marco amplio, se han definido cuatro dimensiones como prioritarias: seguridad personal, económica, alimentaria y en salud. Estas dimensiones no solo reflejan aspectos críticos de la experiencia cotidiana de las personas, sino que constituyen condiciones mínimas necesarias e interdependientes para la vida digna y la autonomía.

La seguridad personal garantiza la protección frente a la violencia y permite participar libremente en la vida social; la seguridad económica ofrece medios estables de subsistencia y previene la exclusión estructural; la seguridad alimentaria asegura el acceso regular a alimentos adecuados para el desarrollo físico y emocional; y la seguridad en salud, tanto física como mental, es un derecho básico que determina el bienestar general. Juntas, estas dimensiones conforman la base sobre la cual se sostienen todas las demás formas de seguridad humana.

Estas cuatro dimensiones se priorizan no solo porque resumen necesidades vitales e inmediatas, sino porque son los principales puntos de quiebre cuando se produce una situación de crisis o vulneración de derechos. En ese sentido, son también las primeras dimensiones que deben ser garantizadas para avanzar hacia otras formas de seguridad humana más estructurales y transformadoras, como la seguridad comunitaria, política, ambiental, tecnológica u ontológica.

Imagen 3. Dimensiones de la Seguridad Humana que mide el Índice con sus pesos



¿Cómo se generan los puntajes del índice?

El Índice Global de Seguridad Humana se construye a partir de una combinación de indicadores objetivos y subjetivos (ver anexo), diseñados para captar cómo varía la experiencia de seguridad que viven las personas. Esta medición parte del análisis de tres componentes clave en cada dimensión de la seguridad humana:

1. Exposición a amenazas: ¿Qué tan expuesta estuvo la persona durante el último año a situaciones que ponen en riesgo su vida, sustento o derechos?

⁵ Ver por ejemplo el trabajo de Billingham y Irwin-Rodgers (2022)

2. Acceso a mecanismos de protección: ¿Qué tan accesibles y eficaces fueron los recursos, servicios o apoyos para protegerse o recuperarse frente a esas amenazas?

3. Libertad para ejercer derechos: ¿Qué tanto margen tuvo la persona para ejercer sus derechos de manera plena y sin restricciones?

Cada respuesta en la encuesta recibe un puntaje asignado, y con base en el conjunto de respuestas de cada persona se calcula su nivel en cada uno de estos tres componentes dentro de cada dimensión. Así, el índice permite construir un retrato detallado de la vulnerabilidad en cada una de las nueve dimensiones, integrando estos tres componentes fundamentales.

El cálculo de los puntajes por dimensión se realiza a través de un promedio ponderado, en el cual se otorga mayor peso a la exposición a amenazas, por considerarse el factor que más determina de forma inmediata la experiencia de seguridad. A partir de este puntaje ponderado, se clasifica a cada persona en cuatro niveles de vulnerabilidad: baja, media, alta y extrema.

Este análisis se enmarca en un enfoque sistémico, que reconoce que muchos factores afectan de manera simultánea múltiples dimensiones. Por ejemplo, la exposición a violencia no solo compromete la seguridad personal, sino que también impacta la seguridad en salud al generar traumas físicos y emocionales. Del mismo modo, el riesgo de perder los ingresos no solo afecta la dimensión económica, sino también la seguridad alimentaria y en salud. De igual forma, condiciones del entorno urbano —como la falta de infraestructura, el deterioro ambiental o el abandono institucional— pueden afectar de forma simultánea la seguridad ambiental, seguridad en salud y la seguridad ontológica. Estas interrelaciones se identifican a partir de evidencia académica existente y de un análisis sistémico contextualizado que se realiza en cada territorio. En el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo, se desarrolló un mapa sistémico que identifica las conexiones entre fenómenos de inseguridad que afectan la vida cotidiana de las personas.

Una vez calculados los puntajes por dimensión para cada persona, se pasa a determinar su nivel de (in)seguridad humana, calculando la intensidad ponderada de la inseguridad. Esta se define como la fracción ponderada de dimensiones en las que una persona presenta niveles de vulnerabilidad media, alta o extrema. Para este cálculo las dimensiones se ponderan dando mayor peso a las prioritarias: seguridad personal, económica, alimentaria y en salud, ya que están directamente vinculadas con la supervivencia y el bienestar básico.

Con base en esta intensidad, las personas se clasifican en cuatro niveles de inseguridad humana: Leve, Moderada, Sustancial, Severa. Este tipo de modelos escalonados para clasificar niveles de vulnerabilidad e inseguridad ha sido utilizado en trabajos previos, como la propuesta metodológica de Werthes, Heaven y Vollnhals (2011), que sentó bases importantes para diferenciar grados de inseguridad humana con criterios acumulativos y combinados. El presente índice retoma y desarrolla esa línea de trabajo, ampliando las dimensiones consideradas, e incorporando un enfoque sistémico y glocal que permite su aplicación comparativa en diversas realidades locales.

Finalmente, para calcular el índice agregado de seguridad humana por ciudad, zona o colonia, se utiliza una adaptación del modelo Alkire-Foster⁶. Este modelo combina dos elementos:

1. La proporción de personas que experimentan inseguridad humana (a partir del umbral definido como quienes tienen niveles moderado, sustancial o severo), y
2. La intensidad promedio de esa inseguridad de ese grupo de personas.

La multiplicación de estos dos valores, se resta de uno, para obtener el índice glocal de seguridad humana. El índice tiene un valor numérico entre 0 y 1, donde 0 representa la peor situación posible, es decir, que toda la población se encuentra en condiciones de inseguridad severa y 1 indica el estado óptimo, es decir, una seguridad humana perfecta, en la que nadie experimenta niveles de inseguridad superiores al nivel leve (el más bajo en la escala de inseguridad humana del índice).

Este método permite generar puntajes comparables entre distintas zonas geográficas y entre ciudades, respetando al mismo tiempo las especificidades del contexto local y reflejando la realidad vivida por las personas en su propio entorno

Datos de la encuesta de seguridad humana en Ciudad Juárez

El Índice Glocal de Seguridad Humana fue construido a partir de información primaria recolectada mediante la Encuesta de Seguridad Humana-2024 aplicada en Ciudad Juárez. A continuación, se presentan los principales detalles metodológicos de este ejercicio en la siguiente ficha técnica:

⁶ El método Alkire-Foster, desarrollado por Sabina Alkire y James Foster. Es una metodología ampliamente utilizada para medir fenómenos multidimensionales como la pobreza y el bienestar que combina un proceso de identificación, que determina quiénes experimentan múltiples privaciones, con un proceso de agregación que cuantifica tanto la incidencia como la intensidad de dichas privaciones. Este modelo fue adaptado para comparar la seguridad en diferentes ciudades y zonas urbanas.

Ficha Técnica de la Encuesta

Encuesta de Seguridad Humana de Ciudad Juárez 2024	
Universo de estudio	Personas mayores de 15 años residentes en Ciudad Juárez
Tamaño de la muestra	384 personas encuestadas
Cobertura geográfica	Ciudad Juárez (Zonas: Norponiente, Nororiente, Surponiente, Suroriente)
Tipo de Muestreo	Probabilístico polietápico (AGEB, manzana, vivienda, informante)
Nivel de Confianza	95%
Margen de Error	5%
Variabilidad	$p=q=0.5$
Fecha de levantamiento	Encuesta presencial entre 29 de noviembre y 1 de diciembre 2024
Diseño del cuestionario	Adaptado localmente con validación participativa
Duración promedio	20 minutos por encuesta

Colaboradores del Índice Glocal de Seguridad Humana



Ciudad Juárez, Noviembre 2024

Equipo en Campo:

Angélica Bañuelos * Armida Muñoz * Azucena Martínez Martínez * Carmen Pérez * Flor Vanessa Aguilar * Graciela Velázquez * Gregoria Acosta * Irma Mercado * Jesus Alberto Salazar Castro * Karla Meraz Cuacinqu * Lili Ana Calderón Gamez * Lilia Ávila * Luz Angélica Orozco * Luz María Ibañez * Luisa Ocejo * Marco Acevedo * Mario Martínez * Miriam Vega Herrera * Rosario Alicia Esparza * Uzziel Martínez

Cartografía:

Liliana De Haro

Asesoría de Estrategia de Comunicaciones:

Cindy Abello

Créditos fotográficos:

Las imágenes incluidas en este informe provienen de diversas fuentes. Agradecimientos especiales a:

- Adrián Alfredo Blanco (Ciudad Juárez). Fotografías cedidas por el autor para uso exclusivo en este informe.
- Israel Torres, Leon Ardho, Joice Rivas, Andres Carreón y Dante Muñoz. Fotografías disponibles en la plataforma Pexels.com bajo licencia de uso libre.
- Miss Pueblos Mágicos. Fotografías disponibles en la plataforma Pexels.com bajo licencia de uso libre.

Algunas ilustraciones fueron creadas mediante herramientas de generación de imágenes por inteligencia artificial (IA) (ChatGPT/Canva). Todas las imágenes se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no se deben reproducir sin el consentimiento correspondiente.

8. Referencias

Abello Colak, A. (2023). Mapping Systems of Human (In)security To Understand the COVID-19 Pandemic's Enduring Impact on Urban Violence. *Violence, Security and Peace Working Papers*, No. 3. London: LSE Latin America and Caribbean Centre.

Alkire, S., Foster, J. E., Seth, S., Santos, M. E., Roche, J. M., & Ballon, P. (2015). *Multidimensional Poverty Measurement and Analysis*, Oxford: Oxford University Press

Billingham, L., & Irwin-Rogers, K. (2022). *Against Youth Violence: A Social Harm Perspective*. Bristol University Press.

Martínez, W.L. y Velázquez, M.S. (2010). Percepción Ciudadana sobre Inseguridad en Ciudad Juárez (EPCIJ), en Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas del Municipio de Juárez, Chihuahua, México. Boletín número 3, pp. 49-57.
https://www.uacj.mx/ICSA/Observatorio-Seguridad-Convivencia-Ciudadanas-Municipio-Juarez/documentos/Boletin_Observatorio_Num_3.pdf

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2022). *Las nuevas amenazas para la seguridad humana en el Antropoceno: Exigiendo mayor solidaridad*. Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano.

Werthes, S., Heaven, C., Vollnhals, S. (2011) *Assessing Human Insecurity Worldwide: The Way to A Human (In)Security Index*. Institute for Development and Peace, University of Duisburg-Essen (INEF-Report 102/2011).

United Nations Trust Fund for Human Security. (2016). *Human Security Handbook*. United Nations. <https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2017/10/h2.pdf>

9. Anexos



Anexo 1. Lista de Clústeres de Indicadores

No.	Indicadores de Exposición a Amenazas
1	Exposición a Violencia física y psicológica (en el Hogar, la escuela, sitios públicos, o el trabajo, online/ social media)
2	Exposición a violencia policial
3	Victimización
4	Riesgo de reclutamiento por parte de grupos ilegales
5	Percepción de seguridad
6	Riesgos a la generación de ingreso básico
7	Suficiencia de los ingresos actuales
8	Riesgo a la tenencia de la propiedad
9	Riesgo a ver ingresos y medios de vida reducidos de forma arbitraria, repentina o violenta
10	Riesgo de desnutrición por falta de ingresos, inflación o desabastecimiento
11	Exposición a amenazas a la salud física y mental
12	Exposición a formas de represión y límites a la participación
13	Exposición a factores que debilitan el tejido social
14	Exposición a ambientes adversos para la salud y la vida digna
15	Riesgo de ser damnificado a consecuencia de una emergencia o desastre natural
16	Exposición a estereotipos negativos, devaluación, deshumanización o estigmatización
17	Exposición a amenazas a la identidad social / límites a la identidad / discriminación
18	Exposición a riesgos digitales
19	Exposición a efectos negativos del uso de nuevas tecnologías en el trabajo
20	Exposición a efectos negativos de las redes sociales

No.	Indicadores de Acceso a Protección
1	Acceso a instituciones públicas que proveen protección
2	Acceso a mecanismos de protección comunitaria
3	Percepción del servicio de protección que ofrecen instituciones públicas claves
4	Acceso a ayudas económicas de emergencia
5	Acceso a vivienda
6	Acceso a créditos legales y seguros
7	Acceso a mecanismos de protección económica
8	Acceso a lugares de provisión de alimentos para grupos vulnerables
9	Acceso a servicios de salud (oportuno, eficiente y asequible)
10	Confianza en la capacidad de las instituciones de actuar conforme a principios d
11	Capacidad comunitaria para resolver de conflictos
12	Capacidad de organización comunitaria
13	Acceso a espacios urbanos que permitan tener una vida sana
14	Acceso a redes de apoyo
15	Percepción del nivel de relevancia frente a instituciones publicas
16	Acceso a información y guía para el buen uso de la tecnología

No.	Indicadores de Libertad para Ejercer y Disfrutar Derechos
1	Libertad para movilizarse y usar el espacio público sin miedo
2	Libertad para acceder a empleos y fuentes de ingreso dignas
3	Acceso a comida en cantidad y calidad necesarias para una vida saludable
4	Acceso a una vivienda adecuada
5	Libertad para disfrutar del mas alto nivel posible de salud física, mental y emocional
6	Libertad para ejercer el derecho a la libre expresión y a la participación en asuntos públicos
7	Libertad para vivir en una comunidad que funciona como sistema de apoyo
8	Libertad para disfrutar de un ambiente seguro saludable y sostenible
9	Disfrute de significancia social
10	Disfrute del derecho a la dignidad
11	Acceso a los beneficios de la tecnología

10. Equipo Responsable del Informe



Alexandra Abello Colak

Directora fundadora de *Security 4 Peace* e investigadora asociada de la *London School of Economics* (LSE). Alexandra es una académica con más de 15 años de experiencia investigando dinámicas de violencia e inseguridad humana en múltiples ciudades de América Latina, el Caribe y Sudáfrica, y desarrollando innovaciones metodológicas para la co-producción de conocimiento.



Alan Pavel Vallejo Chavarría

Co-fundador y consultor principal de NOS Catalyst. Acompañante estratégico de la Coordinación Nacional del Diálogo Nacional por la Paz en México. Consultor experto, facilitador y formador en estrategias de construcción de paz, transformación positiva de conflictos, seguridad humana y reconstrucción del tejido social en contextos de alta complejidad en América Latina.



María del Socorro Velázquez Vargas

Profesora-investigadora del *Departamento de Ciencias Sociales de la UACJ*. Consultora de CEPAL y parte del Cuerpo Académico de Estudios Regionales en Economía, Población y Desarrollo. Experta en migración interna e internacional, mercados de trabajo, seguridad ciudadana, y dinámica demográfica.



Wilebaldo L. Martínez Toyés

Profesor-investigador del *Departamento de Ciencias Sociales de la UACJ* con más de 20 años de trayectoria. Consultor de CEPAL y parte del Cuerpo Académico de Estudios Territoriales en Economía, Población y Desarrollo, donde cultiva la línea de investigación en Estudios de Población. Wilebaldo ha sido coordinador de diversas encuestas con alcance municipal y estatal. Experto en temas migratorios, mercados laborales y dinámicas demográficas.



www.security4peace.org